



ANEXOS

ANEXO 1

Facultades y atribuciones de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza

Artículo 9. El Comité Coordinador tendrá las siguientes facultades:

- I. Elaborar su programa anual de trabajo;
- II. Establecer las bases y principios para la efectiva coordinación de sus integrantes;
- III. El diseño, aprobación y promoción de la política estatal en la materia, así como su evaluación periódica, ajuste y modificación. Esta política deberá atender por lo menos la prevención, el fomento a la cultura de la legalidad, la debida administración de los recursos públicos, la adecuada administración de riesgos y la promoción de la cultura de integridad en el servicio público;
- IV. Aprobar la metodología de los indicadores para la evaluación a que se refiere la fracción anterior, con base en la propuesta que le someta a consideración la Secretaría Ejecutiva;
- V. Tener acceso a la información pública necesaria, adecuada y oportuna para el mejor desempeño de sus funciones;
- VI. Establecer las bases para la determinación de perfiles de las áreas de riesgo de los distintos Entes Públicos;
- VII. Conocer el resultado de las evaluaciones que realice la Secretaría Ejecutiva y, con base en las mismas, acordar las medidas a tomar o la modificación que corresponda a las políticas integrales;
- VIII. Requerir información a los Entes Públicos respecto del cumplimiento de la política estatal y las demás políticas integrales implementadas; así como recabar datos, observaciones y propuestas requeridas para su evaluación, revisión o modificación de conformidad con los indicadores generados para tales efectos;
- IX. Establecer un Sistema Estatal de Información que integre y conecte los diversos sistemas electrónicos que posean datos e información necesaria para que el Comité Coordinador pueda establecer políticas integrales, metodologías de medición y aprobar los indicadores necesarios para que se puedan evaluar las mismas;
- X. Establecer un Sistema Estatal de Información que integre y conecte los diversos sistemas electrónicos que posean datos e información necesaria para que las autoridades competentes tengan acceso a los sistemas a que se refiere el Título Cuarto de esta ley, sin detrimento de los lineamientos que para estos efectos emita el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción;
- XI. Celebrar convenios de coordinación, colaboración y concertación necesarios para el cumplimiento de los fines del Sistema Estatal;
- XII. La emisión de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia, los riesgos identificados, los costos potenciales generados y los resultados de sus recomendaciones, en los cuales se incluirá las respuestas de los Entes Públicos. Dicho informe será el resultado de las evaluaciones realizadas por la Secretaría Ejecutiva y será aprobado por la mayoría de los integrantes del Comité Coordinador, los cuales podrán realizar votos particulares, concurrentes o disidentes, sobre el mismo y deberán ser incluidos dentro del informe anual;

- XIII. Con el objeto de garantizar la adopción de medidas dirigidas al fortalecimiento institucional para la prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como para mejorar el desempeño del control interno, el Comité Coordinador emitirá recomendaciones públicas no vinculantes ante las autoridades respectivas y les dará seguimiento en términos de esta ley;
- XIV. El seguimiento y la aplicación a nivel local de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información, elaborados por el Sistema Nacional que sobre estas materias generen las instituciones competentes de los órdenes de gobierno; y,
- XV. Las demás que le atribuye la presente ley, así como las señaladas en otras leyes y disposiciones aplicables.

Artículo 21. El Consejo de Participación Ciudadana tendrá las siguientes atribuciones:

- I. Aprobar sus normas de carácter interno;
- II. Elaborar su programa de trabajo anual;
- III. Aprobar el informe anual de las actividades que realice en cumplimiento a su programa anual de trabajo, mismo que deberá ser público;
- IV. Participar en la Comisión Ejecutiva en términos de esta ley;
- V. Acceder sin ninguna restricción, por conducto del Secretario Técnico, a la información que genere el Sistema Estatal;
- VI. Opinar y realizar propuestas, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, sobre la política estatal y las políticas integrales;
- VII. Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, para su consideración:
 - a. Proyectos de bases de coordinación interinstitucional e intergubernamental en las materias de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan;
 - b. Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para la operación del Sistema Estatal de Información y su coordinación para la integración de la información del estado a la Plataforma Digital Nacional;
 - c. Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos para el suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que generen las instituciones competentes de los diversos órdenes de gobierno en las materias reguladas por esta ley;
 - d. Proyectos de mejora a los instrumentos, lineamientos y mecanismos requeridos para la operación del sistema electrónico de denuncia y queja.
- VIII. Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, mecanismos para que la sociedad del estado participe en la prevención y denuncia de faltas administrativas y hechos de corrupción;
- IX. Llevar un registro voluntario de las organizaciones de la sociedad civil que deseen colaborar de manera coordinada con el Consejo de Participación Ciudadana para establecer una red de participación ciudadana, conforme a sus normas de carácter interno;
- X. Opinar o proponer, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, indicadores y metodologías para la medición y seguimiento del fenómeno de la corrupción, así como para la evaluación del

- cumplimiento de los objetivos y metas de la política estatal y las políticas integrales y los programas y acciones que implementen las autoridades que conforman el Sistema Estatal;
- XI. Proponer mecanismos de articulación entre organizaciones de la sociedad civil, la academia y grupos ciudadanos;
 - XII. Proponer reglas y procedimientos mediante los cuales se recibirán las peticiones, solicitudes y denuncias fundadas y motivadas que la sociedad civil pretenda hacer llegar a la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas;
 - XIII. Opinar sobre el programa anual de trabajo del Comité Coordinador;
 - XIV. Realizar observaciones, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, a los proyectos de informe anual del Comité Coordinador;
 - XV. Proponer al Comité Coordinador, a través de su participación en la Comisión Ejecutiva, la emisión de recomendaciones no vinculantes;
 - XVI. Promover la colaboración con instituciones en la materia, con el propósito de elaborar investigaciones sobre las políticas públicas para la prevención, detección y combate de hechos de corrupción o faltas administrativas en el estado;
 - XVII. Dar seguimiento al funcionamiento del Sistema Estatal; y,
 - XVIII. Proponer al Comité Coordinador mecanismos para facilitar el funcionamiento de las instancias de contraloría social existentes, así como para recibir directamente información generada por esas instancias y formas de participación ciudadana.

Artículo 31. La Comisión Ejecutiva tendrá a su cargo la generación de los insumos técnicos necesarios para que el Comité Coordinador realice sus funciones, por lo que elaborará las siguientes propuestas para ser sometidas a la aprobación de dicho comité:

- I. Las políticas integrales en materia de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, así como de fiscalización y control de recursos públicos;
- II. La metodología para medir y dar seguimiento, con base en indicadores aceptados y confiables, a los fenómenos de corrupción, así como a las políticas integrales a que se refiere la fracción anterior;
- III. Los informes de las evaluaciones que someta a su consideración el Secretario Técnico respecto de las políticas a que se refiere este artículo;
- IV. Los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción;
- V. Las bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de los recursos públicos;
- VI. El informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de las funciones y de la aplicación de las políticas y programas en la materia;
- VII. Las recomendaciones no vinculantes que serán dirigidas a las autoridades que se requieran, en virtud de los resultados advertidos en el informe anual, así como el informe de seguimiento que contenga los resultados sistematizados de la atención dada por las autoridades a dichas recomendaciones, y
- VIII. Los mecanismos de coordinación con el Sistema Nacional.

Artículo 35. Corresponde al Secretario Técnico ejercer la dirección de la Secretaría Ejecutiva, por lo que contará con las facultades previstas en la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza.

El Secretario Técnico adicionalmente tendrá las siguientes facultades:

- I. Actuar como secretario del Comité Coordinador y del órgano de gobierno;
- II. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Comité Coordinador y del órgano de gobierno;
- III. Elaborar y certificar los acuerdos que se tomen en el Comité Coordinador y en el órgano de gobierno y el de los instrumentos jurídicos que se generen en el seno del mismo, llevando el archivo correspondiente de los mismos en términos de las disposiciones aplicables;
- IV. Elaborar los anteproyectos de metodologías, indicadores y políticas integrales para ser discutidas en la Comisión Ejecutiva y, en su caso, sometidas a la consideración del Comité Coordinador;
- V. Proponer a la Comisión Ejecutiva las evaluaciones que se llevarán a cabo de las políticas integrales a que se refiere la fracción VII del artículo 9 de esta ley, y una vez aprobadas realizarlas;
- VI. Realizar el trabajo técnico para la preparación de documentos que se llevarán como propuestas de acuerdo al Comité Coordinador, al órgano de gobierno y a la Comisión Ejecutiva;
- VII. Preparar el proyecto de calendario de los trabajos del Comité Coordinador, del órgano de gobierno y de la Comisión Ejecutiva;
- VIII. Elaborar los anteproyectos de informes del Sistema Estatal, someterlos a la revisión y observación de la Comisión Ejecutiva y remitirlos al Comité Coordinador para su aprobación;
- IX. Realizar estudios especializados en materias relacionadas con la prevención, detección y disuasión de hechos de corrupción y de faltas administrativas, fiscalización y control de recursos públicos por acuerdo del Comité Coordinador;
- X. Administrar el Sistema Estatal de Información que establecerá el Comité Coordinador, en términos de esta ley y asegurar el acceso a las mismas de los miembros del Comité Coordinador y la Comisión Ejecutiva;
- XI. Integrar los sistemas de información necesarios para que los resultados de las evaluaciones sean públicos y reflejen los avances o retrocesos en la política estatal anticorrupción, y
- XII. Proveer a la Comisión Ejecutiva los insumos necesarios para la elaboración de las propuestas a que se refiere la presente ley. Para ello, podrá solicitar la información que estime pertinente para la realización de las actividades que le encomienda esta ley, de oficio o a solicitud de los miembros de la Comisión Ejecutiva.

ANEXO 2

Informe final del proyecto: "Acompañamiento para diagnóstico base de la Política Estatal Anticorrupción de Coahuila"

Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C.

CONTENIDOS
1. Introducción y planteamiento conceptual.
2. Documento de diagnóstico: "Los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción en Coahuila".
3. Documento de diagnóstico: "La corrupción en el estado de Coahuila. Situación a partir de indicadores nacionales".
4. Recomendaciones.

Equipo de trabajo:

Dra. Lourdes Morales Canales (Coordinadora)

Mtro. Jaime Hernández Colorado

Mtra. Evelyn Guzmán Rojas

Mtra. Wendolyn Veana Segura

1. Introducción

El proyecto “Acompañamiento para diagnóstico base de la Política Estatal Anticorrupción de Coahuila” tuvo como objetivo contribuir con análisis y generación de propuestas para la articulación de la Política Estatal Anticorrupción en Coahuila, proceso que ha estado a cargo de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.

En la lógica de la política pública, la definición del problema y el estudio de sus alcances en un momento determinado permiten dar punto de inicio para la configuración de un modelo de atención que pueda resolver dicha situación anómala desde los orígenes y no limitarse a atender las causas. La discusión pública y legislativa que ha habido en México en el último lustro, al menos, respecto del problema de la corrupción ha llegado a un punto en el cual, más que confluencia en términos conceptuales, diferentes instancias públicas, privadas y de la sociedad civil han elegido el modelo conceptual de su preferencia. Esto no ha implicado, sin embargo, que exista desacuerdo respecto de dos puntos: (1) Que la corrupción es, junto a la violencia, el problema más importante, por las consecuencias sociales, políticas y económicas que genera, pero también que (2) La corrupción debe atenderse desde diferentes vertientes y con medios complementarios, siendo que se ha terminado constituyendo en un problema complejo y de manifestaciones diversas, a la vez que ha perfeccionado su capacidad de adaptación a las condiciones legales e institucionales que se han modificado en los últimos años en México. En un contexto en el cual se han asimilado — en el debate público— las reformas constitucionales y legales que dieron forma a la estrategia mexicana de combate a la corrupción, al tiempo que los espacios institucionales previstos se han terminado de construir, la atención de grupos y organizaciones interesados en el combate a la corrupción se encuentra puesta en la integración de las políticas estatales anticorrupción.

En el proceso de construcción de una política pública que pretende atender un problema de tal magnitud, no sólo es fundamental que se parta de un acuerdo conceptual básico respecto de la corrupción. De ahí que se proponga entenderla como un fenómeno que más que originarse en anomalías de las estructuras administrativas se articula a partir de las prácticas permitidas por éstas, en un paradigma de la administración que cancela la condición de *lo público* y considera a los bienes y medios usados por los funcionarios públicos un entramado que les pertenece, contrario a aquella idea según la cual lo público es de todos, abierto y de acceso generalizado. La corrupción, en tanto fenómeno de orígenes diversos y manifestaciones variadas, significa un sistema —no una anomalía— mediante el cual se cancela la condición de *público* de los bienes, servicios y medios

que, debiendo estar al servicio de todas las personas y encaminados a garantizar los derechos de éstas, terminan por convertirse en propiedad excluyente de unos cuantos y cancelando las rutas de acceso a los derechos de todos. De ahí que las consecuencias de la corrupción deban considerarse mucho más allá de sólo cálculos económicos, pues no sólo termina afectando la garantía de las personas a los derechos, bienes y servicios que les deben ser proporcionados, respaldados y asegurados, sino también contribuye a erosionar la legitimidad de las instituciones del Estado, en un proceso de desnaturalización mediante el cual esos espacios administrativos se transforman en maquinarias para cancelar lo público.

El contexto mexicano, después de la construcción de las leyes que dieron origen a los sistemas anticorrupción en el país, ha visto proliferar propuestas de modificaciones legislativas en el ámbito estatal, muchas de las cuales han sido motivo de controversia, pues pueden considerarse resultados deficientes de los procesos legislativos. En ese mismo sentido, los sistemas estatales anticorrupción han respondido, de forma disímil, al reto que les planteó la constitución y la legislación general. Uno de los ejemplos más claros de esta falta de homogeneidad en los esfuerzos estatales por el combate a la corrupción han sido las estrategias diferenciadas que han tomado los sistemas estatales para la construcción de las políticas anticorrupción.

El proceso de las políticas anticorrupción en México contabiliza ya más de dos años. Esto ha significado que, en el ámbito nacional, a tres años de iniciados los trabajos del Comité de Participación Ciudadana y a poco más de dos de configurado el espacio institucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, aún no exista la Política Nacional Anticorrupción (PNA). El documento que ha sido aprobado por la Comisión Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción, durante el primer semestre de 2019, todavía no es la PNA, pues carece de la aprobación del Comité Coordinador del sistema. En ese contexto de impasse, los sistemas estatales anticorrupción han permanecido en una suerte de pausa institucional, a la espera de la aprobación de la política de ámbito nacional. A pesar de que las políticas estatales deben encontrar alineación con la nacional, esto no significa que sean idénticas ni subsidiarias. De ahí que los esfuerzos de los estados que han tomado la iniciativa de avanzar en sus políticas anticorrupción son pertinentes, en tanto mantenerse a la espera no sólo ha sido poco útil, sino también ha significado faltar a la obligación que las leyes estatales han asignado en cada caso. Un elemento adicional que conviene discutir respecto de la configuración de las propuestas de políticas anticorrupción es que, si bien es deseable y de mucha utilidad recopilar información, propuestas y percepciones de los ciudadanos organizados, especialistas y población en general, esto no implica que la política pública debe convertirse en una

suerte de documento de buenas intenciones que tenga la pretensión de concitar la anuencia generalizada. Debe tenerse en cuenta que la política anticorrupción, como cualquier otra política pública, tiene la misión de atacar un problema público específico, desarrollar acciones para resolver y modificar positivamente las causas que lo originan y, en consecuencia, solucionarlo. Una política pública puede beneficiarse de la información que proveen los ciudadanos y también del acompañamiento de éstos, lo cual no significa que los elementos básicos de la política (*núcleo duro*, como le denomina Mauricio Merino) deban modificarse para adaptarse a la percepción general, más bien son un parámetro conceptual para propiciar la discusión pública sobre el problema y establecer los alcances y límites de ésta.

De ahí que el interés principal del proyecto que se reseña en este informe final ha sido la recopilación de información, el análisis de esta y la construcción, a manera de ejercicio inicial, de algunas recomendaciones que pueden incorporarse como líneas de política para la estrategia estatal en materia de combate a la corrupción en Coahuila. Esto implica que el resultado que se presenta en este documento tiene la capacidad de contribuir a dar bases a la propuesta de política anticorrupción de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Coahuila, pero también es el punto de partida para la discusión pública y abierta que se llevará a cabo en el proceso de socialización de la propuesta. Es decir, el acompañamiento ciudadano se promoverá a partir de líneas de discusión bien definidas, que permitan incorporar información y perspectivas adicionales, por parte de las organizaciones de la sociedad civil y ciudadanía en general, con una ruta clara y ordenada para extraer la mayor utilidad a los espacios de confluencia entre instituciones del sistema estatal y actores ciudadanos.

El proyecto ha incorporado la impartición de dos conferencias sobre el funcionamiento de los sistemas anticorrupción y el nuevo esquema de responsabilidades administrativas de los servidores públicos en México. Las conferencias fueron impartidas por las doctoras Lourdes Morales Canales y Ana Elena Fierro Ferráez, profesoras investigadoras del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Adicionalmente, se impartió un taller de 6 horas de duración, respecto de los mecanismos de diagnóstico para la construcción de las políticas estatales anticorrupción en el país. El taller estuvo a cargo del Mtro. Jaime Hernández Colorado.

Adicionalmente, de acuerdo con los términos de referencia del proyecto, se llevó a cabo el levantamiento de información de diversas dependencias del Poder Ejecutivo estatal, así como de algunos entes autónomos, para evaluar las condiciones en las que se encuentra la administración

pública estatal como base para la articulación acciones de política pública de combate a la corrupción. Esto ha significado el acopio de un volumen importante de información provista por esas organizaciones públicas. Para la reunión y análisis de esos datos se utilizó la metodología del Instrumento de Evaluación en Rendición de Cuentas (IERC), que es una herramienta metodológica diseñada por el doctor Mauricio Merino Huerta desde 2013, misma que es de utilidad para evaluar las condiciones en que se encuentran las administraciones públicas respecto de las obligaciones en materia de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción. Esta herramienta ha sido utilizada en diferentes proyectos de intervención en materia de política pública en varios gobiernos municipales y estatales en el país, asimismo, ha sido base para las propuestas que se han construido para las políticas anticorrupción en el país, tanto desde la Red por la Rendición de Cuentas como desde el Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Los elementos identificados en la prueba diagnóstica llevada a cabo a partir del IERC han sido la base para la construcción de las recomendaciones de líneas de política pública que se encuentran en el apartado final.

Este informe también incorpora el documento “La corrupción en el estado de Coahuila. Situación a partir de indicadores nacionales”. El interés principal de este documento es caracterizar la situación en la que se encuentra Coahuila respecto del ámbito nacional en diferentes indicadores que pueden estar vinculados con el fenómeno de la corrupción. Conviene mencionar que, como se anticipa, dada la complejidad del problema público de la corrupción, es poco posibles que existan mediciones que permitan medirlo *stricto sensu*, siendo que es un fenómeno que por definición sucede en la opacidad y, por tanto, aquellos acercamientos a su magnitud sólo pueden ser aproximados. De otro lado, en México existen diferentes mediciones —originadas en instituciones distintas, públicas y privadas— que analizan elementos contextuales que tienen que ver directamente con la proliferación de la corrupción.

Planteamiento conceptual

A la par de las modificaciones constitucionales y legales que han dado forma a un conjunto de mecanismos institucionales para la rendición de cuentas, los cambios vinculados con el combate a la corrupción han prefigurado vías institucionales para el seguimiento a las acciones gubernamentales. Este rastreo no sólo se relaciona con la vigilancia debida en un marco de rendición de cuentas horizontal, es decir, de y entre instituciones con funciones diferenciadas, sino también tiene que ver con la rendición de cuentas vertical. Los sistemas anticorrupción en el país no sólo han diseñado un

conjunto de medios para vigilar, prevenir, identificar, investigar y, en su caso, sancionar los actos relacionados con la corrupción y las malas prácticas administrativas, sino también han establecido mecanismos para el involucramiento de los ciudadanos en la vigilancia de las administraciones públicas. Si se compara esta forma de concebir al quehacer administrativo con el modelo anterior, en el que habían campado la opacidad y la secrecía respecto de los asuntos públicos, es posible identificar al nuevo modelo como un paradigma administrativo diferente. Esto ha significado ajustes de gran calado en las administraciones de los tres órdenes de gobierno que hay en México. De entrada, la legislación general en materia de combate a la corrupción tuvo que ser tomada en cuenta por las entidades federativas en la confección de sus marcos legales propios, obligación que no dejó exentos a algunos estados de errores que, a partir de 2020, ha empezado a corregir la Suprema Corte de Justicia de la Nación por la vía de resoluciones de acciones de inconstitucionalidad y/o controversias constitucionales. El conjunto de leyes que dieron forma a los sistemas anticorrupción, sin embargo, comparten, tanto en el ámbito nacional como en los estatales, la premisa según la cual se reconoce a la corrupción como un problema multifactorial que, por lo tanto, debe atacarse desde vertientes diversas.

A partir de la premisa sobre la cual se construyó el sistema nacional anticorrupción, la conceptualización del problema se aclara. Para empezar hay que considerar las tres acepciones de lo público de las que habla Nora Rabotnikof: (1) lo público como aquello que es de todos; (2) lo público como aquello que es abierto, en oposición a lo que es cerrado, y lo público como aquello que sucede a la vista de todos, *a plena luz del día*, en relación con la idea de Kant acerca de que lo que sucede en la secrecía esconde actos injustos. Teniendo en cuenta las distinciones que propuso Rabotnikof, es posible proponer la caracterización del problema de la corrupción como un fenómeno que permite la transformación de lo público en privado. Es decir, el punto en el cual se cancelan cualesquiera de los tres atributos de lo público que señala Rabotnikof. De ahí que se considere que la corrupción evidencia no sólo la privatización de lo público y, por tanto, el despojo de la naturaleza pública de bienes, puestos, presupuestos y servicios, sino también la debilidad e incapacidad de las instituciones del Estado para administrar sus bienes y recursos de forma equitativa. En esta explicación también podría decirse que la corrupción evidencia el fracaso del Estado para controlar el particularismo, al tiempo que su imposibilidad de evitar que los intereses de los individuos que trabajan en sus instituciones terminen por prevalecer sobre el interés público. Esto significa que la corrupción se caracteriza por ser un fenómeno mediante el cual se captura o secuestra lo público y se alteran o modifican de forma trascendental las metas y objetivos de las

instituciones del Estado. Como se ha dicho, estas instituciones tienen esencialmente la misión de distribuir de forma equitativa los bienes públicos, resguardar lo público y proveer de medios legales para el acceso de todas las personas a los derechos que tienen garantizados. Cuando estas premisas se cancelan y prevalece la corrupción, las acciones del Estado terminan por privilegiar el particularismo por encima de los fines universalistas que deberían guiarlas.

Mauricio Merino ha propuesto entender a la corrupción como la captura de puestos, presupuestos y decisiones públicas. En consonancia con lo señalado arriba, se entiende que la corrupción cancela la condición de “público” y permite que los medios que tienen a la mano los servidores públicos articulen rutas para la obtención de beneficios individuales —privados— que pueden ser económicos, aunque no necesariamente. Al margen de la importancia del problema de la corrupción como herramienta para cancelar el acceso de grupos de personas a los derechos que les son inherentes, también debe entenderse que las consecuencias del problema no sólo abarcan este ámbito. Es claro que la imposibilidad de que personas o grupos de personas accedan a los derechos que deberían tener garantizados es un problema subsidiario de la corrupción, de la mayor relevancia, pero no es el único. Añadidos se encuentran otros problemas que tampoco son menores y tienen que ver con el propio funcionamiento institucional del Estado.

Las prácticas administrativas nocivas, algunas de las cuales entrañan también hechos de corrupción, no sólo tienen consecuencias directas en la vida de las personas o en su acceso a bienes y servicios públicos que les corresponden por derecho, sino también les afectan de manera tangencial. Las malas prácticas administrativas y los hechos de corrupción tienen efectos nocivos sobre la buena marcha de las administraciones públicas, causando afectaciones directas sobre la eficiencia y eficacia de las instituciones. Conviene enfatizar que la disminución de la legitimidad del Estado no es la única consecuencia negativa de la corrupción, sino también el mal uso de los recursos públicos, no sólo con prácticas que los privatizan, sino también, por ejemplo, mediante aquellos vicios que dilapidan o ejercen inadecuadamente los recursos públicos, sin que se obtengan beneficios claros para las personas o se disminuyan, solucionen o resuelvan problemas públicos. Esto tiene además que ver con la proliferación de malas prácticas administrativas, que generan ambientes propicios a la corrupción. Cuando no existen prácticas coherentes para el ejercicio del gobierno vinculando las acciones con metas y objetivos y, en general, un esquema de planeación gubernamental, también es posible que existan hechos de corrupción y prácticas negativas, simplemente porque será casi imposible evaluar la calidad de las acciones de gobierno y de

las políticas públicas que se instrumentan, si no existen parámetros para saber qué es lo óptimo y qué lo deficiente.

2. Los mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción en Coahuila

El debate académico ya no tan reciente respecto de conceptos como transparencia y rendición de cuentas no sólo ha establecido definiciones cada vez más detalladas, sino también se ha propuesto un vínculo entre estos conceptos. De esta forma, se ha sugerido la imbricación de ambas ideas, entendiendo que la transparencia debe significar una condición transversal y elemento necesario —aunque no suficiente— de la rendición de cuentas. Esa discusión se ha enriquecido en los estudios de administración pública en México, con una perspectiva que se había propuesto en otras latitudes: la idea según la cual a ese binomio de transparencia y rendición de cuentas, como condiciones básicas para un cambio de paradigma en el ejercicio de la administración pública, se añadió el componente de las estrategias de combate a la corrupción, como elemento subsidiario sostenido en las buenas prácticas de transparencia y rendición de cuentas, aunque por sí mismo un conglomerado de estrategias que van más allá de la rendición de cuentas. Estos tres elementos abarcan un espacio conceptual y práctico que tiene el objetivo de modificar de raíz las reglas y comportamientos de las administraciones públicas.

En ese sentido, conviene puntualizar los tres conceptos imbricados:

- **Transparencia.** Entendida como el cumplimiento de las obligaciones legales, de principio, pero también como una estrategia que permite cumplir con las exigencias de las leyes en la materia y, además, desarrollar acciones proactivas que permiten ir más allá de esas exigencias para garantizar que los ciudadanos se pueden enterar, paso a paso, de las actividades y la toma de decisiones cotidianas. Como transparencia proactiva, la estrategia debe acompañarse de las herramientas de las tecnologías de la información y comunicación y del gobierno abierto para garantizar que toda la información, en todo momento, está a disposición de los ciudadanos. Se considera a la transparencia como la base necesaria, pero no suficiente, para la rendición de cuentas. Es decir, si no existe plena transparencia entonces no puede existir la rendición de cuentas.

A esta conceptualización debe incorporarse una salvedad respecto de la transparencia proactiva. Esta estrategia, como paso intermedio entre la transparencia y el gobierno abierto, debería estar mediada por la búsqueda de acciones innovadoras. Es decir, la transparencia proactiva es, en sí misma, innovación. Una estrategia de esta naturaleza no puede sujetarse a reglas ni rutinas preconcebidas, puesto que para eso existen las políticas de transparencia legal (o de obligaciones de transparencia). Otra consideración que conviene hacer es la de la calidad de la información. Al vincularse con el derecho de acceso a la información, la transparencia no sólo debe articular mecanismos para poner la información a disposición de los ciudadanos, sino también garantiza que la información sea accesible, legible y en formatos de acceso abierto. Estos elementos son de la mayor importancia, si se tiene en cuenta que el riesgo de no considerarlos implica la burocratización de las estrategias de transparencia y, por tanto, la simulación en el cumplimiento de las obligaciones legales en la materia y en la garantía del derecho de acceso a la información. La transparencia es condición necesaria para la rendición de cuentas, siempre que signifique cumplimiento efectivo de la normatividad y las mejores prácticas en accesibilidad y disponibilidad de la información.

- Rendición de cuentas. Entendida como el ejercicio permanente de informar y justificar las decisiones públicas frente a los ciudadanos e instituciones contrapeso. A la rendición de cuentas, en el concepto de Mauricio Merino —que la define como una cadena— se le considera el resultado de un conjunto de buenas prácticas en varias vertientes de la gestión pública, que garantizan tanto la disponibilidad, calidad y existencia de la información pública, pero también el seguimiento puntual de cada una de las etapas del gobierno, desde la selección de alternativas en una toma de decisión hasta la implementación, evaluación y fiscalización de la opción seleccionada. En un punto, la rendición de cuentas es transparencia, pero la transparencia por ella misma no garantiza la rendición de cuentas. Los eslabones de la cadena de la rendición de cuentas son, según Merino, archivos, información pública, asignación presupuestal, contabilidad, compras, monitoreo y evaluación y fiscalización.

La rendición de cuentas es la expresión administrativa fundamental de la democracia. En ese sentido, rendir cuentas implica informar, pero también justificar, explicar y, en suma, poner a consideración de los ciudadanos las decisiones públicas, con el fin de que sean vigiladas y evaluadas en función

de los objetivos planteados. Este tipo de ejercicios tienen vinculación directa con el proceso democrático, pues significan la renovación de la confianza de los ciudadanos en los gobernantes y, por otro lado, la reiteración de la capacidad ciudadana de controlar y vigilar a los gobiernos. Es decir, la democracia no se agota en los procesos electorales, ni es una patente de corso otorgada sin restricciones ni controles a los funcionarios electos.

Conviene tener en cuenta que el modelo del ciclo conceptual que proponemos entrelaza a la idea procedimental de la rendición de cuentas con la naturaleza estructural del problema de la corrupción. Así, una rendición de cuentas deficiente y la corrupción son resultado de malas prácticas en los ocho ámbitos que integran la 'cadena'. Como se ha dicho, esos ocho ámbitos sirven como marcos de análisis de las administraciones públicas de cualquier nivel de gobierno en México, pues los tres órdenes de gobierno tienen atribuciones en las ocho materias. Por tanto, es posible identificar y evaluar las acciones de cualquiera de ellos con base en los mismos elementos conceptuales.

El tercero de los conceptos es el de corrupción, que ya se ha expuesto arriba. Sin embargo, conviene sintetizar la caracterización para entender la vinculación entre las diferentes definiciones que se han propuesto en las últimas dos décadas.

- **Corrupción.** Es la apropiación ilegítima de lo público. Cada vez que alguien hace suyo lo que nos pertenece a todos; cada vez que alguien esconde lo que debe saberse; cada vez que alguien utiliza su dinero, sus atribuciones, para excluir y no para incluir, corrompe lo PÚBLICO y afecta la convivencia y la cohesión social. La corrupción también tiene que ver con el abuso de la autoridad para obtener beneficios privados, pero esta corrupción no sólo sucede rompiendo los procedimientos legales, también puede suceder cuando se siguen las rutas legales y aun así alguien se apropia indebidamente de lo público, que no necesariamente implica recursos económicos, sino también medios de poder e influencia que garantizan beneficios a quienes los capturan.

Estos tres conceptos fundamentales se vinculan porque entre todos subyace la idea de la máxima publicidad de la información como necesidad para avanzar en la rendición de cuentas y colocar las bases para combatir la corrupción. De ahí que la estrategia que se recomienda debe ser integral y abarcadora. Las acciones aisladas en transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción no tendrán efectos duraderos si no se articulan en un plan exhaustivo que tenga como objetivo acabar

con la corrupción, pero en el proceso cumplir con las normas de transparencia y estructurar un esquema eficiente de rendición de cuentas.

El Instrumento de Evaluación en Rendición de Cuentas (IERC) tiene la finalidad inicial de identificar las áreas de oportunidad en las que deben ponerse en marcha modificaciones legales, institucionales y prácticas para mejorar los mecanismos de rendición de cuentas en el ámbito estatal. El instrumento se integra por nueve componentes, vinculados con la idea de la cadena de la rendición de cuentas, que son:

1. Información sobre archivos;
2. Información sobre transparencia y acceso a la información pública;
3. Información presupuestal;
4. Información sobre contrataciones públicas;
5. Información de contabilidad;
6. Información sobre monitoreo y evaluación;
7. Información sobre fiscalización;
8. Información sobre control interno, e
9. Información sobre profesionalización.

Como se evidencia enseguida, cada uno de los componentes tiene énfasis en una vertiente vinculada con la rendición de cuentas y el combate a la corrupción. Las variables que los integran se dirigen a consultar la existencia de mecanismos legales, institucionales o prácticos en diferentes materias. A partir de los resultados, es posible avizorar la circunstancia en la que se encuentran los mecanismos de rendición de cuentas en el estado de Coahuila, a la cual deben responder los objetivos de corto y mediano plazo de la Política Estatal Anticorrupción que está elaborando la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Coahuila.

Además de la evaluación diagnóstica de los componentes del Instrumento de Evaluación en Rendición de Cuentas, este documento también incorpora un apartado analítico de los insumos de información que ha venido generando la Secretaría Ejecutiva en el proceso de acopio de datos para la integración de dicho documento.

2.1. Explicación y contenido de los componentes del Instrumento de Evaluación en Rendición de Cuentas

1. Componente: Información sobre archivos

El componente tiene como finalidad la evaluación de las condiciones mínimas necesarias para la gestión correcta de los archivos en el ámbito estatal. La relevancia de evaluar las herramientas de gestión archivística no sólo está relacionada con su importancia para la rendición de cuentas y combate a la corrupción, sino también con el cumplimiento del nuevo marco legal general en la materia, en vigor desde junio de 2019. Las variables del componente califican tres tipos de información: elementos legales, estructura institucional y prácticas técnicas. Esta información en conjunto permite obtener una visión panorámica de la situación que guarda el modelo de gestión archivística en el estado de Coahuila.

No.	Variables
1	Existe una ley estatal de archivos.
2	Existe un reglamento de la ley de archivos para el Poder Ejecutivo estatal.
3	Existen requisitos técnicos para el nombramiento del titular de la agencia estatal de archivos.
4	Existen lineamientos que regulen la operación del sistema de gestión de archivos para todas las dependencias del gobierno estatal.
5	Existen lineamientos de identificación y clasificación de archivos reservados.
6	Existe un sistema estatal de archivos operativo.
7	Existe una agencia/dependencia estatal para la gestión de archivos.
8	El sistema de gestión cuenta con profesionales con perfil en materia de archivos (revisar, al menos, a mandos medios y altos de la agencia/dependencia estatal de archivos).
9	Existen oficinas o áreas coordinadoras responsables de los archivos en cada dependencia y/o entidad del gobierno estatal.
10	Existe un cuerpo asesor (Consejo o Comité Técnico o Comité o Consejo Académico) que auxilie a la agencia/dependencia estatal de gestión de archivos.
11	Existe un sistema electrónico de archivos (de búsqueda y localización en el acervo).
12	Existe un sistema electrónico para resguardo de versiones electrónicas de los archivos.
13	Existe catálogo de disposición documental en cada dependencia del gobierno estatal o uno general.
14	Existe cuadro general de clasificación en cada dependencia del gobierno estatal o uno general.
15	Existe Guía Simple de Archivos del gobierno estatal.
16	Existen archivos de trámite.
17	Existen archivos de concentración (por dependencia o uno general del gobierno estatal).
18	Existe un archivo histórico (por dependencia o uno general del gobierno estatal).
19	Existen espacios físicos dedicados específicamente al resguardo de archivos.
20	En el o los espacios físicos para resguardo de archivos hay un sistema de seguridad que garantiza la integridad de los expedientes de archivo.

- | | |
|----|--|
| 21 | En el o los espacios físicos para resguardo de archivos hay un sistema de control ambiental (climatización y control de humedad para crear un ambiente artificial para la conservación de los archivos). |
| 22 | En el o los espacios físicos para resguardo de archivos se establece un procedimiento de consulta que garantiza la integridad de los documentos y evita el riesgo de sustracción. |

2. Componente: Información sobre transparencia y acceso a la información

El componente tiene como objetivo calificar la situación en la que se encuentran los mecanismos legales, institucionales y técnicos encargados de articular la política de transparencia y garantizar el derecho de acceso a la información. Las variables que integran el componente se dirigen a identificar detalles del diseño legal, institucional y respecto de las prácticas en materia de transparencia en el ámbito estatal. El componente de transparencia se origina en la política más antigua del entramado que actualmente norma las buenas prácticas de rendición de cuentas y combate a la corrupción en México.

No.	Variable
1	Marco legal estatal de transparencia y acceso a la información.
2	Existen reglamentos de transparencia en todos los sujetos obligados por la ley estatal.
3	Existe al menos un manual de procedimiento de acceso a la información en el gobierno estatal.
4	Existe una entidad administrativa cuya función es coordinar la instrumentación de la política de transparencia y acceso a la información pública en el gobierno estatal.
5	Existen oficinas/unidades de enlace de transparencia y acceso a la información pública en cada dependencia del gobierno estatal.
6	Existe un apartado específico de transparencia en el portal del gobierno estatal.
7	La política de transparencia publica información adicional a la de las obligaciones de ley (transparencia proactiva).
8	Existe una política o estrategia de interoperabilidad de datos en las unidades administrativas del sujeto obligado.
9	Existe una política o estrategia de transparencia focalizada (micrositios o apartados especializados).
10	La información de transparencia publicada se actualiza al menos cada mes.
	Los datos digitales cumplen con los principios para ser accesibles en línea, usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado de acuerdo con las siguientes condiciones:
11	Accesibles: Están disponibles para la gama más amplia de usuarios, para cualquier propósito.
12	Integrales: Contienen el tema que describen a detalle y con los metadatos necesarios.
13	Gratuitos: Se obtienen sin entregar a cambio contraprestación alguna.
14	No discriminatorios: Están disponibles para cualquier persona, sin necesidad de registro.
15	Oportunos: Son actualizados periódicamente, conforme se generen.

- 16 Permanentes: Se conservan en el tiempo, para lo cual, las versiones históricas relevantes para uso público se mantendrán disponibles con identificadores adecuados al efecto.
- 17 Primarios: Proviene de la fuente de origen con el máximo nivel de desagregación posible.
- 18 En formatos abiertos: Los datos están disponibles con el conjunto de características técnicas y de presentación que corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos en un archivo digital, cuyas especificaciones técnicas son del dominio público, que no suponen una dificultad de acceso y que su aplicación y reproducción no estén condicionadas a contraprestación alguna.
- 19 Existe un mecanismo de quejas y denuncias por incumplimiento de las obligaciones de la LGTAIP.
- 20 Número de recursos humanos del órgano garante de transparencia encargado de atender las dudas, requerimientos de apoyo y problemas de los municipios en materia de cumplimiento de la normativa de transparencia.
- 21 Estadística de solicitudes de información en el estado, generadas por el órgano garante estatal, con desagregación por sujeto obligado y tipo de respuesta que se dio, en cada caso.
- 22 Estadística de recursos de revisión en el estado, generados por el órgano garante estatal, con desagregación por sujeto obligado y tipo de resolución.
- 23 Estadística de cumplimiento de obligaciones de transparencia en el estado, generados por el órgano garante estatal, con desagregación por tipo de sujeto obligado.
- 24 Informe de incidencias/deficiencias/áreas problemáticas identificadas por el órgano garante estatal sobre los sujetos obligados municipales.

3. Componente: Información presupuestal

El componente de información presupuestal tiene como objetivo la evaluación de los elementos legales e institucionales relacionados con el proceso de construcción del presupuesto estatal, además de los mecanismos de planeación que se involucran en la configuración de la propuesta presupuestal cada año. Este componente tiene relación cercana con el de información contable, pues las variables evalúan la etapa anterior al ejercicio del gasto público, es decir, la correspondiente al diseño y la generación de información presupuestal accesible y detallada.

No.	Variable
1	Metodología de Presupuesto Basado en Resultados utilizada en el estado.
2	Metodología de elaboración de la propuesta de presupuesto de egresos.
3	El mecanismo de presupuesto participativo existe en la entidad federativa (en la Constitución estatal o legislación electoral estatal).
4	El mecanismo de presupuesto participativo se encuentra regulado en la legislación estatal.
5	En la legislación de participación ciudadana se establece el monto del gasto que se asigna por medio de presupuesto participativo.
6	El presupuesto desagrega el estado analítico de ingresos.
7	El presupuesto desagrega el ejercicio de egresos.
8	El presupuesto desagrega el endeudamiento y los intereses de la deuda.
9	El presupuesto aprobado y ejercido es de acceso público.
10	El presupuesto aprobado y ejercido está desglosado por capítulo de gasto.
11	El presupuesto aprobado y ejercido está desglosado por unidad administrativa.
12	El presupuesto aprobado y ejercido está desglosado por categoría económica.
13	El presupuesto aprobado y ejercido está desglosado por categoría funcional.
14	El presupuesto aprobado y ejercido está desglosado por proyectos específicos.
15	En el presupuesto se especifican supuestos y previsiones económicas.
16	En el presupuesto se especifican créditos fiscales.
17	En el presupuesto se especifican pasivos y activos financieros.
18	En el presupuesto se especifican activos no financieros.

19	En el presupuesto se especifican obligaciones asociadas al pago de pensiones de los empleados de Gobierno.
20	En el presupuesto se especifican pasivos contingentes.
21	Se publican los informes de ejecución del presupuesto, a más tardar treinta días posteriores al cierre del ejercicio (sea mensual, trimestral o semestral).
22	El presupuesto incluye y desglosa destinatarios y criterios para administración y asignación de recursos a personas físicas y morales.
23	El presupuesto incluye exenciones fiscales.
24	En el presupuesto se establece el número de plazas distinguiendo entre empleados de confianza y empleados de base con su desglose correspondiente.
25	En el presupuesto se establece un tabulador de salarios de todos los empleados de la administración pública.
26	El presupuesto de egresos de la entidad federativa desglosa el presupuesto del Poder Legislativo.
27	El presupuesto de egresos de la entidad federativa desglosa el presupuesto del Órgano de Fiscalización Superior.
28	El presupuesto de egresos de la entidad federativa desglosa el presupuesto del Poder Judicial.
29	El presupuesto de egresos de la entidad federativa desglosa el financiamiento a partidos políticos.
30	El presupuesto de egresos de la entidad federativa desglosa el presupuesto de todos los órganos autónomos constitucionales locales.
31	En el presupuesto de egresos de la entidad federativa se desglosan los destinatarios de subsidios o fideicomisos y/o entrega de recursos públicos.
32	Se publica una versión ciudadana del presupuesto
33	El presupuesto desglosa el monto de los excedentes que se pueden utilizar sin autorización de la Cámara de Diputados.

4. Componente: Información sobre contrataciones públicas.

El componente tiene el objetivo de calificar los elementos legales e institucionales que dan marco a las contrataciones públicas en el ámbito estatal. Las variables plantean preguntas respecto de adquisiciones, como de obras públicas. El esquema general del componente plantea cuestiones puntuales para caracterizar las prácticas con base en las cuales se llevan a cabo los procesos de compra o contratación.

No.	Variable
1	La legislación estatal de contrataciones públicas define montos máximos para procedimientos de adjudicación directa.
2	La legislación estatal de contrataciones públicas define montos máximos para procedimientos de invitación restringida.
3	El monto máximo para adjudicación directa e invitación restringida es de 400,000 pesos o inferior.
4	La legislación estatal de contrataciones públicas permite el uso del mecanismo de subastas electrónicas.
5	La legislación estatal de contrataciones públicas permite el uso del mecanismo de pujas en reversa.
6	La legislación estatal de contrataciones públicas permite el uso del mecanismo de compras consolidadas.
7	La legislación estatal de contrataciones públicas define la información básica que deben contener las convocatorias de licitaciones públicas.
8	La legislación estatal de contrataciones públicas define la información básica que deben contener las bases de las licitaciones públicas.
9	La legislación estatal de contrataciones públicas tipifica las infracciones en las que se puede incurrir en caso de malas prácticas en los procesos de contratación.
10	La legislación estatal de contrataciones públicas establece sanciones para la colusión en los procesos de contratación.
11	La legislación estatal de contrataciones públicas establece sanciones para el conflicto de interés en los procesos de contratación.

12	La legislación estatal de contrataciones públicas establece sanciones para el abuso de autoridad en los procesos de contratación.
13	La legislación estatal de contrataciones públicas establece sanciones para el tráfico de influencias en los procesos de contratación.
14	La legislación estatal de contrataciones públicas establece el uso de mecanismos electrónicos de difusión durante todo el proceso de contratación.
15	La legislación estatal de contrataciones públicas o transparencia obliga a que se generen expedientes sobre los procesos de contratación.
16	Existe un sistema electrónico público de compras.
17	Existe evidencia de que en los procesos de contratación participan testigos sociales.
18	Las adjudicaciones directas se acompañan siempre de un dictamen técnico de justificación.
19	El dictamen técnico de justificación de las adjudicaciones directas se publica.
20	La convocatoria de licitación se difunde a través de medios de comunicación oficial (electrónicos e impresos).
21	La convocatoria de licitación se difunde a través de los medios de mayor circulación en la entidad federativa.
22	Existe evidencia de que las sesiones de los comités de adquisiciones se transmiten en vivo.
23	Existe evidencia de que las sesiones de las juntas de aclaraciones se transmiten en vivo.
24	Las modificaciones de las convocatorias se anuncian con anticipación (en un plazo de, al menos, 30 días anteriores al inicio de la misma).
25	Existe evidencia para verificar públicamente la aplicación correcta de las reglas o procedimientos de contrataciones.
26	Se aplican técnicas de administración de riesgo. En su caso, detallar metodología.
27	Existe evidencia de que, en los procesos de contratación, se realizan estudios de mercado para la elaboración de los términos de referencia.
28	Se publica el registro de proveedores sancionados y la justificación de las sanciones.

29	Existen mecanismos de denuncia anónima para que los servidores públicos reporten violaciones a la legislación o comportamientos inusuales y patrones sospechosos en los procesos de contratación.
30	Los expedientes completos de los procesos de licitación se publican una vez que éstos concluyen, incluyendo el contrato final asignado.
	De las licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida se publican los siguientes documentos, además del expediente completo en versión pública:
31	La convocatoria o invitación emitida, con sus fundamentos legales.
32	Los nombres de los participantes o invitados.
33	El nombre del ganador y las razones que lo justifican.
34	El área solicitante y la responsable de la ejecución de la contratación.
35	Las convocatorias e invitaciones emitidas.
36	Los dictámenes y fallo de adjudicación.
37	El contrato y sus anexos.
38	Los mecanismos de vigilancia y supervisión incluyendo, en su caso, los estudios de impacto ambiental y urbano.
39	La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, si aplica.
40	Origen de los recursos (federales, estatales o municipales), así como el tipo de fondo de participación o aportación respectiva.
41	Los convenios modificatorios, en su caso.
42	Informes de avance físico o financiero de las contrataciones.
43	Convenio de terminación.
44	El finiquito
	De las adjudicaciones directas se publican los siguientes documentos, además del expediente completo en versión pública:
45	La propuesta enviada por el participante.
46	Los motivos y fundamentos legales aplicados.
47	La autorización del ejercicio de la opción.

48	En su caso, las cotizaciones consideradas, indicando nombre de los proveedores y montos de las mismas.
49	El nombra de la persona física o moral a la que se adjudicó.
50	La unidad administrativa solicitante y la responsable de la ejecución de la contratación.
51	El número, fecha, monto y plazo de ejecución del contrato.
52	Los mecanismos de vigilancia y supervisión incluyendo, en su caso, los estudios de impacto ambiental y urbano.
53	Los informes de avance de las contrataciones.
54	El convenio de terminación.
55	El finiquito.
56	Los lineamientos garantizan que las compras se realicen a través de licitación pública y solo excepcionalmente (menos del 20%) a través de adjudicación directa.
57	El sistema electrónico de compras público permite dar seguimiento a todo el proceso de adquisiciones (desde los padrones de proveedores, convocatorias, la elección del proveedor, el ejercicio del contrato y la conclusión del mismo).
58	Existe un comité evaluador que identifique violaciones a la ley, comportamientos inusuales y patrones sospechosos que puedan existir durante la presentación de oferta y en su caso descalifica la participación de los involucrados.
59	El comité evaluador revisa periódicamente los procesos de invitación a concursos y las convocatorias e identifica posibles sesgos.

5. Componente: Información de contabilidad

Este componente tiene como objetivo la evaluación de la información generada y publicada sobre contabilidad gubernamental, es decir, respecto del ejercicio de los recursos públicos. Estos procesos tienen bases normativas homogéneas en todas las entidades federativas, no sólo porque se sujetan a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a las normas técnicas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, sino también a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información.

No.	Variable
1	La legislación estatal de presupuesto y contabilidad reproduce las obligaciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
2	Existe un manual de contabilidad gubernamental, armonizado con las obligaciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
3	Existen registros contables y presupuestarios con base en el manual de contabilidad gubernamental.
4	Se usa un software que permite la generación de la información desglosada como lo solicita la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
5	Los sistemas contables generan periódicamente estados e información financiera de la entidad federativa.
6	Los informes contables integran registro de ingresos estimados.
7	Los informes contables integran registro de ingresos modificados.
8	Los informes contables integran registro de los ingresos devengados.
9	Los informes contables integran registro de los egresos aprobados.
10	Los informes contables integran registro de los egresos comprometidos.
11	Los informes contables integran registro de los egresos devengados.
12	Los informes contables integran registro de los egresos pagados.
	La información en materia de ingresos desglosa:
13	Ingresos del sector gobierno.
14	Ingresos tributarios.
15	Ingresos no tributarios.
16	Ingresos de origen federal.
17	Ingresos por participaciones.
18	Ingresos por fondo de aportaciones.
19	Ingresos de sector paraestatal no financiero.
20	Otros ingresos.
	La información que se publica sobre la deuda integra:
21	Saldo de la deuda.
22	Endeudamiento neto.

23	Costo financiero de la deuda.
24	Comparativo con años anteriores.
25	Deuda de corto y largo plazo.
26	Deuda por su origen: interna y externa.
27	Deuda por fuentes de financiamiento.
28	Los informes contables, con ingresos y egresos, reportan las variaciones de lo ejercido respecto a lo presupuestado. Los informes de ejecución incluyen:
29	Clasificación económica.
30	Clasificación administrativa.
31	Clasificación funcional (con subfunciones). Los informes contables permiten identificar:
32	Operaciones de ingresos.
33	Gastos.
34	Activos patrimoniales de los entes públicos.
35	Pasivos patrimoniales de los entes públicos.
36	Los informes contables integran el ejercicio presupuestario con la operación contable.
37	Los informes contables reportan el flujo de efectivo de la entidad.
38	Los informes contables reportan cada operación que genera derechos y obligaciones derivados de la gestión económico-financiera de los entes públicos.
39	El Sistema de Contabilidad Gubernamental genera estados financieros en tiempo real.
40	Los estados financieros se publican al menos siete días posteriores al cierre de los ejercicios mensuales o trimestrales.
41	Los informes contables reportan los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los entes PÚBLICOS.
42	Los informes contables reportan cuentas de orden para el registro de ingresos y egresos.
43	Los informes contables reportan bienes muebles e inmuebles de la entidad federativa.
44	Los informes contables reportan, de forma individual y agregada, el registro de las operaciones en las cuentas de orden, de balance y de resultados.

	Los informes contables reportan los egresos con las siguientes clasificaciones:
45	Clasificación Administrativa (permite identificar qué área gasta);
46	Clasificación funcional;
47	Clasificación programática
48	Clasificación Económica;
49	Clasificación por Objeto del Gasto.
50	Los informes contables reportan el valor del patrimonio total del gobierno estatal.
51	Existen herramientas de consulta interactiva de la información contable.

6. Componente: Información sobre monitoreo y evaluación

El componente tiene el objetivo de calificar los elementos legales, institucionales y prácticos que articulan la estrategia de evaluación de políticas públicas en el ámbito estatal. El componente se relaciona con el de información presupuestal y el de información contable, pues plantea cuestiones sobre la vinculación entre metas y objetivos de las políticas públicas con el ejercicio presupuestal.

No.	Variable
1	La entidad federativa cuenta con legislación en materia de evaluación de políticas y programas públicos.
2	La entidad federativa cuenta con un Plan de Desarrollo Estatal diseñado en función de la metodología de marco lógico. Detallar proceso metodológico y remitir metodología, en su caso.
3	El Plan de Desarrollo Estatal cuenta con objetivos estratégicos definidos.
4	El Plan de Desarrollo Estatal se elaboró con base en un diagnóstico de la situación de la entidad federativa.
5	El Plan de Desarrollo Estatal cuenta con indicadores cuantitativos y cualitativos para medir su desempeño.
6	La entidad federativa cuenta con un órgano especializado encargado de la evaluación de políticas públicas.
7	La entidad federativa cuenta con un sistema de monitoreo y evaluación que mide los resultados de las políticas y programas públicos.
8	Existe evidencia de que realizan evaluaciones a los programas de la entidad federativa, con base en un programa anual de evaluación.
9	Los evaluadores son externos.
10	La contratación de los evaluadores externos se hace por los mecanismos de licitación o, al menos, invitación restringida.
11	Se publican las evaluaciones realizadas.
12	Las evaluaciones de consistencia y resultados cumplen con los criterios de diseño, planeación estratégica, cobertura y focalización, operación, percepción de la población objetivo y de resultados.

7. Componente: Información sobre fiscalización

Este componente tiene como objetivo evaluar la calidad de los elementos legales, institucionales y prácticos que dan forma al contexto en el cual se llevan a cabo los procesos de fiscalización, estableciendo los parámetros de la evaluación en aquellas condiciones que se consideran básicas para el funcionamiento adecuado de la labor de fiscalización. Estos elementos tienen que ver con autonomía, profesionalización, capacidades institucionales y técnicas, así como diseño normativo.

No.	Variable
1	La entidad federativa cuenta con legislación en materia de fiscalización.
2	La legislación estatal de fiscalización está armonizada con el Sistema Nacional de Fiscalización.
3	El Órgano de Fiscalización Superior tiene autonomía constitucional.
	El Órgano de Fiscalización Superior tiene atribuciones para llevar a cabo auditorías:
4	De desempeño
5	De cumplimiento financiero
6	Tecnologías de información
7	Forenses
8	Legalidad
9	De seguimiento
10	De control
11	El Órgano de Fiscalización Superior reporta el cumplimiento de su plan anual de auditorías.
12	El Órgano de Fiscalización Superior reporta los casos de los entes que no proporcionaron información para la auditoría.
13	El Órgano de Fiscalización Superior decide libremente el contenido y la oportunidad de sus informes de auditoría.
14	Las auditorías practicadas por el Órgano de Fiscalización Superior han logrado la sanción penal de servidores públicos.
15	Las auditorías practicadas por el Órgano Superior de Fiscalización han logrado la sanción administrativa de servidores públicos.

16	Número de auditorías que ha realizado el Órgano de Fiscalización Superior en los dos años anteriores.
17	Tipo de auditorías que ha realizado el Órgano de Fiscalización Superior en los dos años anteriores.
18	Número de procedimientos administrativos que ha iniciado el Órgano de Fiscalización Superior en los dos años anteriores.
19	Número de procedimientos penales que ha iniciado el Órgano de Fiscalización Superior en los dos años anteriores.
20	Número de recomendaciones de auditoría que se han solventado (admitido y corregido).

8. Componente: Información sobre control interno

El componente tiene como objetivo evaluar los elementos legales, institucionales y prácticos para el ejercicio de la función de control interno, considerando que ésta es una herramienta fundamental para la introducción de líneas de política de combate a la corrupción en las administraciones públicas. Adicionalmente, el componente reviste importancia dado que se vincula con el diseño legal que se ha dado a los sistemas anticorrupción en México.

No.	Variable
1	Se utilizan metodologías de identificación de áreas de riesgo. Detallar metodología, en su caso.
2	Se utilizan metodologías de identificación y mejora de nodos de decisión complejos. Detallar metodología, en su caso.
3	La contraloría cuenta con un catálogo integrado de todos los trámites del gobierno estatal, vinculados con las atribuciones legales que los sustentan.
4	La contraloría cuenta con una metodología para identificar, analizar y mejorar los procedimientos administrativos de las dependencias y entidades del gobierno estatal.
5	La contraloría cuenta con una metodología de monitoreo y evaluación del desempeño de los funcionarios públicos de las dependencias y entidades del gobierno estatal.

6	La contraloría cuenta con un catálogo de trámites y procedimientos riesgosos de todas las dependencias y entidades del gobierno estatal.
7	La contraloría cuenta con un esquema de capacitación y actualización permanente de los funcionarios públicos en metodologías de control interno.
8	La contraloría implementa el Marco de Referencia COSO.
9	La contraloría cuenta con una metodología para la simplificación administrativa en aquellos procedimientos que se identifican como riesgosos o susceptibles de mejora.
10	La contraloría cuenta con autonomía técnica y de gestión.
11	La contraloría cuenta con criterios profesionales de selección y reclutamiento que privilegian el mérito y cualidades técnicas para la contratación de funcionarios especializados en control interno.
12	La contraloría cuenta con un mecanismo de protección a denunciantes internos (<i>whistleblowers</i>).
13	Existen perfiles de puesto en todas las dependencias y entidades del gobierno estatal, al menos desde el nivel de jefe de departamento.

9. Componente: Información sobre profesionalización

El componente tiene el objetivo de evaluar las acciones de profesionalización que existen en el ámbito estatal, considerando que la introducción de herramientas básicas de formación, capacitación y carrera profesional en el servicio público son una base necesaria para el cambio de las prácticas administrativas en las cuales suceden los actos de corrupción.

No.	Variable
1	Existe un servicio profesional de carrera estatal, integrado para todas las dependencias y entidades.
2	Existen ejemplos de servicio profesional de carrera en alguna (s) dependencia (s) y entidad (es) del gobierno estatal.
3	Existe al menos un modelo de profesionalización para la selección, reclutamiento y contratación basadas en mérito y competencias profesionales en todas o alguna de las dependencias y entidades del gobierno estatal.
4	Existe un plan anual de formación de capacidades y especialización para los funcionarios públicos o, al menos, una estrategia de capacitación del gobierno estatal.
5	Existe un esquema de incentivos para funcionarios públicos vinculado al desempeño.

2.2. Resultados de la evaluación del IERC en el ámbito estatal en Coahuila

En los términos de referencia del proyecto se estableció la realización de un diagnóstico a partir de la metodología del Instrumento de Evaluación en Rendición de Cuentas. Esta evaluación se llevó a cabo con el apoyo y enlace de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Coahuila. Se solicitó información a diferentes instituciones estatales y se asignó un período de 6 semanas para la respuesta. Los resultados por componente del IERC fueron:

- Componente: Información sobre archivos

No.	Variables	Respuesta Coahuila	Comentarios
1	Existe una ley estatal de archivos	Sí	Ley de Archivos PÚBLICOS para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Publicada en 2007.
2	Existe un reglamento de la ley de archivos para el Poder Ejecutivo estatal.	No	NA
3	Existen requisitos técnicos para el nombramiento del titular de la agencia estatal de archivos.	Sí	Ley de Archivos PÚBLICOS para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Publicada en 2007. Arts. 26-31.
4	Existen lineamientos que regulen la operación del sistema de gestión de archivos para todas las dependencias del gobierno estatal.	Sí	Lineamientos generales para la gestión documental de la Administración PÚBLICA Estatal de Coahuila de Zaragoza.
5	Existen lineamientos de identificación y clasificación de archivos reservados.	Sí	Se utiliza el Instructivo para la Elaboración del Catálogo de Disposición Documental del Archivo General de la Nación, así como lo determinado por la legislación estatal de transparencia.

6	Existe un sistema estatal de archivos operativo.	Sí	Ley de Archivos Públicos para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Publicada en 2007. Arts. 20-23.
7	Existe una agencia/dependencia estatal para la gestión de archivos.	Sí	Ley de Archivos Públicos para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Publicada en 2007. Arts. 26-31.
8	El sistema de gestión cuenta con profesionales con perfil en materia de archivos (revisar, al menos, a mandos medios y altos de la agencia/dependencia estatal de archivos).	Sí	Ley de Archivos Públicos para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Publicada en 2007. Arts. 26-31.
9	Existen oficinas o áreas coordinadoras responsables de los archivos en cada dependencia y/o entidad del gobierno estatal.	Sí	Ley General de Archivos y Ley de Acceso a la Información Pública para el estado de Coahuila de Zaragoza.
10	Existe un cuerpo asesor (Consejo o Comité Técnico o Comité o Consejo Académico) que auxilie a la agencia/dependencia estatal de gestión de archivos.	Sí	Ley de Archivos Públicos para el Estado de Coahuila de Zaragoza. Publicada en 2007. Arts. 24-25.
11	Existe un sistema electrónico de archivos (de búsqueda y localización en el acervo).	Sí	Cuadro General de Clasificación, Archivo de Concentración y Archivo Histórico.
12	Existe un sistema electrónico para resguardo de versiones electrónicas de los archivos.	No	Las versiones electrónicas existentes se resguardan en CD.

13	Existe catálogo de disposición documental en cada dependencia del gobierno estatal o uno general.	Sí	Son obligación común de la legislación general y estatal en materia de transparencia.
14	Existe cuadro general de clasificación en cada dependencia del gobierno estatal o uno general.	Sí	Son obligación común de la legislación general y estatal en materia de transparencia.
15	Existe Guía Simple de Archivos del gobierno estatal.	Sí	Es obligación común de la legislación general y estatal en materia de transparencia.
16	Existen archivos de trámite.	Sí	Ley de Archivos PÚBLICOS para el Estado de Coahuila de Zaragoza y Ley General de Archivos.
17	Existen archivos de concentración (por dependencia o uno general del gobierno estatal).	Sí	Ley de Archivos PÚBLICOS para el Estado de Coahuila de Zaragoza y Ley General de Archivos.
18	Existe un archivo histórico (por dependencia o uno general del gobierno estatal).	Sí	Ley de Archivos PÚBLICOS para el Estado de Coahuila de Zaragoza y Ley General de Archivos.
19	Existen espacios físicos dedicados específicamente al resguardo de archivos.	Sí	No se proporcionó evidencia.
20	En el o los espacios físicos para resguardo de archivos hay un sistema de seguridad que garantiza la integridad de los expedientes de archivo.	Sí	No se proporcionó evidencia, más allá de señalar que hay extintores.

21	En el o los espacios físicos para resguardo de archivos hay un sistema de control ambiental (climatización y control de humedad para crear un ambiente artificial para la conservación de los archivos).	No	NA
22	En el o los espacios físicos para resguardo de archivos se establece un procedimiento de consulta que garantiza la integridad de los documentos y evita el riesgo de sustracción.	Sí	No se proporcionó evidencia del procedimiento, más allá de señalar que existe libro de registro y medios para solicitud de información.

Los resultados de la evaluación del componente de información sobre archivos evidencian algunos faltantes y/o elementos problemáticos que pueden tener efectos negativos sobre la eficiencia del funcionamiento integral del sistema de rendición de cuentas en el ámbito estatal. Por señalar algunos:

- La legislación estatal de archivos data de 2007 y no ha sido armonizada con la Ley General de Archivos (LGA), que entró en vigor en junio de 2019 y asignó, en sus artículos transitorios, un período de un año posterior a su entrada en vigor para la armonización de las leyes estatales. Esto implica que el estado de Coahuila aún no se encuentra en falta respecto del tiempo establecido por la ley general. Sin embargo, la generación de una nueva legislación en la materia debería ser una prioridad legislativa, teniendo en cuenta que el régimen de gestión documental que establece la LGA es complejo, no sólo en su diseño, sino en la implementación que deberá tener en el ámbito estatal.
- Si bien se identifica que existen prácticas establecidas en la gestión documental, como la existencia de lineamientos generales en la materia para la administración pública estatal, esto significa un espacio de oportunidad que deberá atenderse a la mayor brevedad en cuanto se armonice la legislación estatal con la LGA. Es decir, los lineamientos a que se hace referencia, además del resto de normatividad técnica especializada existente, tendrán que ajustarse para corresponder con los preceptos de la LGA y la legislación estatal que derive

de ésta en Coahuila.

- La correspondencia de los instrumentos de gestión archivística (Cuadro General de Clasificación, Catálogo de Disposición Documental y Guía Simple de Archivos) debe garantizarse como elemento de base para la implementación de la Ley General de Archivos. Los resultados del diagnóstico evidencian que esos tres tipos de documentos existen en todos los casos de sujetos obligados en Coahuila. Este resultado corresponde con la tendencia nacional, pues los tres instrumentos son obligaciones comunes en materia de transparencia. Sin embargo, en este ámbito es necesario que la instancia estatal encargada de la gestión archivística vigile que dichos instrumentos corresponden con la organización que las ha generado, sus atribuciones y funciones, pues la simulación ha sido una práctica frecuente en esa materia.
- Respecto de los espacios para la conservación del patrimonio documental el diagnóstico evidencia faltantes que deben atenderse, a riesgo de que se conviertan en urgentes una vez que se armonice la legislación estatal con la LGA. Esto significa la adecuación de espacios físicos cuya misión exclusiva sea la del resguardo y conservación de archivos, dotándolos de un sistema de seguridad que garantice la integridad del patrimonio documental —más allá de los extintores—, además de sistemas de control ambiental y de plagas, entre otros mecanismos físicos que mejoren las condiciones en las que se resguardan los valores documentales.

En general, el resultado de la evaluación en este componente evidencia que existen bases legales y regulatorias para la gestión archivística adecuada, sin embargo, la armonización de la legislación estatal con la LGA será un punto de inflexión no sólo en términos legales, sino en el diseño institucional y las prácticas técnicas. Como se sabe, la Ley General de Archivos ha establecido criterios claros respecto de los perfiles de puesto de las personas encargadas de la gestión archivística. Por otro lado, los criterios técnicos emitidos hasta el momento por el Archivo General de la Nación deberán ser sustituidos por aquellos elaborados por el Consejo Nacional de Archivos, en el marco del Sistema Nacional de Archivos. Estos cambios tendrán efectos directos sobre la forma en que se administra el patrimonio documental en el estado de Coahuila, por lo cual es imperativo identificar a la falta de armonización legal como el problema de mayor relevancia en el momento inicial de la política estatal anticorrupción.

- **Componente: Información sobre transparencia y acceso a la información**

No.	Variable	Respuesta Coahuila	Comentarios
1	Marco legal estatal de transparencia y acceso a la información.	Sí	Ley de Acceso a la Información Pública para el estado de Coahuila de Zaragoza.
2	Existen reglamentos de transparencia en todos los sujetos obligados por la ley estatal.	Sí	Aplica el Reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza. No implica que existen reglamentos por sujeto obligado.
3	Existe al menos un manual de procedimiento de acceso a la información en el gobierno estatal.	No	
4	Existe una entidad administrativa cuya función es coordinar la instrumentación de la política de transparencia y acceso a la información pública en el gobierno estatal.	Sí	
5	Existen oficinas/unidades de enlace de transparencia y acceso a la información pública en cada dependencia del gobierno estatal.	Sí	
6	Existe un apartado específico de transparencia en el portal del gobierno estatal.	Sí	El portal "Coahuila Transparente".

7	La política de transparencia publica información adicional a la de las obligaciones de ley (transparencia proactiva). Sí	Por ejemplo, los portales: “Contraloría Social” y “Escuela Transparente”.
8	Existe una política o estrategia de interoperabilidad de datos en las unidades administrativas del sujeto obligado. Sí	En el gobierno estatal existe al menos un ejemplo en la materia. Las actas del registro civil están vinculadas con la Secretaría de Educación, a fin de compartir la información.
9	Existe una política o estrategia de transparencia focalizada (micrositios o apartados especializados). No	
10	La información de transparencia publicada se actualiza al menos cada mes. Sí Los datos digitales cumplen con los principios para ser accesibles en línea, usados, reutilizados y redistribuidos por cualquier interesado de acuerdo con las siguientes condiciones:	Conforme a la normatividad aplicable.
11	Accesibles: Están disponibles para la gama más amplia de usuarios, para cualquier propósito. Sí	Conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública para el estado de Coahuila de Zaragoza.
12	Integrales: Contienen el tema que describen a detalle y con los metadatos necesarios. Sí	Conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública para el estado de Coahuila de Zaragoza.

13	Gratuitos: Se obtienen sin entregar a cambio contraprestación alguna.	Sí	Conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública para el estado de Coahuila de Zaragoza.
14	No discriminatorios: Están disponibles para cualquier persona, sin necesidad de registro.	Sí	Conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública para el estado de Coahuila de Zaragoza.
15	Oportunos: Son actualizados periódicamente, conforme se generen.	Sí	Conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública para el estado de Coahuila de Zaragoza.
16	Permanentes: Se conservan en el tiempo, para lo cual, las versiones históricas relevantes para uso público se mantendrán disponibles con identificadores adecuados al efecto.	Sí	Conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública para el estado de Coahuila de Zaragoza.
17	Primarios: Proviene de la fuente de origen con el máximo nivel de desagregación posible.	Sí	Conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública para el estado de Coahuila de Zaragoza.

18	En formatos abiertos: Los datos están Sí disponibles el conjunto de características técnicas y de presentación que corresponden a la estructura lógica usada para almacenar datos en un archivo digital, cuyas especificaciones técnicas son del dominio PÚBLICO, que no suponen una dificultad de acceso y que su aplicación y reproducción no estén condicionadas a contraprestación alguna.	Conforme a la Ley de Acceso a la Información Pública para el estado de Coahuila de Zaragoza.
19	Existe un mecanismo de quejas y Sí denuncias por incumplimiento de las obligaciones de la LGTAIP.	
20	Número de recursos humanos del órgano Sí garante de transparencia encargado de atender las dudas, requerimientos de apoyo y problemas de los municipios en materia de cumplimiento de la normativa de transparencia.	6 personas en el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI).
21	Estadística de solicitudes de información Sí en el estado, generadas por el órgano garante estatal, con desagregación por	Se cuenta con estadísticas publicadas en Informe Anual 2018.
	sujeto obligado y tipo de respuesta que se dio, en cada caso.	
22	Estadística de recursos de revisión en el estado, generados por el órgano garante estatal, con desagregación por sujeto obligado y tipo de resolución.	Se cuenta con estadísticas publicadas en Informe Anual 2018.

23	Estadística de cumplimiento de obligaciones de transparencia en el estado, generados por el órgano garante estatal, con desagregación por tipo de sujeto obligado.	Se cuenta con estadísticas publicadas en Informe Anual 2018.
24	Informe de incidencias/deficiencias/áreas problemáticas identificadas por el órgano garante estatal sobre los sujetos obligados municipales.	No se encontró evidencia.

Los resultados en el componente de transparencia permitieron identificar algunas áreas de oportunidad para mejorar las condiciones de contexto en las que se pondrá en marcha la política estatal anticorrupción que se encuentra en construcción. Debe tenerse en cuenta que, por lo que hace al marco legal de la transparencia, en el estado de Coahuila se encuentran en buena situación, pues la legislación estatal está armonizada, al igual que el resto de los estados del país, con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. A esto debe añadirse que la legislación coahuilense en la materia es de las más avanzadas del país, pues sumó obligaciones de transparencia adicionales a las de la legislación general, creando una estructura de obligaciones con la pretensión de ser exhaustiva. Respecto del marco regulatorio en la materia, conviene poner atención en la elaboración de manuales de procedimientos para el acceso a la información en los sujetos obligados del ámbito estatal. Esto implicaría generar una base para la capacitación de los funcionarios públicos estatales y municipales para que respondan de forma adecuada a las obligaciones que tienen asignadas. Al hacer referencia a este tipo de manual no necesariamente se menciona un documento puramente administrativo, sino a un instrumento que permita seguir paso a paso el procedimiento y que tenga expresión gráfica, de modo que sea de utilidad —por su sencillez— tanto para ciudadanos como para servidores públicos.

Respecto de las herramientas electrónicas para la transparencia, el diagnóstico permitió identificar algunas buenas prácticas en el ámbito estatal. Además del portal “Coahuila Transparente”, que agrupa la información de transparencia del gobierno estatal, la página web del ICAI ofrece información condensada acerca del cumplimiento de obligaciones de transparencia y la situación que guardan los sujetos obligados por tipo en el estado. Asimismo, existen ejemplos de

portales que ponen a disposición información focalizada y con detalles analíticos adicionales a las obligaciones de transparencia, como “Contraloría Social” y “Escuela Transparente”. En el mismo sentido, se identificó al menos un ejemplo de estrategia de interoperabilidad de datos en el estado: la colaboración entre el registro civil y la Secretaría de Educación estatal, que permite la transferencia de datos y, a la vez, la simplificación de procedimientos administrativos vinculados con el ámbito educativo.

Por lo que hace a las variables que preguntan acerca de las condiciones de los datos digitales que se publican, la evidencia disponible no permite establecer una generalización respecto del cumplimiento de dichas variables. Es decir, conforme a la legislación estatal de transparencia, la información pública es accesible, integral, gratuita, no discriminatoria, oportuna, permanente, primaria y en datos abiertos. Eso es lo que refiere la normatividad estatal. Sin embargo, una revisión de la información disponible en la plataforma “Coahuila Transparente” permite señalar que esas condiciones, si bien previstas en la ley, no necesariamente se cumplen en la realidad. Por señalar un ejemplo mínimo: algunos datos se encuentran publicados en formato PDF, lo cual implica que, al menos la condición de hallarse en formatos abiertos y no propietarios, no se cumple.

Finalmente, el ICAI consigna detalladamente la información respecto del funcionamiento de la estructura de acceso a la información en el estado. Otro de los segmentos de información que se encuentran mencionados en los informes anuales del ICAI es el resultado de las verificaciones de cumplimiento de obligaciones de transparencia, con desglose por sujeto obligado. Esto permite identificar la circunstancia en la que se encuentran los sujetos obligados municipales, que son los de mayor vulnerabilidad, por las deficiencias técnicas, profesionales y presupuestales que enfrentan. Con información de 2018, el ICAI señala que:

- Existen 38 sujetos obligados identificados como ayuntamientos;
- 18 sujetos obligados identificados como sistemas municipales de aguas, y;
- 14 organismos paramunicipales.

Con esta distribución, los Ayuntamientos tienen un cumplimiento global anual de 79.93%, respecto de las obligaciones de transparencia que les son aplicables. En el caso de los sistemas municipales de aguas, éstos tienen un cumplimiento anual de 83.70% y los organismos paramunicipales cumplen en 86.31%. Estas cifras son relevantes cuando se las compara con las del resto de los sujetos obligados que hay en el estado, pues de los cinco tipos de sujetos con más bajo

cumplimiento, tres son los de tipo municipal mencionados, los otros dos son sindicatos y partidos políticos. Aun así, las calificaciones de los sujetos obligados de tipo municipal no son necesariamente bajas, si bien evidencian parámetros de cumplimiento todavía deficientes.

Ahora bien, los datos expuestos arriba son de cumplimiento global anual. En las calificaciones por sujeto obligado, de los 21 sujetos que tienen calificación de cumplimiento por debajo del 70%, 14 son de tipo municipal. Esto es:

- De 38 ayuntamientos que hay en Coahuila, 10 tienen calificaciones de cumplimiento por debajo de 68%;
- De esos 10, 5 tienen calificaciones de cumplimiento por debajo del 60%;
- De esos 5, 3 tienen calificaciones de cumplimiento por debajo del 40%.

Si bien el ICAI no elabora un documento/informe de deficiencias o incidencias en sujetos obligados de tipo municipal respecto de cumplimiento de obligaciones de transparencia, el informe que publica anualmente sí permite identificar las áreas problemáticas en ese tipo de entes PÚBLICOS. Se hace énfasis en estos datos, pues debe considerarse que la política de transparencia y acceso a la información pública es la más antigua en México, de las vinculadas con rendición de cuentas. En ese sentido, cualquier estrategia de combate a la corrupción deberá tener como punto de partida la garantía del cumplimiento total de la estructura de obligaciones en materia de transparencia por parte de los entes públicos, bajo la lógica de que la base mínima del combate a la corrupción es la transparencia y, si esta no se cumple, es poco probable que estrategias de mayor envergadura tengan asidero en comportamientos administrativos deficientes que no han sido modificados ni siquiera por una legislación que tiene ya varios lustros de existencia.

- **Componente: Información presupuestal**

No.	Variable	Respuesta Coahuila	Comentarios
1	Metodología de Presupuesto Basado en Resultados utilizada en el estado.	Sí	Se menciona el uso de la metodología en la exposición de motivos del proyecto de Presupuesto de Egresos del Estado 2020, sin embargo, no se encontró evidencia del Manual de Programación y Presupuesto utilizado.
2	Metodología de elaboración de la propuesta de presupuesto de egresos.	Sí	La Secretaría de Finanzas menciona el uso de un Manual de Programación y Presupuesto que, sin embargo, no se encontró en el portal de transparencia respectivo.
3	El mecanismo de presupuesto participativo existe en la entidad federativa (en la Constitución estatal o legislación electoral estatal).	No	NA
4	El mecanismo de presupuesto participativo se encuentra regulado en la legislación estatal.	No	NA
5	En la legislación de participación ciudadana se establece el monto del gasto que se asigna por medio de presupuesto participativo.	No	NA
6	El presupuesto desagrega el estado analítico de ingresos.	Sí	
7	El presupuesto desagrega el ejercicio de egresos	Sí	

8	El presupuesto desagrega el endeudamiento y los intereses de la deuda.	Sí	
9	El presupuesto aprobado y ejercido es de acceso PÚBLICO.	Sí	
10	El presupuesto aprobado y ejercido está desglosado por capítulo de gasto.	Sí	
11	El presupuesto aprobado y ejercido está desglosado por unidad administrativa.	Sí	
12	El presupuesto aprobado y ejercido está desglosado por categoría económica.	Sí	
13	El presupuesto aprobado y ejercido está desglosado por categoría funcional.	Sí	
14	El presupuesto aprobado y ejercido está desglosado por proyectos específicos.	Sí	
15	En el presupuesto se especifican supuestos y previsiones económicas.	Sí	
16	En el presupuesto se especifican créditos fiscales.	Sí	
17	En el presupuesto se especifican pasivos y activos financieros.	Sí	
18	En el presupuesto se especifican activos no financieros.	Sí	
19	En el presupuesto se especifican obligaciones asociadas a pago de pensiones de los empleados de Gobierno.	Sí	
20	En el presupuesto se especifican pasivos contingentes.	Sí	

21	Se publican los informes de ejecución del presupuesto, a más tardar treinta días posteriores al cierre del ejercicio (sea mensual, trimestral o semestral).	Sí	
22	El presupuesto incluye y desglosa destinatarios y criterios para administración y asignación de recursos a personas físicas y morales.	Sí	
23	El presupuesto incluye exenciones fiscales.	Sí	
24	En el presupuesto se establece el número de plazas distinguiendo entre empleados de confianza y empleados de base con su desglose correspondiente.	Sí	
25	En el presupuesto se establece un tabulador de salarios de todos los empleados de la administración pública.	Sí	
26	El presupuesto de egresos de la entidad federativa desglosa el presupuesto del Poder Legislativo.	Sí	
27	El presupuesto de egresos de la entidad federativa desglosa el presupuesto del Órgano de Fiscalización Superior.	Sí	
28	El presupuesto de egresos de la entidad federativa desglosa el presupuesto del Poder Judicial.	Sí	
29	El presupuesto de egresos de la entidad federativa desglosa el financiamiento a partidos políticos.	Sí	

30	El presupuesto de egresos de la entidad federativa desglosa el presupuesto de todos los órganos autónomos constitucionales locales.	Sí	
31	En el presupuesto de egresos de la entidad federativa se desglosan los destinatarios de subsidios o fideicomisos y/o entrega de recursos públicos.	Sí	
32	Se publica una versión ciudadana del presupuesto	Sí	
33	El presupuesto desglosa el monto de los excedentes que se pueden utilizar sin autorización de la Cámara de Diputados.	No	No se desglosan esos montos.

Los resultados del diagnóstico del componente de información presupuestal evidenciaron que las prácticas de la Secretaría de Finanzas del gobierno estatal son correctas respecto de lo esperado en generación de desgloses de información presupuestal. Las áreas de oportunidad identificadas tienen que ver con la ausencia de mecanismos de presupuesto participativo en el estado de Coahuila. Esto no sólo se vincula con la necesidad de modificaciones legales, acordes con la legislación de otras entidades federativas y con buenas prácticas en la materia, que ha sido tema de discusión en la literatura de participación ciudadana en los últimos lustros, también se relaciona con el establecimiento de mecanismos administrativos para la participación ciudadana en el proceso de construcción del proyecto de presupuesto de egresos. El presupuesto participativo es un mecanismo de rendición de cuentas que facilita la participación de la ciudadanía en el proceso presupuestal, a la vez que permite el acompañamiento de los ciudadanos al gobierno, desde la proyección y programación del gasto y hasta la fiscalización, pasando por el ejercicio de los recursos públicos, lo cual tiene la posibilidad de generar un contexto de mayor confianza ciudadana en las acciones gubernamentales.

Otro de los temas relevantes se vincula también con la confianza ciudadana en el gobierno y es lo referente al documento de presupuesto ciudadano. Este tipo de productos de información

permiten que la ciudadanía acceda a datos que de otra manera quizás no entendería. La idea del presupuesto ciudadano remite a la transparencia proactiva e implica acercar la información a las personas, sin necesidad de que esa información sea eminentemente técnica. El ejercicio que refiere la Secretaría de Finanzas como “presupuesto ciudadano” no se apega a las buenas prácticas en la materia, pues se limita a disponer la información en una tabla que no contiene ninguna explicación, más allá de otra tabla que señala conceptos generales del presupuesto de egresos. Si se toma en cuenta, por ejemplo, el presupuesto ciudadano que genera el gobierno del estado de Jalisco queda claro cuáles son los elementos básicos de un documento de esa naturaleza, que debe traducir la información técnica a lenguaje simple.

- **Componente: Información sobre contrataciones públicas**

No.	Variable	Respuesta Coahuila	Comentarios
1	La legislación estatal de contrataciones públicas define montos máximos para procedimientos de adjudicación directa.	Sí	
2	La legislación estatal de contrataciones públicas define montos máximos para procedimientos de invitación restringida.	Sí	
3	El monto máximo para adjudicación directa e invitación restringida es de 400,000 pesos o inferior.	Sí	Para adjudicación directa.
4	La legislación estatal de contrataciones públicas permite el uso del mecanismo de subastas electrónicas.	Sí	

5	La legislación estatal de contrataciones públicas permite el uso del mecanismo de pujas en reversa.	Sí	En la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila se le denomina “subasta electrónica inversa”.
6	La legislación estatal de contrataciones públicas permite el uso del mecanismo de compras consolidadas.	Sí	
7	La legislación estatal de contrataciones públicas define la información básica que deben contener las convocatorias de licitaciones PÚBLICAS.	Sí	
8	La legislación estatal de contrataciones públicas define la información básica que deben contener las bases de las licitaciones públicas.	Sí	
9	La legislación estatal de contrataciones públicas tipifica las infracciones en las que se puede incurrir en caso de malas prácticas en los procesos de contratación.	Sí	En el apartado “De las infracciones y sanciones” de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Coahuila.
10	La legislación estatal de contrataciones PÚBLICAS establece sanciones para la colusión en los procesos de contratación.	Sí	Corresponden las de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
11	La legislación estatal de contrataciones públicas establece sanciones para el conflicto de interés en los procesos de contratación.	Sí	En el apartado “De las infracciones y sanciones” de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y

			Contratación de Servicios del Estado de Coahuila.
12	La legislación estatal de contrataciones públicas establece sanciones para el abuso de autoridad en los procesos de contratación.	Sí	Corresponden las de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
13	La legislación estatal de contrataciones públicas establece sanciones para el tráfico de influencias en los procesos de contratación.	Sí	Corresponden las de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
14	La legislación estatal de contrataciones PÚBLICAS establece el uso de mecanismos electrónicos de difusión durante todo el proceso de contratación.	Sí	
15	La legislación estatal de contrataciones públicas o transparencia obliga a que se generen expedientes sobre los procesos de contratación.	Sí	
16	Existe un sistema electrónico público de compras.	Sí	Utilizan Compranet.
17	Existe evidencia de que en los procesos de contratación participan testigos sociales.	Sí	Está previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Coahuila.

18	Las adjudicaciones directas se acompañan siempre de un dictamen técnico de justificación.	Sí	Está previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Coahuila. Se denomina “dictamen de excepción”.
19	El dictamen técnico de justificación de las adjudicaciones directas se publica.	No	No se encontró evidencia.
20	La convocatoria de licitación se difunde a través de medios de comunicación oficial (electrónicos e impresos).	Sí	Está previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Coahuila.
21	La convocatoria de licitación se difunde a través de los medios de mayor circulación en la entidad federativa.	Sí	Está previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Coahuila.
22	Existe evidencia de que las sesiones de los comités de adquisiciones se transmiten en vivo.	Sí	Al menos de cuatro dependencias:(1) Secretaría de Finanzas, (2) Instituto Coahuilense de Infraestructura Física Educativa, (3) Sistema

		<p>Para el Desarrollo Integral de la Familia, (4) Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad. Se transmiten por medio del portal de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas.</p>
23	<p>Existe evidencia de que las sesiones de las Síntesis de juntas de aclaraciones se transmiten en vivo.</p>	<p>Al menos de cuatro dependencias: (1) Secretaría de Finanzas, (2) Instituto Coahuilense de Infraestructura Física Educativa, (3) Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, (4) Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad. Se transmiten por medio del portal de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas.</p>

24	Las modificaciones de las convocatorias se anuncian con anticipación (en un plazo de, al menos, 30 días anteriores al inicio de la misma).	Sí	Está previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Coahuila.
25	Existe evidencia para verificar públicamente la aplicación correcta de las reglas o procedimientos de contrataciones.	Sí	Seguimiento por medio de Compranet y de la información de cada proceso de contratación publicada, además de las sesiones en vivo.
26	Se aplican técnicas de administración de riesgo. En su caso, detallar metodología.	No	No se encontró evidencia.
27	Existe evidencia de que, en los procesos de contratación, se realizan estudios de mercado para la elaboración de los términos de referencia.	Sí	Está previsto en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Coahuila.
28	Se publica el registro de proveedores sancionados y la justificación de las sanciones.	Sí	Lo publica la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas.
29	Existen mecanismos de denuncia anónima para que los servidores públicos reporten violaciones a la legislación o comportamientos inusuales y patrones sospechosos en los procesos de contratación.	No	No se encontró evidencia.
30	Los expedientes completos de los procesos de licitación se publican una vez que éstos concluyen, incluyendo el contrato final asignado.	Sí	

	De las licitaciones PÚBLICAS o procedimientos de invitación restringida se publican los siguientes documentos, además del expediente completo en versión pública:		
31	La convocatoria o invitación emitida, con sus fundamentos legales.	Sí	
32	Los nombres de los participantes o invitados.	Sí	
33	El nombre del ganador y las razones que lo justifican.	Sí	
34	El área solicitante y la responsable de la ejecución de la contratación.	Sí	
35	Las convocatorias e invitaciones emitidas.	Sí	
36	Los dictámenes y fallo de adjudicación.	Sí	
37	El contrato y sus anexos.	Sí	
38	Los mecanismos de vigilancia y supervisión incluyendo, en su caso, los estudios de impacto ambiental y urbano.	No	No se encontró evidencia.
39	La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, si aplica.	Sí	

40	Origen de los recursos (federales, estatales o municipales), así como el tipo de fondo de participación o aportación respectiva.	Sí	
41	Los convenios modificatorios, en su caso.	No	No se encontró evidencia.
42	Informes de avance físico o financiero de las contrataciones.	No	No se encontró evidencia
43	Convenio de terminación.	No	No se encontró evidencia
44	El finiquito	No	No se encontró evidencia
	De las adjudicaciones directas se publican los siguientes documentos, además del expediente completo en versión pública:		
45	La propuesta enviada por el participante.	Sí	
46	Los motivos y fundamentos legales aplicados.	Sí	
47	La autorización del ejercicio de la opción.	No	No se encontró evidencia
48	En su caso, las cotizaciones consideradas, indicando nombre de los proveedores y montos de las mismas.	Sí	
49	El nombra de la persona física o moral a la que se adjudicó.	Sí	
50	La unidad administrativa solicitante y la responsable de la ejecución de la contratación.	Sí	
51	El número, fecha, monto y plazo de ejecución del contrato.	Sí	

52	Los mecanismos de vigilancia y supervisión incluyendo, en su caso, los estudios de impacto ambiental y urbano.	No	No se encontró evidencia.
53	Los informes de avance de las contrataciones.	No	No se encontró evidencia.
54	El convenio de terminación.	No	No se encontró evidencia.
55	El finiquito.	No	No se encontró evidencia.
56	Los lineamientos garantizan que las compras se realicen a través de licitación PÚBLICA y solo excepcionalmente (menos del 20%) a través de adjudicación directa.	No	No se encontró evidencia.
57	El sistema electrónico de compras público permite dar seguimiento a todo el proceso de adquisiciones (desde los padrones de proveedores, convocatorias, la elección del proveedor, el ejercicio del contrato y la conclusión del mismo).	Sí	
58	Existe un comité evaluador que identifique violaciones a la ley, comportamientos inusuales y patrones sospechosos que puedan existir durante la presentación de oferta y en su caso	No	No se encontró evidencia.

	descalifica la participación de los involucrados.		
59	El comité Evaluador revisa los procesos de invitación a concursos y las convocatorias e identifica posibles sesgos.	No	No se encontró evidencia.

En el componente de información sobre contrataciones públicas se identifica que existen los mecanismos necesarios de diseño legal para el desempeño aceptable de los procesos de contratación en el estado de Coahuila. Aun así, se identifican algunas áreas de oportunidad:

- El sistema electrónico de compras, Compranet, es una herramienta de carácter federal. Es deseable que el gobierno estatal pueda desarrollar un mecanismo propio para el desahogo de los procesos de contrataciones de carácter estatal.
- Destaca la buena práctica de las transmisiones de las sesiones de los procesos de licitación, sin embargo, convendría tener en cuenta que si esa práctica se lleva a cabo con cuatro dependencias del Poder Ejecutivo estatal, bien podría ampliarse a otras. Es decir, la buena práctica podría ser de utilidad para mejorar los cauces de la vigilancia y el acompañamiento ciudadanos a los procesos de contratación.
- Los elementos de los cuales no se encontró evidencia podrían cumplirse sin inconvenientes, pues forman parte de los expedientes de contrataciones y, en estricto sentido, integran la estructura de obligaciones de transparencia, por lo cual es posible incluso que ya estén publicados como parte de otros documentos. Sin embargo, es deseable que se verifique cada uno de los casos y, de ser la circunstancia, que se promueva la publicación de la información faltante.

Las áreas de oportunidad que evidenció el diagnóstico en este componente están relacionadas primordialmente con falta de información disponible.

- **Componente: Información de contabilidad**

No.	Variable	Respuesta Coahuila	Comentarios
1	La legislación estatal de presupuesto y contabilidad reproduce las obligaciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	Sí	
2	Existe un manual de contabilidad gubernamental, armonizado con las obligaciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	Sí	
3	Existen registros contables y presupuestarios con base en el manual de contabilidad gubernamental.	Sí	
4	Se usa un software que permite la generación de la información desglosada como lo solicita la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	Sí	
5	Los sistemas contables generan periódicamente estados e información financiera de la entidad federativa.	Sí	
6	Los informes contables integran registro de ingresos estimados.	Sí	

7	Los informes contables integran registro de ingresos modificados.	Sí	
8	Los informes contables integran registro de los ingresos devengados.	Sí	
9	Los informes contables integran registro de los egresos aprobados.	Sí	
10	Los informes contables integran registro de los egresos comprometidos.	Sí	
11	Los informes contables integran registro de los egresos devengados.	Sí	
12	Los informes contables integran registro de los egresos pagados.	Sí	
	La información en materia de ingresos desglosa:		
13	Ingresos del sector gobierno.	Sí	
14	Ingresos tributarios.	Sí	
15	Ingresos no tributarios.	Sí	
16	Ingresos de origen federal.	Sí	
17	Ingresos por participaciones.	Sí	
18	Ingresos por fondo de aportaciones.	Sí	
19	Ingresos de sector paraestatal no financiero.	Sí	
20	Otros ingresos.	Sí	
	La información que se publica sobre la deuda integra:		
21	Saldo de la deuda.	Sí	
22	Endeudamiento neto.	Sí	
23	Costo financiero de la deuda.	Sí	

24	Comparativo con años anteriores.	Sí	
25	Deuda de corto y largo plazo.	Sí	
26	Deuda por su origen: interna y externa.	Sí	
27	Deuda por fuentes de financiamiento.	Sí	
28	Los informes contables, con ingresos y egresos, reportan las variaciones de lo ejercido respecto a lo presupuestado.	Sí	
	Los informes de ejecución incluyen:		
29	Clasificación económica.	Sí	
30	Clasificación administrativa.	Sí	
31	Clasificación funcional (con subfunciones).	Sí	
	Los informes contables permiten identificar:		
32	Operaciones de ingresos.	Sí	
33	Gastos.	Sí	
34	Activos patrimoniales de los entes PÚBLICOS.	Sí	
35	Pasivos patrimoniales de los entes PÚBLICOS.	No	No se encontró evidencia.
36	Los informes contables integran el ejercicio presupuestario con la operación contable.	Sí	
37	Los informes contables reportan el flujo de efectivo de la entidad.	Sí	
38	Los informes contables reportan cada operación que genera derechos y	Sí	

	obligaciones derivadas de la gestión económico-financiera de los entes PÚBLICOS.		
39	El Sistema de Contabilidad Gubernamental genera estados financieros en tiempo real.	Sí	
40	Los estados financieros se publican al menos siete días posteriores al cierre de los ejercicios mensuales o trimestrales.	Sí	
41	Los informes contables reportan los inventarios de los bienes muebles e inmuebles de los entes PÚBLICOS.	No	
42	Los informes contables reportan cuentas de orden para el registro de ingresos y egresos.	Sí	
43	Los informes contables reportan bienes muebles e inmuebles de la entidad federativa.	Sí	
44	Los informes contables reportan, de forma individual y agregada, el registro de las operaciones en las cuentas de orden, de balance y de resultados.	No	
	Los informes contables reportan los egresos con las siguientes clasificaciones:		
45	Clasificación Administrativa (permite identificar qué área gasta);	Sí	

46	Clasificación funcional;	Sí	
47	Clasificación programática	Sí	
48	Clasificación Económica;	Sí	
49	Clasificación por Objeto del Gasto.	Sí	
50	Los informes contables reportan el valor del patrimonio total del gobierno estatal.	No	No se encontró evidencia.
51	Existen herramientas de consulta interactiva de la información contable.	No	No se encontró evidencia.

En este componente, el resultado del diagnóstico permite identificar las condiciones necesarias para el buen desempeño en materia de generación, registro y publicación de información contable conforme el proceso de ejercicio de los recursos públicos. Es importante señalar el faltante a que hace referencia la última variable: la herramienta interactiva de consulta de la información contable. En efecto, la información se presenta de forma trimestral y con los desgloses que se especifican en el resto de las variables del componente, sin embargo, la consulta no es mediante una herramienta electrónica interactiva, la ventana existente se limita a proveer la información en un apartado de obligaciones de transparencia contable, en el cual se disponen los documentos en formato PDF, lo cual tampoco es deseable, pues limita el acceso a la información y el uso libre de los datos disponibles por parte de los ciudadanos, para algunos cruces y/o operaciones numéricas respecto de los ejercicios presupuestales. De ahí que esta sea un área de oportunidad importante. Si la información se genera, se procesa y se pone a disposición en los tiempos previstos por la legislación contable y de transparencia, entonces el paso necesario es la construcción de una herramienta de consulta interactiva que permita descargar la información en formatos abiertos y no propietarios.

- Componente: Información sobre monitoreo y evaluación**

	Variable	Respuesta Coahuila	Comentarios
1	La entidad federativa cuenta con legislación en materia de evaluación de políticas y programas públicos.	Sí	En la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Coahuila de Zaragoza, se establecen los sistemas de Evaluación del Desempeño y de Planeación, a través de los cuales se realizará la evaluación de las políticas PÚBLICAS respecto de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo.
2	La entidad federativa cuenta con un Plan de Desarrollo Estatal diseñado en función de la metodología de marco lógico. Detallar proceso metodológico y remitir metodología, en su caso.	No	No se encontró evidencia.
3	El Plan de Desarrollo Estatal cuenta con objetivos estratégicos definidos.	Sí	

4	El Plan de Desarrollo Estatal se elaboró con base en un diagnóstico de la situación de la entidad federativa.	No	No se encontró evidencia.
5	El Plan de Desarrollo Estatal cuenta con indicadores cuantitativos y cualitativos para medir su desempeño.	Sí	Se establecen indicadores de desempeño y se publica el seguimiento en un micrositio especializado.
6	La entidad federativa cuenta con un órgano especializado encargado de la evaluación de políticas PÚBLICAS.	No	No se encontró evidencia.
7	La entidad federativa cuenta con un sistema de monitoreo y evaluación que mide los resultados de las políticas y programas públicos.	No	No se encontró evidencia.
8	Existe evidencia de que realizan evaluaciones a los programas de la entidad federativa, con base en un programa anual de evaluación.	Sí	Se encontró un Programa Anual de Evaluación para 2017-2018.
9	Los evaluadores son externos.	No	No se encontró evidencia.
10	La contratación de los evaluadores externos se hace por los mecanismos de licitación o, al menos, invitación restringida.	No	No se encontró evidencia.
11	Se publican las evaluaciones realizadas.	No	No se encontró evidencia.

12	Las evaluaciones de consistencia y resultados cumplen con los criterios de diseño, planeación estratégica, cobertura y focalización, operación, percepción de la población objetivo y de resultados.	No	No se encontró evidencia.
-----------	--	----	---------------------------

En el componente sobre monitoreo y evaluación, la información no fue proporcionada por las dependencias a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Sin embargo, el equipo de investigación realizó la búsqueda de la información para responder a las variables del componente. La revisión en portales del gobierno estatal, en particular de las páginas de obligaciones de transparencia, ofreció algunos resultados. Debe tenerse en cuenta que la revisión fue exhaustiva, si bien se llevó a cabo sólo en medios electrónicos. Esto implica que, en algunos casos, la información de las variables podría existir, aunque no estar publicada en internet o estarlo de forma compleja y poco accesible. Esta consideración no obsta para elaborar la valoración correspondiente, si se tiene en cuenta que la información respecto de evaluaciones de política pública, al ser parte de la estructura de obligaciones de la legislación general en materia de transparencia, debería estar disponible en medios electrónicos.

El diagnóstico permite identificar áreas de oportunidad de atención urgente. El esquema que se ha diseñado para dar seguimiento a los avances del Plan Estatal de Desarrollo es una buena práctica. El diseño de los indicadores de avances y el micrositio en el cual se dispone la información es una ventana óptima para la presentación de los resultados del plan estatal, así como información adicional relevante, por ejemplo, los comparativos con otras entidades federativas y las fichas de los indicadores. Pese a esto, el modelo de evaluación que se construyó para el Plan Estatal de Desarrollo no es un modelo de evaluación de políticas pública.

Por otro lado, no se encontró evidencia de la existencia de un órgano especializado en evaluación de políticas públicas, como sí existe en otras entidades federativas, por ejemplo, Durango y Guanajuato. En ese mismo sentido, tampoco fue posible hallar información respecto de los encargados de las evaluaciones de política pública, si es que existen, o de los procesos de contratación, así tampoco los resultados de las evaluaciones, a pesar de que existe un parámetro

normativo que habla de sistemas de evaluación y de planeación, que es la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Coahuila de Zaragoza.

- **Componente: Información sobre fiscalización**

No.	Variable	Respuesta	Evidencia
1	La entidad federativa cuenta con legislación en materia de fiscalización.	Sí	Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila.
2	La legislación estatal de fiscalización está armonizada con el Sistema Nacional de Fiscalización.	Sí	Artículo 93, fracción XXXVII de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila.
3	El Órgano de Fiscalización Superior tiene autonomía constitucional.	No	
	El Órgano de Fiscalización Superior tiene atribuciones para llevar a cabo auditorías:		
4	De desempeño	Sí	Artículo 19 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila.

5	De cumplimiento financiero	Sí	Artículos 19 y 94, inciso A, fracción XV de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila.
6	Tecnologías de información	Sí	Artículo 94, inciso A, fracción XIII de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila.
7	Forenses	No	
8	Legalidad	Sí	Artículo 94, inciso A, fracción XIV de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila.
9	De seguimiento	No	
10	De control	No	

11	El Órgano de Fiscalización Superior reporta el cumplimiento de su plan anual de auditorías.	Sí	La información se detalla en el Informe Anual de Resultados.
12	El Órgano de Fiscalización Superior reporta los casos de los entes que no proporcionaron información para la auditoría.	Sí	La información se detalla en el Informe Anual de Resultados.
13	El Órgano de Fiscalización Superior decide libremente el contenido y la oportunidad de sus informes de auditoría.	Sí	Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones.
14	Las auditorías practicadas por el Órgano de Fiscalización Superior han logrado la sanción penal de servidores PÚBLICOS.	No	Al momento no se han establecido sanciones penales, pero el avance en las denuncias interpuestas se consigna en el Informe de Seguimiento.
15	Las auditorías practicadas por el Órgano Superior de Fiscalización han logrado la sanción administrativa de servidores públicos.	Sí	La información se consigna en el Informe de Seguimiento.
16	Número de auditorías que ha realizado el Órgano de Fiscalización Superior en los dos años anteriores.	Sí	La información se detalla en el Informe Anual de Resultados.

17	Tipo de auditorías que ha realizado el Órgano de Fiscalización Superior en los dos años anteriores.	Sí	La información se detalla en el Informe Anual de Resultados.
18	Número de procedimientos administrativos que ha iniciado el Órgano de Fiscalización Superior en los dos años anteriores.	Sí	La información se consigna en el Informe de Seguimiento.
19	Número de procedimientos penales que ha iniciado el Órgano de Fiscalización Superior en los dos años anteriores.	Sí	La información se consigna en el Informe de Seguimiento.
20	Número de recomendaciones de auditoría que se han solventado (admitido y corregido).	Sí	La información se consigna en el Informe de Seguimiento.

En el componente de fiscalización, los resultados del diagnóstico son consecuentes con las buenas prácticas en la materia en las entidades de fiscalización superior del país. Conviene destacar que algunos tipos de auditoría no están considerados dentro de la legislación en la materia como campos previstos para el desempeño de la labor de fiscalización de la Auditoría Superior de Coahuila, a saber: auditorías forenses, de seguimiento y de control.

Por otro lado, también vale la pena destacar los resultados de la Auditoría Superior en materia de sanciones. Los informes anuales de actividades y los informes de seguimiento son instrumentos de relevancia para valorar los resultados de la labor técnica del órgano de fiscalización superior. El desglose de datos que se incluye en esos informes es suficiente para evaluar los avances y los resultados en materia de fiscalización. La puesta a disposición de la información para los ciudadanos, en lenguaje sencillo, es la única asignatura pendiente de la Auditoría Superior de Coahuila, además de los mecanismos de participación ciudadana en el proceso de auditoría. Estas prácticas son deseables, pues constituyen el parámetro más elevado en materia de fiscalización

en el ámbito internacional; son un espacio propicio para la innovación en un escenario en el cual la entidad de fiscalización superior estatal ya lleva a cabo su labor de manera óptima.

- **Componente: Información sobre control interno**

No	Variable	Resultado Coahuila	Comentarios
1	Se utilizan metodologías de identificación de áreas de riesgo. Detallar metodología, en su caso.	Sí	La Matriz de Administración de Riesgos Institucionales, que tiene sustento en el Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno y la Norma General de Control Interno del Estado de Coahuila de Zaragoza.
2	Se utilizan metodologías de identificación y mejora de nodos de decisión complejos. Detallar metodología, en su caso.	Sí	Norma General de Control Interno e instrumentos de mapa de riesgos y matriz de administración de riesgos.
3	La contraloría cuenta con un catálogo integrado de todos los trámites del gobierno estatal, vinculados con las atribuciones legales que los sustentan.	Sí	La plataforma se denomina "Registro Único de Trámites Administrativos".

4	La contraloría cuenta con una metodología para identificar, analizar y mejorar los procedimientos administrativos de las dependencias y entidades del gobierno estatal.	Sí	Norma General de Control Interno del Estado de Coahuila de Zaragoza.
5	La contraloría cuenta con una metodología de monitoreo y evaluación del desempeño de los funcionarios PÚBLICOS de las dependencias y entidades del gobierno estatal.	Sí	Sistema de Evaluación de Control Interno, previsto por la Norma General de Control Interno del Estado de Coahuila de Zaragoza.
6	La contraloría cuenta con un catálogo de trámites y procedimientos riesgosos de todas las dependencias y entidades del gobierno estatal.	No	No se encontró evidencia.
7	La contraloría cuenta con un esquema de capacitación y actualización permanente de los funcionarios públicos en metodologías de control interno.	Sí	Está previsto por la Norma General de Control Interno del Estado de Coahuila de Zaragoza y se organiza en torno de la Dirección de Capacitación, Profesionalización y Modernización de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas.

8	La contraloría implementa el Marco de Referencia COSO.	Sí	Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno y la Norma General de Control Interno del Estado de Coahuila de Zaragoza.
9	La contraloría cuenta con una Metodología para la simplificación administrativa en aquellos procedimientos que se identifican como riesgosos o susceptibles de mejora.	No	No se encontró evidencia.
10	La contraloría cuenta con autonomía técnica y de gestión.	No	No se encontró evidencia en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza.
11	La contraloría cuenta con criterios profesionales de selección y reclutamiento que privilegian el mérito y cualidades técnicas para la contratación de funcionarios especializados en control interno.	No	No se encontró evidencia.
12	La contraloría cuenta con un mecanismo de protección a denunciantes internos (<i>whistleblowers</i>).	No	No se encontró evidencia.
13	Existen perfiles de puesto en todas las dependencias y entidades del gobierno estatal, al menos desde el nivel de jefe de departamento.	Sí	Desglosado por dependencia.

Los resultados del diagnóstico de este componente evidencian que en Coahuila existe el marco regulatorio para el control interno, en la lógica que propuso la legislación de combate a la corrupción en el país, es decir, entender al control interno como el conjunto de herramientas de vigilancia, monitoreo y mejora de la gestión, para la optimización de la eficiencia y eficacia de las administraciones públicas. Uno de los puntos respecto de los cuales no se encontró evidencia fue un catálogo de trámites y procedimientos riesgosos en el gobierno estatal. Esto no significa que ese tipo de información no se genere, pues podría hallarse en los mapas de riesgos y/o en las matrices de administración de riesgos. Sin embargo, en la información disponible en los portales electrónicos de la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas y de “Coahuila Transparente” no se encontró evidencia al respecto. En todo caso, convendría que se publique esa información, si es que se genera. Otra cuestión relevante sobre la que no se encontró evidencia es una estrategia de simplificación administrativa. Debe tenerse en cuenta que la Norma General de Control Interno del Estado de Coahuila de Zaragoza sí tiene en cuenta que una de las líneas de acción para la mejora de la gestión es la simplificación o mejora de la eficiencia de los procedimientos administrativos. No obstante, no se identificó evidencia sobre la existencia de alguna metodología o mecanismo rutinario para la simplificación administrativa como elemento transversal de las acciones de control interno.

Finalmente, dos temas adicionales que son áreas de oportunidad son: (1) la falta de criterios profesionales para selección y reclutamiento. Esta variable no se refiere a servicio de carrera, sino a elementos mínimos para el reclutamiento de funcionarios públicos. Respecto de esto no se encontró evidencia. En segundo lugar, (2) un tema pendiente e importante, por la discusión pública que se ha dado en el país, a la luz de las acciones de la Secretaría de la Función Pública del gobierno nacional, es el de la falta de un mecanismo de protección a denunciantes internos. No sobra añadir que en el debate público estatal, durante 2019, también se ha mencionado ese ámbito como un área de oportunidad que debe atenderse, desde el punto de vista legal.

- **Componente: Información sobre profesionalización**

No.	Variabl e	Respuesta Coahuila	Comentarios
1	Existe un servicio profesional de carrera estatal, integrado para todas las dependencias y entidades.	No	Sin embargo, existen diversas disposiciones específicas de servicio profesional de carrera, en el ámbito municipal, en el Tribunal de Justicia Administrativa y en el ámbito estatal para funcionarios públicos del ramo de seguridad pública.
2	Existen ejemplos de servicio profesional de carrera en alguna(s) dependencia(s) y entidad(es) del gobierno estatal.	Sí	En las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, además de en municipios y Tribunal de Justicia Administrativa.
3	Existe al menos un modelo de profesionalización para la selección, reclutamiento y contratación basadas en mérito y competencias profesionales en todas o alguna de las dependencias y entidades del gobierno estatal.	Sí	En las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, además de en municipios y Tribunal de Justicia Administrativa.

4	Existe un plan anual de formación de capacidades y especialización para los funcionarios públicos o, al menos, una estrategia de capacitación del gobierno estatal.	Sí	Programa Estatal de Capacitación, realizado con base en la encuesta de Detección de Necesidades de Capacitación, que se responde mediante el Sistema Integral de la Dirección de Capacitación.
5	Existe un esquema de incentivos para funcionarios públicos vinculado al desempeño.	No	No se encontró evidencia.

La evaluación del componente de profesionalización permitió identificar algunos ejemplos de prácticas virtuosas en la construcción de servicios profesionales de carrera en el estado de Coahuila. En el ámbito estatal, de forma general, no existe un servicio profesional de carrera, sin embargo, en el ámbito de la seguridad pública existe un reglamento del servicio profesional, desde 2014. Otros ejemplos son el del Tribunal de Justicia Administrativa, también de ámbito estatal, así como los de algunos municipios, que también se encuentran regulados en normatividad específica. El problema que devela el diagnóstico es que los esfuerzos por construir mecanismos de profesionalización en la entidad federativa son todavía casos aislados, que no han tenido la virtud de diseminarse para generar otros ejemplos. En ese mismo sentido, en el ámbito del gobierno estatal se identifica un énfasis en la capacitación, considerando que esta vertiente por sí sola es suficiente en materia de profesionalización.

Estudio en grupos focales regionales realizados por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Coahuila

Entre los ejercicios de investigación y acopio de información que ha llevado a cabo la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Coahuila, como parte del proceso de construcción de la propuesta de política estatal en la materia, se realizó un estudio de percepción de la corrupción en el estado, por medio de cinco grupos focales regionales, durante el mes de septiembre de 2019.

La metodología utilizada en el estudio es muy concreta. Se plantearon diversas cuestiones vinculadas con el problema de la corrupción y a partir de las respuestas de los participantes se extrajeron las frases de mayor repetición, además de haberse interpretado tres criterios cualitativos: (1) la carga emocional, (2) la carga valorativa y (3) la expectativa de futuro.

La guía de conversación que estructuró los grupos de enfoque propuso cinco dimensiones, a saber:

- Entendimiento de la corrupción;
- Evidencia del problema de la corrupción en la sociedad civil;
- Evidencia del problema de la corrupción en el ámbito académico;
- Evidencia del problema de la corrupción en el ámbito empresarial;
- Propuestas para combatir la corrupción en el Estado.

Los planteamientos de la guía establecieron un parámetro de discusión muy acotado, es decir, prefiguraron las respuestas a obtener. Esto no implica que los resultados no sean útiles, todo lo contrario. Las percepciones identificadas por el estudio permiten sostener que, en sentido general, existen ideas erradas respecto de la naturaleza del fenómeno de la corrupción en tanto problema público. En el mismo sentido, existen otro tipo de confusiones acerca de los objetivos y el diseño de los sistemas anticorrupción en México, pero también sobre las vías pertinentes para atacar el problema. De ahí que los datos que ofrece el estudio, especificando que son de percepción, no caracterizan la realidad del fenómeno de la corrupción, sino aclaran las ideas que campan entre los ciudadanos sobre dicho problema. Esto es de utilidad para adaptar los términos en los que se transmite y comunica la información de las acciones institucionales de combate a la corrupción.

De otro lado, las respuestas obtenidas por el estudio permiten entrar a una discusión diferente. En principio, no sobra enfatizar que el entramado de instituciones a las que se asignó la tarea de combatir la corrupción se sustenta en varias vertientes. Por un lado, están las instituciones con la misión de garantizar el derecho de acceso a la información y articular las políticas de transparencia y protección de datos personales. Estas instituciones son las de mayor trayectoria histórica en el país, pues han ido modificando sus rutinas administrativas conforme a los avances normativos. En segundo lugar, aquellos espacios institucionales encargados de la vigilancia, prevención de la corrupción y mejora de la gestión, desde el ámbito del control interno. Enseguida están las instituciones que tienen el objetivo de vigilar y revisar la gestión pública, cuando ya se ejercieron los recursos públicos, es decir, el control externo o fiscalización. Y, finalmente, las instituciones encargadas del proceso de denuncia, investigación y sanción de actos de corrupción y/o malas prácticas administrativas. El imperativo de este diseño es el trabajo coordinado, entendiendo que todas las instituciones involucradas en los sistemas anticorrupción deben funcionar coherentemente, con el peligro de que el desempeño deficiente en una de ellas tenga consecuencias graves en los resultados del conjunto.

El diseño de los sistemas anticorrupción, además, responde a la idea según la cual, dado que las manifestaciones de la corrupción son diversas, deben atenderse desde varios frentes. Es decir, la definición del problema que sustenta a los sistemas anticorrupción supera a las visiones individualista y burocrática. La primera de ellas entiende a la corrupción como un problema de individuos malos, corruptos, con valores perniciosos. La segunda entiende a la corrupción como un problema burocrático, que se atiende cuando ya sucedió, de modo que las consecuencias se asignan en función de las responsabilidades correspondientes de acuerdo con los diseños de las organizaciones públicas. Esta segunda visión responde a la ‘ruta de papel’, es decir, que se puede sancionar sólo lo que se encuentra registrado en los archivos públicos.

En México, ambas concepciones generan problemas para hallar las soluciones posibles o siquiera las estrategias de acción. Primero, porque cambiar los valores de las personas implicaría la presencia e intromisión del Estado en la vida privada de los individuos, es decir, en aquello que Max Weber denominó la “ética de convicción”. Segundo, porque cambiar los valores morales de los individuos es una tarea harto difícil, no sólo de implementar, sino de diseñar, pues ¿quién decidirá cuáles son los nuevos valores? Tercero, porque, aunque se consiguiera —eso sí, en un plazo muy largo— modificar los valores morales de los individuos y crear una suerte de casta súper moral, eso no garantiza ni que se concluya el problema, ni que los integrantes de esa ‘casta’ efectivamente

tengan interés por participar en los asuntos públicos. De suerte que la visión individualista ofrece estrategias no sólo de muy largo alcance, sino también inciertas en sus resultados. Esas estrategias son las que refieren la educación, los valores y principios como la única forma de resolver el problema de la corrupción. Desafortunadamente esos mecanismos no siempre tendrán efectos sobre el fenómeno que se pretende atender y, en caso de tenerlos, los cambios no serán identificables sino en el muy largo plazo.

Por otro lado, la visión burocrática, dado su origen legalista, tiene el problema de limitar el combate a la corrupción no sólo a los momentos posteriores a los hechos de corrupción, sino a aquellos que se encuentran efectivamente tipificados como delitos o como faltas administrativas. De suerte que el segmento de hechos deshonestos y malas prácticas que no se encuentran en esos supuestos, permanecerían intocados en una estrategia de esta naturaleza.

Afortunadamente, el diseño de los sistemas anticorrupción en el país no ha tomado ninguna de esas dos vías para proponer soluciones al problema. Como ya se dijo, la propuesta mexicana echa mano de un espacio de coordinación, vinculación y trabajo colaborativo entre las instituciones encargadas de transparencia, control interno, control externo y sanciones. Esto significa que la responsabilidad por combatir el problema se comparte y que las estrategias se deberán encaminar a modificar las causas sistémicas que permiten que existan los hechos de corrupción y no sólo a atender las consecuencias de dicho problema. Sin embargo, también debe atenderse el espacio de falta de información que evidencia el estudio elaborado por la Secretaría Ejecutiva en grupos focales. Esa ausencia de información tiene que ver con las ideas —percepciones o apreciaciones— de los ciudadanos, en general, respecto del problema de la corrupción. De ahí que se considere la necesidad de que los comités de participación ciudadana desempeñen la labor de pedagogía social, como la ha denominado Mauricio Merino, es decir, que sean el instrumento para vincular a los ciudadanos con los sistemas anticorrupción y, a la vez, tengan la capacidad de explicar en forma sencilla de qué se tratan los sistemas anticorrupción, cómo se integran, qué hace cada quién y cuáles son los resultados que se pueden esperar.

3. La corrupción en el estado de Coahuila. Situación a partir de indicadores nacionales

El fenómeno de la corrupción es concebido como la captura de instituciones, recursos públicos, y decisiones de gobierno, que obstaculizan la eficacia del Estado, y se manifiesta en el abuso del poder. Es un problema público que demanda la atención de la ciudadanía, no sólo por su prevalencia, y hasta cierto punto normalización, sino por sus implicaciones en todos los ámbitos, en el económico dificulta su crecimiento, y en lo social el otorgamiento de los servicios públicos.

De acuerdo con el *Índice de Percepción de la Corrupción 2018* publicado por Transparencia Internacional¹, México obtuvo un puntaje de 28, y se encuentra en la posición 138 igual que Papúa Nueva Guinea y Rusia. Del Índice del año 2012 al 2017, México ha descendido 6 puntos (34-28), por lo que la percepción de la corrupción en el país ha empeorado. Como bien lo señala este índice, la mayoría de los países han avanzado muy poco en el combate a la corrupción, ya que más de dos tercios de los países evaluados arrojan una calificación menor a 50. La puntuación promedio global es de 43. En este sentido, México se ubica muy por debajo de dicho puntaje con 28.

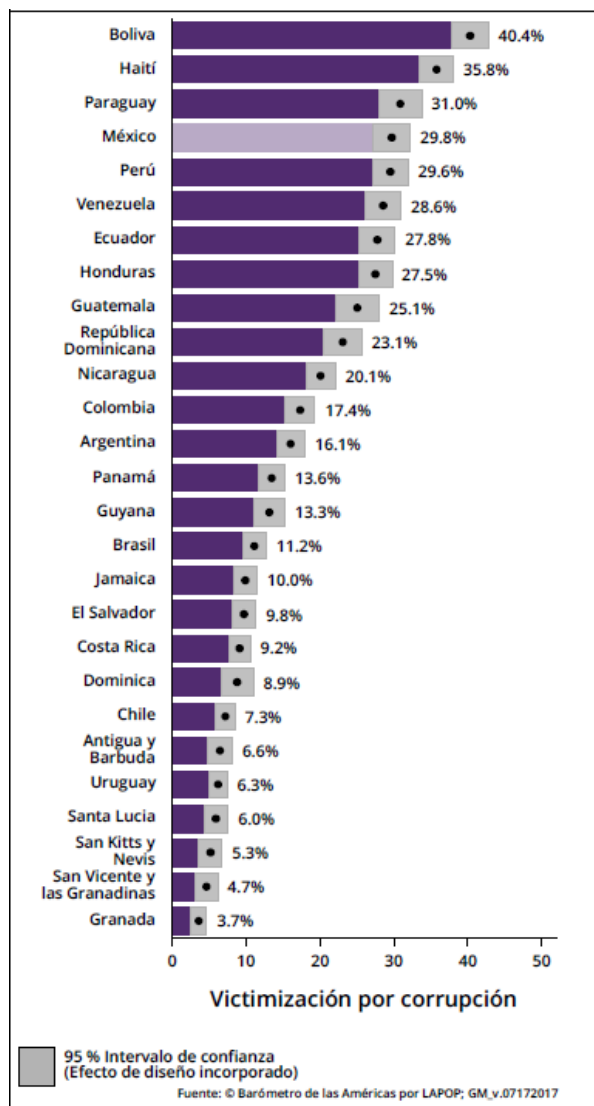
Por su parte, el estudio realizado por el Barómetro de las Américas del Proyecto de Opinión Pública de América Latina (LAPOP)² denominado *“Cultura política de la democracia en México y en las Américas, 2016-2017”*, dedica un capítulo al tema de la corrupción en México, en donde se explora la percepción de los mexicanos en el tema de la corrupción. En este sentido, tres de cada diez mexicanos encuestados indicaron haber sido víctimas de la corrupción en por lo menos una instancia en 2017. Esto representa un leve incremento respecto de la ronda 2014. Asimismo, el estudio arroja que las personas encuestadas, señalaron haber experimentado una situación de corrupción, con mayor frecuencia en su interacción con policías (23%) y funcionarios públicos (11.2%)

¹Transparencia Internacional es una organización no gubernamental, desde 1995 mide la percepción de expertos y empresarios de cada país sobre la corrupción en el sector público. El índice tiene un universo de 180 países y Territorios. El Índice de Percepción de la Corrupción mide en una escala de 0 a 100, donde cero equivale a muy corrupto y 100 a muy transparente. Para mayor detalle, consultar: Transparencia Internacional, *Índice de percepción de corrupción 2018*, <https://www.transparency.org/cpi2018>

² El Barómetro de las Américas aplica una encuesta en países de América Latina basada en muestras probabilísticas nacionales de adultos en edad de votar. El primer conjunto de encuestas se llevó a cabo en 2004 en 11 países; el segundo tuvo lugar en 2006 y recogió opiniones en 22 países a lo largo de la región. En 2008, el proyecto creció para incluir 24 países y en 2010 y 2012 incluyó 26 países de todo el hemisferio. En 2014, el Barómetro de las Américas se implementó en 28 países. La ronda de 2016/17 marca la más extensa en alcance a la fecha, cubriendo 29 países a lo largo de las Américas. Para mayor detalle, consultar: https://www.vanderbilt.edu/lapop/mexico/AB201617_Mexico_Country_Report_V3_03.06.18_W_042018.pdf

Este estudio, demuestra que México ocupa el cuarto lugar en experiencias de corrupción (29.8%), debajo de Bolivia (40.4%), Haití (35.8%) y Paraguay (31.0%), y se encuentra ligeramente por encima de PERÚ (29.6%) y Venezuela (28.6%), tal como se muestra en la siguiente gráfica:

Experiencias con la corrupción en las Américas, 2016-2017

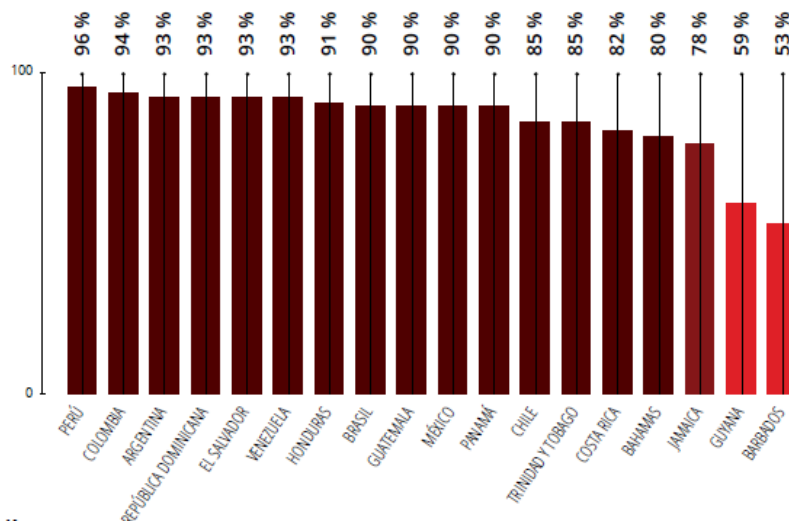


Fuente: Barómetro de las Américas por LAPOP, 2017.

En su más reciente reporte, *Barómetro Global de la Corrupción América Latina y el Caribe 2019*³, Transparencia Internacional, revela que la mayoría de los ciudadanos sostienen que sus Gobiernos no han hecho lo suficiente para combatir la corrupción, y que, por lo tanto, los niveles de corrupción han aumentado en los últimos 12 meses en toda la región.

Como parte del sondeo, el 85% de las personas afirman que la corrupción es un problema grave en su país. Solo el 13 % sostuvo que la corrupción no es un problema o es un problema menor. Perú y Colombia registran el porcentaje más alto de ciudadanos que consideran que la corrupción en el Gobierno es un problema grave en su país, con el 96% y 94%, respectivamente, mientras que México ocupa el quinto lugar con el 90%, junto con Brasil, Guatemala y Panamá.

Porcentaje de personas que piensan que la corrupción en el Gobierno es un problema grave.



Fuente: Transparencia Internacional. Barómetro global de la corrupción América Latina y el Caribe 2019.

³ El Barómetro Global de la Corrupción en América Latina y el Caribe, publicado por Transparency International, presenta el mayor y más detallado conjunto de datos de opinión pública sobre corrupción, así como la experiencia directa de los ciudadanos con el soborno en América Latina y el Caribe. Entre enero y marzo de 2019, el Barómetro Global de la Corrupción encuestó a más de 17.000 ciudadanos que viven en 18 países de la región. Para mayor detalle, consultar: https://www.transparency.org/whatwedo/publication/gcb_latin_america_and_the_caribbean_2019_ES

Los datos estadísticos que arroja este reporte, en el caso específico de México, destaca que, el 44% de la ciudadanía sostiene que la corrupción aumentó en los últimos 12 meses; el 20% aseguró que tuvo que pagar algún soborno por servicios públicos; mientras que el 50% señaló que les ofrecieron sobornos a cambio de votos.

En lo que respecta a la percepción de la corrupción por institución, la policía ocupa el primer lugar con el 69%; en segundo lugar, se ubica a los miembros del parlamento con el 65%; mientras que, en tercer lugar, con el 63%, se considera que el presidente y empleados públicos son corruptos.

Sin lugar a duda, el problema de la corrupción manifestado en el abuso del poder, atenta con la permanencia y garantía de un verdadero Estado de Derecho, aspiración que todo país desea alcanzar. En este sentido, resulta pertinente retomar el estudio realizado por el World Justice Project⁴, el **Índice de Estado de Derecho 2017-2018**, el cual presenta una evaluación de la situación que guarda los 113 países analizados en términos del cumplimiento del Estado de Derecho a nivel mundial; y cuya medición se construye con datos primarios que reflejan la perspectiva y experiencia de las personas en su vida cotidiana.

Según este índice, México ocupa el lugar 92 del total de los 113 países analizados, con un puntaje de 0.45, en una escala de 0 a 1 en la que 1 se traduce como mayor adhesión al Estado de Derecho. Su puntaje es igual al alcanzado por Sierra Leona, Liberia y Kenia, por lo que México se encuentra en el grupo de los países con menor cumplimiento al Estado de Derecho. En contraste, se ubica a los cinco países que registraron una mayor adhesión:

Dinamarca y Noruega con el 0.89, Finlandia con el 0.87, el 0.86 lo obtuvo Suecia, y Países Bajos con el 0.85.

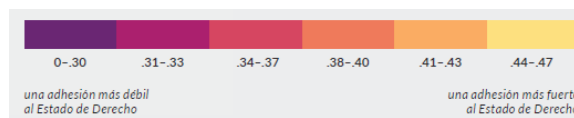
⁴ World Justice Project es una organización independiente asentada en Washington D.C. cuyo objetivo es promover el Estado de Derecho a nivel mundial. Desde 2008 publica el índice de Estado de Derecho con información de 113 países. El Índice de Estado de Derecho 2017-2018, es el séptimo informe anual que mide el Estado de Derecho de acuerdo con las experiencias y percepciones del público general y expertos alrededor del mundo. Presenta una evaluación para 113 países, al asignar puntajes y rankings para ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil, y justicia penal. Para mayor detalle, consultar: World Justice Project, Índice de Estado de Derecho 2017-2018, Washington, D.C., Estados Unidos de América, 2018 p. 5 <https://worldjusticeproject.org/our-work/wip-rule-law-index/wip-rule-law-index-2017%E2%80%932018>.

De acuerdo con el *Índice de Estado de Derecho en México 2018*⁵, realizado de igual manera por el World Justice Project, México obtuvo el 0.39 en promedio nacional, en una escala que oscila entre 0 y 1, donde 1 indica la máxima adhesión al Estado de Derecho. En el caso específico de Coahuila, es de destacar, que se encuentra ubicado en el tercer lugar, al igual que Campeche, Querétaro y Baja California, con un puntaje de 0.43, lo que lo coloca en una adhesión más fuerte al Estado de Derecho, y por encima del promedio nacional. Yucatán, por su parte, fue el mejor evaluado, al registrar el puntaje más alto con el 0.45; mientras que Aguascalientes y Zacatecas, se ubican en el segundo lugar con el 0.44. Uno de los factores que mide el Estado de Derecho, es la “Ausencia de Corrupción”, en este factor Coahuila se ubica igual que el promedio nacional (0.35); Querétaro obtuvo el mayor puntaje (0.42); y, la Ciudad de México se coloca en el último lugar, con el menor puntaje (0.27).

Índice de Estado de Derecho en México. Puntaje y posición por entidad

1	Yucatán	0.45
2	Aguascalientes	0.44
3	Zacatecas	0.44
4	Campeche	0.43
5	Querétaro	0.43
6	Coahuila	0.43
7	Baja California	0.43
8	Hidalgo	0.42
9	Durango	0.42
10	Nuevo León	0.42
11	Sinaloa	0.41
12	Guanajuato	0.41
13	Michoacán	0.40
14	Chiapas	0.39
15	Colima	0.39
*	<i>Promedio nacional</i>	0.39
16	Oaxaca	0.39
17	San Luis Potosí	0.39
18	Chihuahua	0.39
19	Tamaulipas	0.38
20	Tlaxcala	0.38
21	Tabasco	0.38
22	Nayarit	0.37
23	Jalisco	0.37
24	Veracruz	0.37
25	Ciudad de México	0.37
26	Morelos	0.37
27	Quintana Roo	0.36
28	Puebla	0.36
29	Sonora	0.36
30	Estado de México	0.36
31	Baja California Sur	0.35
32	Guerrero	0.29

*Los puntajes se redondean a dos puntos decimales.



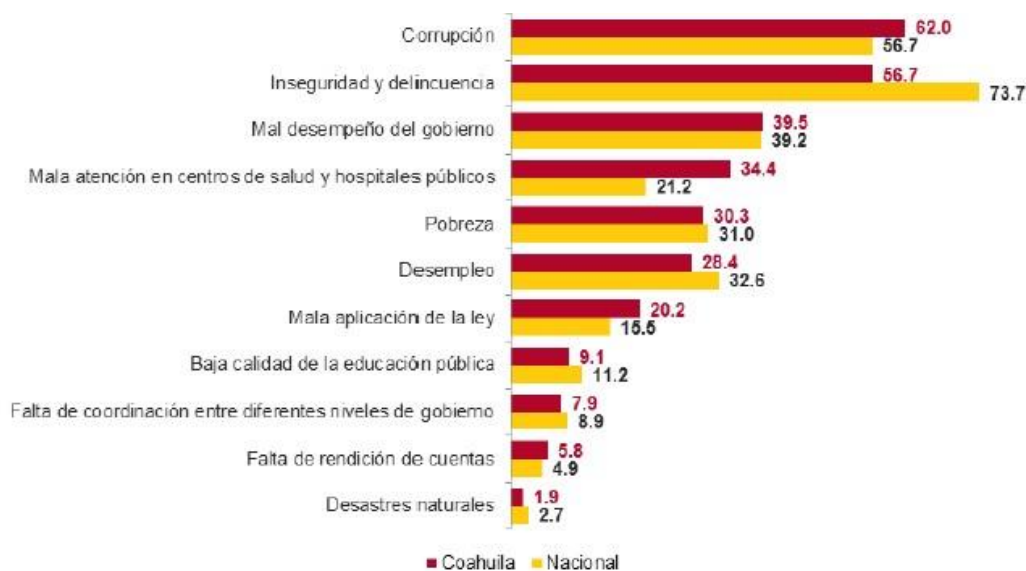
Fuente: World Justice Project. Índice de Estado de Derecho en México 2018.

⁵ El Índice de Estado de Derecho en México 2018 es el primer índice subnacional producido por el WJP, y constituye una de las mediciones más completas sobre el desempeño institucional en el país. Utiliza el mismo marco conceptual y metodológico que el WJP ha utilizado a nivel global para cuantificar la adhesión al Estado de Derecho en cada uno de los 32 estados del país. Asimismo, presenta nuevos datos e indicadores, los cuales se organizan en 42 sub-factores y ocho factores: i) límites al poder gubernamental, ii) ausencia de corrupción, iii) gobierno abierto, iv) derechos fundamentales, v) orden y seguridad, vi) cumplimiento regulatorio, vii) justicia civil y viii) justicia penal. Estos factores resumen distintas manifestaciones del Estado de Derecho, proveen información acerca de las fortalezas y debilidades institucionales de cada entidad, y sirven como puntos de referencia para evaluar el desempeño de las autoridades estatales a lo largo del tiempo o en comparación con el de sus contrapartes en otros estados. Los puntajes de estos factores reflejan las perspectivas y experiencias de más de 25,000 ciudadanos en todo el país y de más de 1,500 especialistas, además de los resultados de una multiplicidad de encuestas sobre estos temas. Para mayor detalle, consultar: World Justice Project. Índice de Estado de Derecho en México 2018. <https://worldjusticeproject.mx/indice-de-estado-de-derecho-en-mexico-2018/>

A. PANORAMA DE LA CORRUPCIÓN COAHUILENSE

De acuerdo con los resultados de la **Encuesta Nacional e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017**⁶, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el problema de la corrupción ocupa el primer lugar de importancia, así lo refirió el 62% de la población de 18 años encuestada, percepción que se ubica por encima del promedio nacional, seguido de la inseguridad y delincuencia con el 56.7%, y el mal desempeño del gobierno con 39.5%.

Problemas más importantes para los habitantes de Coahuila



Fuente: ENCIG 2017, INEGI.

Bajo esta perspectiva, la ENCIG arroja, que el 85.8% de la población del estado de Coahuila, aseguró que los actos de corrupción en su entidad son muy frecuentes o frecuentes. Dato que coloca la percepción de los Coahuilenses por debajo de la percepción a nivel nacional, con el 91.1%. Es de destacar, que la población encuestada, señaló que el sector donde ocurre con mayor frecuencia actos de corrupción, es el de la policía (89.9%), seguido de los partidos políticos (86.6%), y gobierno estatal (80.2%). En contraste, los actores que cuentan con más confianza, según los coahuilenses, son los familiares (89.9%), las escuelas públicas de nivel básico (78.4%) y los compañeros de trabajo (73.9%).

⁶ Para mayor detalle consultar: Encuesta Nacional e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2017 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) <https://www.inegi.org.mx/programas/encig/2017/>

Por otra parte, la tasa de prevalencia de corrupción, —entendido como la población que tuvo contacto con algún funcionario público y fue víctima de un hecho de corrupción— fue de 11 mil 272 por cada cien mil habitantes, ligeramente presenta una diferencia con respecto a la tasa que registró en 2015, de 11 mil 097.

En lo que respecta a la tasa de incidencia de corrupción —considerado como los trámites en donde la población tuvo contacto con servidores públicos y fue víctima de hechos de corrupción— Coahuila obtuvo una tasa de 22 mil 455 por cada cien mil habitantes, por lo que se ubica por debajo de la tasa nacional con 25 mil 541.

En el país, según INEGI, el trámite con el porcentaje más alto de usuarios que experimentaron algún acto de corrupción fue el “contacto con autoridades de seguridad pública” (59.5 por ciento), seguido de permisos relacionados con la propiedad (30.7), gestiones en el Ministerio Público (25.1), diligenciamientos en el municipio (18.6), y en tribunales o juzgados (18.4).

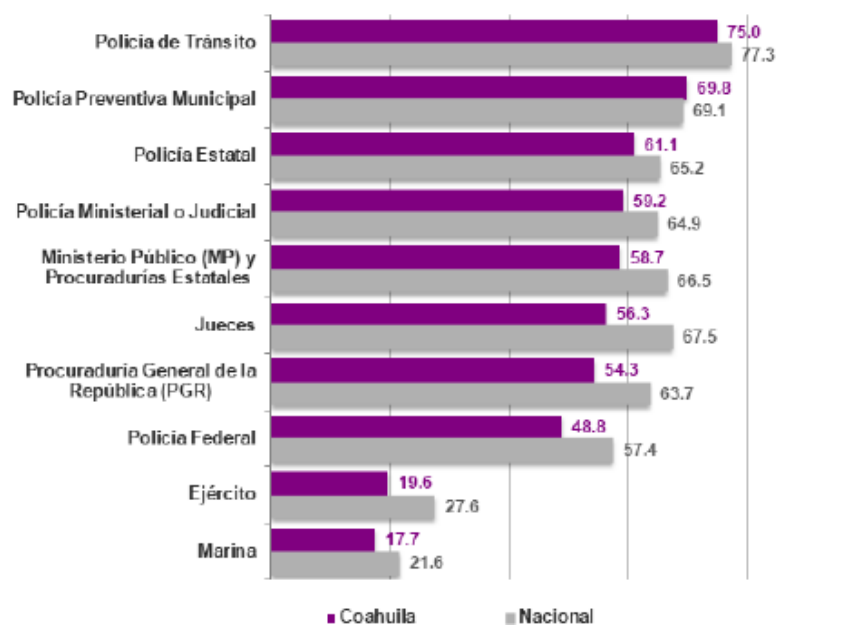
La percepción sobre la corrupción de las instituciones en Coahuila explica en buena medida— como en el ámbito nacional— la baja tasa de denuncia de delitos, incluyendo los hechos de corrupción. En este sentido, la última **Encuesta Nacional de Victimización y Seguridad Pública 2018 (con datos de 2017)**⁷, realizada por el INEGI indica que únicamente se denunció en promedio el 11.8 por ciento de los delitos pero únicamente en 6.8 por ciento de los delitos totales se iniciaron carpetas de investigación en la fiscalía estatal. Así, la cifra negra, como se le conoce a este fenómeno, fue del 93.2 por ciento en 2017, colocándose de esta manera igual que la cifra nacional.

En términos, de la percepción de corrupción respecto de las autoridades de seguridad y de justicia en Coahuila, el 75% de la población de 18 años y más, considera que la policía de tránsito es corrupta, seguida de la policía preventiva municipal, con 69.8%.

⁷ Para mayor detalle consultar: Encuesta Nacional de Victimización y Seguridad Pública 2018 de INEGI (con datos de 2017)

<https://www.inegi.org.mx/programas/envipe/2018/>

**Nivel de percepción sobre la Corrupción en las autoridades
(Marzo - Abril 2018)**



Fuente: ENVIPE, 2018. INEGI

Otra referencia para ilustrar este escenario estatal, es el **Índice Global de Impunidad México (IGI MEX)**⁸, elaborado por la Universidad de las Américas Puebla, tomando en cuenta a las 32 entidades, el promedio nacional del Índice de Impunidad en 2018 aumentó a 69.84 puntos, en comparación con la última medición de 2016 que fue de 67.42. en este índice se ubica Coahuila entre las entidades con grado de impunidad muy alta, en la posición 27.

⁸ Para mayor detalle consultar: Índice Global de Impunidad México (IGI-MEX) https://www.udlap.mx/igimex/assets/files/2018/igimex2018_ESP

B. EJERCICIO DEL GASTO EN EL ÁMBITO LOCAL

Otra herramienta útil —si bien no para medir la corrupción, pero sí el cumplimiento de mejores prácticas de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información, herramientas fundamentales para combatir la corrupción— es el **Índice de Información Presupuestal Municipal (IIPM)** del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)⁹, organización de la sociedad civil. El IIPM evalúa la calidad de la información presupuestal en el ámbito local y el adecuado ejercicio del gasto de los recursos municipales para la provisión de bienes y servicios. Para hacerlo se establecen un porcentaje de cumplimiento de buenas prácticas contables. La última edición valoró 453 localidades —es decir, el 18 por ciento de los 2458 municipios del país. En estos el porcentaje de cumplimiento fue del 42 por ciento.

En el caso de Coahuila el porcentaje de cumplimiento fue del 100 por ciento, al igual que en los 38 municipios, colocándose así por arriba de la media nacional, y ocupando así el primer lugar en cumplimiento.

Por otra parte, Coahuila ocupa la vigésimo primera posición por el saldo de deuda pública (de 32 entidades federativas) —uno por ciento de los gastos municipales se destinan a atenderla. En 2017 el saldo de la deuda municipal fue de 387.17 millones de pesos.

⁹ Para mayor detalle consultar: Índice de Información Presupuestal Municipal (IIPM) del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO)

<https://imco.org.mx/temas/indice-informacion-presupuestal-municipal/>

C. GOBIERNO ABIERTO Y TRANSPARENCIA

Otros indicadores que pueden resultar útiles para evaluar las prácticas en materia de gobierno abierto y transparencia en el estado son los *Diagnósticos de Parlamento Abierto en México 2017*, evaluación realizada por la Alianza para el Parlamento Abierto (APA).¹⁰ En la segunda y última evaluación de 2017, Coahuila contó con un cumplimiento, en general satisfactorio o muy satisfactorio de los diez principios evaluados.

En el principio de Información Parlamentaria, por ejemplo, Coahuila tuvo un cumplimiento insatisfactorio del 57%. Respecto al principio de Información Presupuestal y Administrativa, Coahuila obtuvo un porcentaje de cumplimiento de cero por ciento, junto con otras once entidades, y en el caso del principio de Información sobre Legisladores y Servidores Públicos el 33%.

Otros principios mal evaluados en Coahuila son Datos Abiertos y Software Público con el 45%; Accesibilidad y Difusión con 33%, Conflicto de Interés con 29% de cumplimiento, y el principio de “Legislan a favor del gobierno abierto”, con el cero por ciento. Sólo en el caso de dos principios —Derecho a la Información y el principio de información histórico— Coahuila cumplió con el cien por ciento.

Finalmente, la *Métrica de Gobierno Abierto de 2019* —elaborada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de datos Personales (INAI) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE)— indica en su componente de “**Acceso a la información desde la perspectiva ciudadana por entidad federativa**” — conformado por las variables de completitud, claridad y celeridad como calidad de respuesta gubernamental— que Coahuila se encuentra ligeramente por abajo del promedio nacional (0.6) con una promedio de 0.57. Estos resultados están a la par de los principios que miden variables similares en el Diagnóstico de Parlamento Abierto.

¹⁰ Conformada por Arena Ciudadana, Borde Político, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, Fundar Centro de Análisis e Investigación, Gestión Social y Cooperación (Gesoc), Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Impacto Legislativo, OPI, SocialTIC, Sonora Ciudadana, Transparencia Mexicana y Visión Legislativa.

En suma, aunque Coahuila no se encuentra en los peores lugares nacionales en prácticas de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, aún falta consolidar las prácticas de transparencia y rendición de cuentas necesarias para hacer frente a la corrupción de forma adecuada, porque en tasas de incidencia y prevalencia sí ocupa los primeros lugares nacionales.

Medir la corrupción *per se*, sin embargo, es prácticamente imposible por la naturaleza ilegal y oculta en la que suele ocurrir. Como se documentó, organismos internacionales y el Estado mexicano utilizan indicadores de percepción para evaluar el problema, mientras que otras organizaciones de la sociedad civil han optado por aproximarse a ella por medio de índices o variables *proxy*, que permiten medir la corrupción de forma indirecta.

4. Recomendaciones

Como propone Mauricio Merino, una política pública puede caracterizarse como una intervención deliberada del Estado para corregir un problema público. No es menor reconocer que esa concepción, como también señala Merino, suele ser de utilidad para definir a las:

decisiones transversales que regulan la actuación interna de los gobiernos y están destinadas a perfeccionar la gestión pública: regulaciones que atañen a la forma en que los poderes públicos realizan las atribuciones que les han sido conferidas y que, en consecuencia, pueden llegar a determinar la eficacia, la eficiencia o la legitimidad de sus resultados. Pero no cualquier intervención, regulación o acción pública es una política pública. Para responder a ese nombre, han de ser decisiones tomadas por los órganos ejecutivos o representativos del Estado —y no por los particulares— con el propósito explícito de modificar el *statu quo* en un sentido determinado, mediante el uso de los recursos normativos, presupuestarios y humanos con los que cuenta el sector público y en un horizonte temporal razonablemente definido.¹¹

En ese sentido, para seguir con Merino:

las políticas públicas son una selección y una definición de problemas [...] son decisiones del Estado que se originan en un proceso político previo mediante el cual se seleccionan y se definen problemas públicos [...] de modo que tras de ellas hay decisiones de poder, tomadas por el Estado o bajo el cobijo de las normas y estructuras de autoridad generadas por éste [...] Al suponer una selección de problemas públicos y una elección entre alternativas plausibles,

toda política pública es una afirmación de valores [...] Cada una de las soluciones propuestas [...] privilegia posiciones políticas, modifica el mapa de los intereses, afecta expectativas y otorga pérdidas y ganancias que se distribuyen de modos distintos según la opción que se tome.¹²

En la lógica que propone Merino, las políticas públicas están siempre mediadas por un conjunto de principios políticos que determinan los cursos de acción de las políticas públicas, al tiempo que articulan la justificación de los objetivos que se asignan a cada política. A ese componente valorativo que puede ser implícito o explícito, Merino añade otro: el “factor coercitivo”, cuando considera que las políticas públicas, como las normas jurídicas, no son opcionales, pues estructuran un esquema de trabajo según el cual el ejercicio de la acción del Estado y la inversión de sus recursos está encaminado al logro de uno o varios objetivos. Es decir, las políticas públicas no son opcionales, pues se insertan en programas políticos e integran cursos de acción que, al estar vinculados con objetivos claros, dejarán de suceder si se abandona o se modifica el curso de acción.¹³

Conviene detenerse en otra consideración de Mauricio Merino:

No todos los programas ni todas las leyes que orientan la acción gubernamental son siempre políticas públicas. No lo son cuando se trata de líneas de acción desconectadas de una definición previa y lo más precisa de un problema público, de una argumentación más o menos clara sobre el modo en que la autoridad intervendrá para resolverlo y de un compromiso con los resultados en un lapso específico de tiempo. En ausencia de esos tres componentes, acaso podrá haber formulaciones retóricas para justificar el uso del gasto público en un rubro determinado, o la asignación de medios para una oficina en particular, o argumentos políticos para salir del paso en una circunstancia específica, pero no habrá políticas públicas. Para que una intervención, una regulación o un curso de acción elegido por el Estado pueda ser definido como política pública es necesario que, además de seleccionar e identificar un problema con claridad a partir de sus causas, ofrezca una fórmula precisa y coherente de solución.¹

¹¹ Mauricio Merino, *Políticas públicas. Ensayo sobre la intervención del Estado en la solución de problemas públicos*, México, CIDE, 2013, p. 17.

Estas ideas sobre las políticas públicas se vinculan con el contenido conceptual que se ha incorporado a este informe desde el primer apartado. Sin embargo, los elementos concretos

que define Merino permiten aclarar las rutas por las cuales se debería diseñar una política pública de combate a la corrupción.

Se entiende que el acopio de información y la elaboración de diagnósticos es un momento importante en el proceso de construcción de una política pública, pero ese momento no puede sustituir a la definición del problema. De ahí que se haya discutido, aunque no suficientemente, la pertinencia o no de los procesos “de consulta” llevados a cabo en varios casos del país para la construcción de las políticas estatales anticorrupción. El elemento problemático en la mayoría de esos casos, como ya se avanzó en la introducción conceptual de este informe, es el hecho de “consultar” a grupos de ciudadanos, a partir de una batería de preguntas y no de un contenido conceptual concreto. Es decir, en la construcción de una política pública resulta de poca utilidad un proceso de “consulta” en el cual no están definidas las bases conceptuales mínimas respecto del problema que se pretende atender. Un proceso de esta naturaleza, sin una definición del problema público, deriva en un ejercicio poco claro de acopio de información proporcionada por actores sociales que quizás son afectados por el problema, pero que no necesariamente ofrecen una idea diáfana de éste, pues lo que tienen son percepciones del modo individual en el que lo viven, sus consecuencias y, en muy poca medida, sus causas. Pongamos como ejemplo los resultados del “Estudio de percepción de la corrupción en el estado”, llevado a cabo por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Coahuila con la metodología de grupos focales. Si los resultados de ese estudio se tomaran en consideración, sin insertarlos dentro del parámetro conceptual que se propone en este informe acerca del problema de la corrupción, entonces no habría vías de solución posibles. Para decirlo claramente: si se intentara construir una política anticorrupción a partir de las apreciaciones de grupos de personas cuyas percepciones son siempre individuales, teniendo en cuenta el concepto de *racionalidad limitada* de Herbert Simon, sin subsumir esas valoraciones a una estructura conceptual bien delimitada, entonces el problema sería imposible de solucionar.

¹² Mauricio Merino, *op. cit.*, pp. 37-38.

Esta complicación no es poco frecuente, sin embargo. Tampoco es privativa del proceso de construcción de las políticas de combate a la corrupción y, desde luego, no es exclusiva del estado de Coahuila. La discusión que se ha dado desde el Programa Interdisciplinario de Rendición de Cuentas, desde hace varios meses, respecto de los procesos de las políticas estatales

anticorrupción, está vinculada con este contratiempo: si se promueve una discusión sobre la política anticorrupción sin poner sobre la mesa un contenido conceptual básico que defina el problema y coloque los alcances y límites del debate, entonces lo que se obtendrá será un cúmulo de información más o menos homogénea, que redundará en suponer que la corrupción es el otorgamiento de sobornos, por mencionar un ejemplo, y que la solución no es otra que educar a las nuevas generaciones en valores y principios que, en cambio, nadie alcanza a definir. De ahí la importancia total de la definición del problema de la corrupción como el centro de la política pública que pretende combatirlo.

La definición del problema es un proceso metodológicamente complejo que supone la selección de distintos cursos de acción, sobre la base de una evaluación objetiva acerca de los medios que pueden emplearse y de los resultados que habrían de obtenerse [...] El diseño de una política pública no consiste en el enunciado de una voluntad política más o menos sincera para resolver los problemas públicos, sobre la base de un diagnóstico más o menos elaborado. La política pública bien entendida exige un proceso racional, informado y comprometido de selección y definición de problemas, a partir de los medios efectivamente disponibles para solucionarlos. Y supone también que, desde el momento de adoptar una determinada definición, han de plantearse los resultados que se desea obtener y el proceso a través del cual serán conseguidos. De ahí la importancia del enfoque (de las políticas públicas) y su evolución posterior: no cualquier programa público ni cualquier asignación de recursos equivale al diseño de una política pública¹⁵

El riesgo que no ha podido conjurarse en los procesos de elaboración de las políticas anticorrupción estatales en México, hasta el momento, es al que hace referencia Merino. Partiendo de un proceso de acopio de información que pretende ser exhaustivo, algunos sistemas anticorrupción se han embarcado en procesos de construcción de las políticas estatales en los cuales no existe contenido conceptual, es decir, no se define el problema que se intentará resolver. Y encaminados, se termina por considerar que cualquier estructura de programas públicos y/o asignación de recursos públicos implican de suyo la existencia de una política pública. Nada más alejado de la realidad.

Desde el punto de vista de la ética del servicio público, ese tipo de comportamientos deben considerarse deshonestos, pues se sabe de antemano que esas acciones o no tendrán efectos

reales sobre las causas del problema de la corrupción o los efectos serán imposibles de medir, siendo que no se ha definido un problema, no se ha propuesto una teoría causal, no se han diseñado objetivos y, por tanto, la estrategia de intervención tiene poco o nada que ver con la realidad del problema público.

De ahí que las recomendaciones que se integran en este documento se encaminan a considerar, en primer término, que la política anticorrupción de Coahuila debe construirse en función de una definición del problema de la corrupción, una teoría causal y una visión clara para modificar el *statu quo*, es decir, un núcleo duro. En torno de ese núcleo se podrán agrupar los datos recopilados en consultas, percepciones, diagnósticos y evaluaciones, pero será el núcleo el que definirá las vertientes de acción, no al revés.

¹⁵ *Ibid.*, pp. 35-36.

4.1. Líneas de política

(1) Rendición de cuentas como eje transversal de la política estatal anticorrupción. Esto implica la consolidación o construcción, según el caso, de los mecanismos necesarios para la publicación, explicación y justificación de las decisiones públicas. Como se ha dicho, esta línea de política debe poner atención en introducir las mejores prácticas disponibles en los nueve ámbitos evaluados mediante el Instrumento de Evaluación en Rendición de Cuentas, a saber: (1) archivos; (2) transparencia y acceso a la información pública; (3) presupuestal; (4) contrataciones públicas; (5) contabilidad; (6) monitoreo y evaluación; (7) fiscalización; (8) control interno, y; (9) profesionalización. Estos eslabones articulan un conjunto de sistemas de gestión que establecen las condiciones mínimas para que los gobiernos rindan cuentas de sus acciones. De nuevo, un sistema de rendición de cuentas es la condición basal para la puesta en marcha de líneas de acción específicas de combate a la corrupción.

a. Como derivación de esta línea de política debe tenerse en cuenta que, en el ámbito estatal, aquellas instancias de mayor vulnerabilidad son las de tipo municipal, por lo cual es imperativo poner atención en el diseño de una estrategia especial para la introducción de mecanismos de rendición de cuentas en los entes municipales, sin perder de vista que como etapa inicial de esa estrategia se debe garantizar el cumplimiento pleno de las obligaciones de transparencia.

(2) El enfoque punitivo no debería determinar los objetivos de la política estatal anticorrupción. Es importante tener en cuenta que articular la política anticorrupción en función de objetivos determinados únicamente por la aplicación de castigos elimina la posibilidad de atacar las causas del problema público, al tiempo que abre una ventana de oportunidad para la impunidad, en aquellos casos que, siendo hechos de corrupción, no puedan castigarse por no hallarse tipificados como delitos o faltas administrativas graves o por no existir evidencia que sustenten las posibles sanciones. Estos dos supuestos no son descabellados, al contrario, son frecuentes en los procesos de asignación de sanciones en México. En otro sentido, la idea punitiva del combate a la corrupción limita de origen los

alcances de cualquier política en la materia, pues sus objetivos se limitarían a la imposición de sanciones, en un entorno nacional en el que las sanciones o no llegan o no se corresponden con la gravedad de los hechos denunciados. Esto no significa que deba abandonarse el esquema de sanciones como línea relevante de la política estatal anticorrupción, sencillamente implica que dicha política no puede girar en torno de la visión punitiva.

- (3) Inteligencia institucional para el combate a la corrupción. A partir del diseño legal e institucional de los sistemas anticorrupción en México, se pueden identificar vías para la construcción de mecanismos de acopio y análisis de información que puede transformarse en inteligencia institucional. Entendiendo que el sistema estatal anticorrupción supone la coordinación interinstitucional de aquellas instancias públicas involucradas, establecer la inteligencia institucional como una de las líneas de política pública podría consolidar rutinas de agrupación, análisis e intercambio de información para la prevención de la corrupción, así como para la sanción de los actos corruptos. En el mismo sentido, podrían identificarse prácticas susceptibles de mejora y corregir los errores de las administraciones públicas, para optimizar la eficiencia de los cuerpos burocráticos, limitar los espacios de discrecionalidad e identificar áreas de riesgo.
- (4) La política estatal anticorrupción no debería reproducir el uso excesivo del discurso de legalidad, sino descansar en una argumentación comprensiva del problema de la corrupción, entendiéndolo como multifactorial y de manifestaciones diversas—no siempre ilegales. La articulación de una política de combate a la corrupción sobre el eje de defensa de la legalidad podría resultar problemático, pues impediría no tomar en cuenta que un segmento de los actos corruptos y las malas prácticas administrativas que suceden en México ocurren dentro de los márgenes de las leyes.
- (5) La política estatal anticorrupción debe atender y resolver el problema de falta de información que genera contextos propicios para la corrupción y las malas prácticas administrativas. El problema de información al que se hace referencia tiene dos vertientes:
 - a. Carencia de información al interior de las administraciones, que evita la existencia de controles de la discrecionalidad administrativa. La falta de información

respecto de las atribuciones, funciones y procesos encomendados a los funcionarios públicos deriva en un contexto en el cual éstos no conocen los límites que tienen impuestos. De ahí que, al margen de que suceda o no, cuando no existe información respecto de estos ámbitos y/o el funcionario no la conoce, se encuentran dadas las condiciones para las malas prácticas administrativas y los actos de corrupción.

- b. Carencia de información al exterior de las administraciones, sobre atribuciones, funciones y procesos derivados del mandato otorgado. La falta de información sobre estos ámbitos genera un contexto en el cual los funcionarios públicos no tienen controles externos, pues dado que los ciudadanos no conocen cuáles son los límites de las actuaciones de los funcionarios públicos, no pueden ejercer la vigilancia y tampoco la exigencia. Al prevalecer la ausencia de información sobre mandatos y procesos se coloca a los ciudadanos en una circunstancia de desventaja, en sus interacciones con las administraciones públicas.

(6) Profesionalización de la administración pública para el buen desempeño de las administraciones y combate a la corrupción. La política estatal anticorrupción debería tener en cuenta que las condiciones laborales de los funcionarios públicos podrían entrañar un espacio de mejora que genere condiciones contrarias a las malas prácticas y los hechos de corrupción, si se garantiza que existe un modelo de reclutamiento, selección y permanencia en la administración pública que se sustenta en criterios técnicos y profesionales de mérito, capacidad, formación y desempeño. Esto también implica dotar a los funcionarios de todas las herramientas necesarias para el desempeño de sus atribuciones, funciones y la consecución de los procesos que tienen asignados, ofreciendo garantías al ejercicio de la función pública, en el paradigma de la responsabilidad activa.

(7) Vigilancia ciudadana para el combate a la corrupción. La política estatal anticorrupción debe tomar en cuenta, como eje transversal, a la participación, vigilancia y exigencia ciudadanas para combatir la corrupción. Si bien se considera un eje abarcador, éste se encuentra vinculado con otras de las recomendaciones que se incluyen en este apartado.

Es decir, para que existan los mecanismos y estén dadas las condiciones para la participación ciudadana es necesario que se garantice que la información está disponible, accesible y abierta a todos los ciudadanos, a la par que existen medios de rendición de cuentas por medio de los cuales sea posible exigir explicaciones y justificaciones respecto de las decisiones públicas. A esto debe sumarse la importancia del Comité de Participación Ciudadana en la implementación de la política estatal anticorrupción, pues su misión primordial es la de pedagogía pública, es decir, la de correa de transmisión entre las instituciones y la ciudadanía, pero también la de traducción de la información y las acciones generadas por los sistemas anticorrupción a los ciudadanos. No es suficiente que se construyan las herramientas de rendición de cuentas, sino que se incentive a los ciudadanos a utilizarlas para acompañar y monitorear el ejercicio de los gobiernos, mediante diferentes prácticas, por ejemplo, los observatorios ciudadanos.

ANEXO 3

Análisis de los Planes Municipales de Desarrollo

Abasolo

El municipio en su Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, aborda el tema anticorrupción con los siguientes apartados:



En el apartado de transparencia se propone una estrategia enfocada en la administración de los recursos de una forma eficiente y se proponen las siguientes líneas de acción:

- Crear página web del municipio.
- Mantener actualizado el sitio web donde se hospeda la Información Pública mínima requerida por la ley en materia (ICAI).
- Realizar un informe de gobierno anual.
- Mejorar los mecanismos para la recepción y atención de las solicitudes de información en todas las unidades administrativas.

Respecto a la rendición de cuentas se presenta una estrategia enfocada en contar con finanzas sanas, y se proponen las siguientes líneas de acción:

- Aplicar estricto control en el gasto operativo.
- Reducir los gastos de operación.
- Reducir el parque vehicular incostruable.
- Instrumentar un sistema de adquisiciones consolidadas.
- Revisar tabulador de sueldos.
- Hacer más eficiente el servicio médico y disminuir su costo.

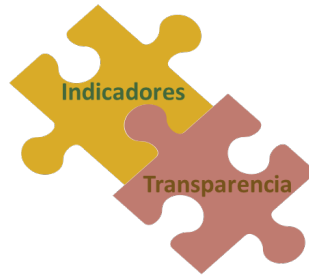
En el apartado de denuncia, se presenta una estrategia que propone la generación de un sistema de seguimiento y denuncia ciudadana, y se presentan las siguientes líneas de acción:

- Crear un departamento de atención ciudadana.
- Promover la cultura de la denuncia ciudadana sobre el desempeño de los funcionarios públicos.

- Asegurarse de que la aplicación de sanciones a los funcionarios infractores por actos de corrupción, omisión o negligencia.

Acuña

El municipio en su Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, aborda el tema anticorrupción con los siguientes apartados:



En el apartado de transparencia se cuenta con un Objetivo General, el cual señala que los recursos públicos se ejercerán una forma transparente.

En el apartado de los indicadores se proponen los siguientes:

- Proporción del gasto total destinado a seguridad pública.
- Número de policías por cada 1,000 habitantes.
- Tasa de homicidios dolosos por cada 1,000 habitantes.
- Tasa de robo de vehículos por cada 1,000 habitantes,
- Tasa de robo a cada habitación por cada 1,000 habitantes.
- Accidentes de tránsito terrestres por cada 1,000 habitantes.

Allende

El municipio en su Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, aborda el tema anticorrupción con los siguientes apartados:



En ambos apartados, se presenta una estrategia enfocada en la implementación de plataformas tecnológicas en la administración pública, y se proponen las siguientes líneas de acción:

- Transparencia en la gestión- cumplir lo marcado por la ley en este tema.
- Canal permanente de información – nuevas formas de atención y comunicación y establecer código ético.

- Establecer un estrado (tablón) de notificaciones en el palacio municipal.
- Establecer la Unidad de Transparencia.
- Impulsar la modernización tecnológica en los procesos de gestión y administración pública.

Arteaga

El municipio en su Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, aborda el tema anticorrupción con los siguientes apartados:



En el apartado de transparencia, se presenta una estrategia enfocada en el desempeño de forma honesta y transparente, y se proponen las siguientes líneas de acción:

- Recurrir a estándares internacionales, con el fin de amplificar el acceso a la información pública, para efecto de transparencia y rendición de cuentas.

Respecto al combate a la corrupción se presenta la siguiente línea de acción:

- Enfocarse en la coordinación de órganos estatales y federales para combatir la corrupción.

Candela

El municipio en su Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, aborda el tema anticorrupción con los siguientes apartados:



En el apartado de transparencia se cuenta con una estrategia enfocada en la administración transparente. El objetivo es cumplir con la normatividad vigente en materia de transparencia y se proponen las siguientes líneas de acción:

- Mantener actualizado el sitio web donde se hospeda la información pública mínima requerida por la ley en la materia (ICAI).
- Crear la página web del municipio.

- Realizar un informe de gobierno anual.
- Mejorar los mecanismos para la recepción y atención de las solicitudes de información en todas las unidades administrativas.
- Rendición de Cuentas.

En el apartado de denuncia se presenta una estrategia que se enfoca en un sistema de seguimiento de denuncias ciudadanas, el objetivo de la estrategia es el de atender de manera oportuna las quejas y denuncias de la ciudadanía, aplicando los ordenamientos legales correspondientes, y se presentan las siguientes líneas de acción:

- Crear el departamento de atención a la Ciudadanía.
- Promover la cultura de la denuncia ciudadana sobre el desempeño de los funcionarios públicos municipales.
- Asegurar la estricta aplicación de las sanciones establecidas en el marco normativo correspondiente, a los funcionarios públicos que incurran en actos de corrupción, omisión o negligencia

En el apartado del combate a la corrupción, se cuenta con el objetivo de disminuir la corrupción mediante la promoción y puesta a disposición de la ciudadanía de medios accesible para recibir y atender eficientemente quejas y denuncias relativas al desempeño de los elementos de seguridad. También se cuenta con un objetivo enfocado en mejorar las condiciones de los elementos de seguridad para designación de su labor, buscando estimular su desempeño y abatir la corrupción, este último objetivo presenta las siguientes líneas de acción:

- Incrementar el salario de los elementos policiales de por lo menos 6 mil pesos por quincena.
- Revisar los tabuladores para garantizar un salario digno a los elementos de la corporación policial.
- Implementar un sistema de becas escolares para hijos de policías.
- Establecer un sistema de estímulos por antigüedad.
- Promover estímulos por puntualidad y buena conducta al personal adscrito a esta área.
- Activar la entrega de premios y estímulos que establece el Reglamento Interno de la Dirección de Policía Preventiva Municipal.
- Implementar un seguro de vida de los elementos de Seguridad Pública.
- Mejorar el servicio médico que se brinda al personal de esta corporación.
- Ampliar el número de establecimientos e instituciones que otorgan créditos a los empleados de Seguridad Pública.
- Establecer el régimen de seguridad social para los elementos de seguridad pública y a todos los empleados municipales.

Castaños

El municipio en su Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, aborda el tema anticorrupción con los siguientes apartados:



En el apartado de transparencia se presentan las siguientes estrategias:

- Formular un sistema de información periódica del uso de los recursos públicos.
- Transparentar la gestión pública difundiendo la información que se genere.

En el apartado de rendición de cuentas se presentan las siguientes estrategias:

- Consolidar un sistema de divulgación integral del desempeño y resultados del gobierno municipal, con base en las prioridades de los ciudadanos y con transparencia en su cálculo y ejecución.
- Elaborar políticas de ingresos, de gasto, de administración patrimonial y de financiamiento mediante principios de racionalidad, disciplina y austeridad.
- Fijar normas y políticas para la buena administración y el mejor manejo de los recursos.
- Asegurar el principio democrático de rendición de cuentas del municipio.

En el apartado de combate a la corrupción se presentan las siguientes estrategias:

- Realizar auditorías e inspecciones financieras.
- Realizar auditorías a la obra pública.
- Realizar un registro patrimonial de los servidores públicos.
- Atender quejas y denuncias para darles continuidad y solución.
- Considerar la figura de contraloría social.
- Instrumentar procedimientos sencillos y expeditos para que toda persona pueda tener acceso a la información pública.
- Transparentar la gestión pública difundiendo la información que se genere.
- Garantizar la protección de datos personales en poder de la entidad pública.
- Asegurar el principio democrático de rendición de cuentas del municipio.
- Mejorar la organización, clasificación y manejo de los documentos.
- Contribuir a la democratización de la sociedad castañense y a la plena vigencia de Estado de Derecho.

Cuatro Ciénegas

El municipio en su Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, aborda el tema anticorrupción con los siguientes apartados:



En el apartado de transparencia se cuenta con la siguiente línea de acción:

- Cumplir al 100 por ciento con las obligaciones de transparencia establecidas en la ley de la materia.

En el apartado de rendición de cuentas se cuenta con la siguiente línea de acción:

- Cumplir con la legislación aplicable al ejercicio de los recursos públicos y con las normas contables establecidas por la Auditoría Superior del Estado.

Francisco I. Madero

El municipio en su Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, aborda el tema anticorrupción con los siguientes apartados:



En el apartado de transparencia cuenta con una estrategia enfocada en mejorar la transparencia del municipio, y presenta las siguientes líneas de acción:

- Adecuar los reglamentos municipales a los nuevos lineamientos de La Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
- Transparentar el uso de los ingresos por concepto de infracciones.

En el apartado de rendición de cuentas se cuenta con una estrategia que busca mejorar la rendición de cuentas del municipio, y presenta las siguientes líneas de acción:

- Fortalecer el órgano interno de control municipal.
- Poner en marcha el programa de Cabildo Itinerante.

En el apartado de Denuncia se cuenta con la siguiente línea de acción:

- Fomentar la cultura de la denuncia ciudadana a través de los consejos ciudadanos.

•

Frontera

El municipio en su Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, aborda el tema anticorrupción con los siguientes apartados:



En el apartado de transparencia se cuenta con las siguientes líneas de acción:

- Promover acciones transversales de buen gobierno orientadas a la eficiencia y transparencia que modernicen a las dependencias y entidades municipales.
- Consolidar las prácticas de gobierno transparente con criterios de oportunidad y suficiencia en la rendición de cuentas y el acceso a la información pública.

En el apartado de rendición de cuentas se presenta una estrategia que propone mejorar la rendición de cuentas del municipio y cuenta con las siguientes líneas de acción:

- Fortalecer el órgano interno de control municipal.
- Poner en marcha el programa de Cabildo Itinerante.

En el tema de denuncia se presentan las siguientes líneas de acción:

- Establecer un mecanismo en el cual se puedan hacer denuncias anónimas de ilícitos de los cuales se ha sido testigo o se tiene una fuerte sospecha.
- Fomentar la cultura de la denuncia ciudadana a través de los consejos ciudadanos.
- Instituir un programa anticorrupción para evitar la discrecionalidad de los servidores públicos municipales y prevenir actos de corrupción.

General Cepeda

El municipio en su Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, aborda el tema anticorrupción con los siguientes apartados:



En el apartado de transparencia y rendición de cuentas, se cuenta con el objetivo de impulsar, fortalecer y sistematizar el acceso a la información y la transparencia, y presenta las siguientes líneas de acción:

- Fortalecer la Comisión de Transparencia de General Cepeda vinculada al Instituto Coahuilense de Acceso a la Información.
- Impulsar la concentración y sistematización de información estadística para su difusión.
- Asegurar la calidad de la información que generan las direcciones municipales.

En el apartado de denuncia se presenta la siguiente línea de acción:

- Impulsar la adopción de hábitos de autoprotección y denuncia difundiendo la cultura de la legalidad y la paz.

Guerrero

El municipio en su Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, se aborda el tema anticorrupción con los siguientes apartados:



El objetivo que abarca la transparencia y rendición de cuentas plantea el cumplir con la normatividad en materia de transparencia y rendición de cuentas, y presenta las siguientes líneas de acción:

- Mantener actualizado el sitio web donde se hospeda la información pública mínima requerida por la ley en la materia (ICAI).

- Mejorar los mecanismos para la recepción y atención de las solicitudes de información en todas las unidades administrativas.
- Publicar periódicamente el desarrollo de actividades del Gobierno Municipal a través de las diferentes plataformas digitales o de manera impresa.

Hidalgo

El municipio en su Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, aborda el tema anticorrupción con los siguientes apartados:



En el apartado de transparencia se cuenta con el objetivo de cumplir con la normatividad en materia de transparencia y rendición de cuentas, se presentan las siguientes líneas de acción:

- Mantener actualizado el sitio web donde se hospeda la información pública mínima requerida por la ley en la materia. (ICAI).
- Crear la página web del municipio.
- Realizar un informe de gobierno anual.
- Mejorar los mecanismos para la recepción y atención de las solicitudes de información en todas las unidades administrativas.

En el apartado de denuncia se cuenta con el objetivo de atender de manera oportuna las quejas y denuncias de la Ciudadanía, aplicando los ordenamientos legales correspondientes, y presenta las siguientes líneas de acción:

- Crear el departamento de atención ciudadana.
- Promover la cultura de la denuncia ciudadana sobre el desempeño de los funcionarios públicos municipales.
- Asegurar la estricta aplicación de las sanciones establecidas en el marco normativo correspondiente, a los funcionarios públicos que incurran en actos de corrupción, omisión o negligencia.

En el apartado de rendición de cuentas se cuenta con el objetivo de poner en práctica un programa de auditorías preventivas, con el fin de vigilar la correcta operación y aplicación de los recursos y presenta las siguientes líneas de acción:

- Poner en marcha el Programa de Auditoría Interna que asegure el correcto ejercicio de los recursos.

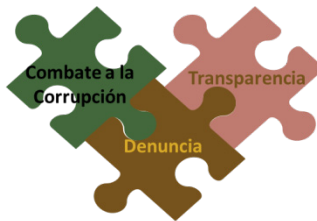
- Aplicar un proceso de revisión documental y físico en las diferentes áreas, con el propósito de llevar a cabo acciones preventivas.

En el apartado del combate a la corrupción se cuenta con el objetivo de eliminarla mediante la promoción y puesta a disposición de los habitantes, los medios accesibles para recibir y atender eficazmente quejas y denuncias relativas al desempeño de los elementos de Seguridad Pública, y presenta la siguiente línea de acción:

- Poner en marcha acciones orientadas a evitar actos de corrupción contra los paisanos, tales como operativos encubiertos y el establecimiento de módulos de atención, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Jiménez

El municipio en su Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, aborda el tema anticorrupción con los siguientes apartados:



En el apartado de transparencia, se cuenta con el objetivo de implementar procedimientos para supervisar la aplicación de los recursos y la ejecución de las obras, así como la adecuada formulación de sus expedientes técnicos y presenta las siguientes líneas de acción:

- Establecer medidas que permitan ejercer adecuadamente los recursos públicos municipales y faciliten el acceso a la información pública.
- Apegarse estrictamente a los ordenamientos relacionados con las adquisiciones y licitaciones de obras y servicios, así como el cumplimiento de la Ley de Responsabilidades de Funcionarios Públicos.

En el apartado de denuncia se presenta la siguiente línea de acción:

- Establecer un sistema para dar seguimiento y atención a quejas y denuncias en contra del desempeño de funcionarios municipales.

En el apartado de combate a la corrupción se presenta la siguiente línea de acción:

- Asegurar la aplicación estricta de las sanciones establecidas en el marco normativo correspondiente, a los funcionarios públicos que incurran en actos de corrupción, omisión o negligencia.

Juárez

El municipio en su Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, aborda el tema anticorrupción con los siguientes apartados:



En el apartado de transparencia se presenta la siguiente línea de acción:

- Establecer como principio el transparentar la operación de los recursos materiales, económicos y humanos.

En el tema de rendición de cuentas se presenta una estrategia la cual busca la publicación de la información mínima pública con relación a los estados financieros, y presenta la siguiente línea de acción:

- Efectuar con estricto apego a normatividad vigente el método de control sobre el ejercicio del gasto público.

Matamoros

El municipio en su Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, aborda el tema anticorrupción con los siguientes apartados:



Con relación al apartado de transparencia se presenta la siguiente línea de acción:

- Implementar esquemas que administren y operen los cuadros de clasificación archivística, para alimentar, las plataformas de transparencia.

El en apartado de denuncia se presenta la siguiente línea de acción:

- Establecer sistema de monitoreo para la medición y seguimiento de los indicadores y compromisos.

Monclova

El municipio en su Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, se aborda el tema anticorrupción con los siguientes apartados:



La estrategia tiene el objetivo de buscar y otorgar herramientas para mejorar la gestión de la información que se genera, administra y/o posee Monclova para crear una mentalidad de servidores públicos como gobierno en pro de la transparencia, el respeto humano al acceso a la información pública y promover la cultura de la transparencia y rendición de cuentas, y presenta las siguientes líneas de acción:

- Información Pública de Oficio, recabar, publica y actualizar la información pública de oficio y las obligaciones de transparencia a las que refiere Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila y alimentar mensualmente los portales de mocolva.gob.mx ICAI y Plataforma Nacional de Transparencia.
- Acceso a la información, recibir, dar trámite y seguimiento hasta su conclusión, a las solicitudes de acceso a la información.
- Modernización y actualización de la página oficial del Ayuntamiento de Monclova, con el objetivo de hacerla más atractiva y amigable para que el ciudadano pueda consultar eventos, Unidad de Transparencia, así como trámites y servicios.
- Lograr el uso óptimo de los recursos públicos y una aplicación del gasto con criterios de eficiencia, racionalidad y transparencia.

Para el tema de corrupción se cuenta con la siguiente línea de acción:

- Fomentar la cultura de cero tolerancia contra los actos de corrupción.

Morelos

El municipio en su Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, se aborda el tema anticorrupción con los siguientes apartados:



La transparencia busca transformar mediante un proceso de modernización de los procesos de gobierno, cada una de las áreas de la administración municipal, haciendo transparentes todas sus acciones y administrando eficientemente los recursos humanos y materiales disponibles, para

gestionar servicios de calidad que provean bienestar a la ciudadanía, y presenta las siguientes estrategias:

- Cumplir con la mínima información requerida en materia de transparencia, por parte del ICAI buscando así mantener informada las acciones de gobierno y la utilización de los recursos.
- Implementar programas de capacitación encaminados a la creación de una cultura de transparencia entre los funcionarios públicos.
- Implementar procesos de evaluación eficaces para identificar las áreas de mejora y detectar irregularidades en el desempeño de servidores públicos.

Muzquiz

El municipio en su Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, se aborda el tema anticorrupción con los siguientes apartados:



El objetivo es garantizar un gobierno transparente comprometido con la rendición de cuentas, facilitando el acceso a la información pública, y cuenta con las siguientes estrategias:

- Cumplir con la mínima información requerida en materia de transparencia por parte del ICAI buscando así mantener informada las acciones de gobierno y la utilización de los recursos.
- Implementar programas de capacitación encaminados a la creación de una cultura de transparencia entre los funcionarios públicos.
- Implementar proceso de evaluaciones eficaces para identificar las áreas de mejora y destacar irregularidades en el desempeño de los servidores públicos.

Nadadores

El municipio en su Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, se aborda el tema anticorrupción con los siguientes apartados:



En el apartado de rendición de cuentas se presentan las siguientes líneas de acción:

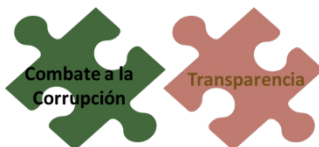
- Poner en marcha el programa de auditoría interna que asegure el correcto ejercicio de los recursos.
- Aplicar un proceso de revisión documental y físico en las diferentes áreas con el propósito de llevar a cabo acciones preventivas.

En el apartado de denuncia se cuenta con la siguiente línea de acción:

- Promover la cultura de la denuncia ciudadana sobre el desempeño de los funcionarios públicos municipales.

Nava

El municipio en su Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, se aborda el tema anticorrupción con los siguientes apartados:



En el tema de transparencia, el objetivo estratégico busca crear instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas, que garanticen el acceso público a la información y protejan las libertades fundamentales de conformidad con las leyes municipales, estatales, nacionales y acuerdos internacionales, a través de la apertura de información y explicación real sobre el uso de los recursos municipales utilizando mecanismos informativos para rendir cuentas, explicar las actuaciones, acciones y decisiones, mostrar su funcionamiento y someterse a la evaluación de los ciudadanos. de los ciudadanos, esto a través del programa enfocado en el Acceso a la información pública

El objetivo estratégico tiene como finalidad el de reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas a través de acciones de vigilancia y del fomento de la cultura de la legalidad para erradicar las prácticas que violan lo estipulado en legislaciones vigentes, disminuir el intercambio de acciones que demeritan el actuar de la administración y mejorar el servicio público que se ofrece a las y los navenses, esto a través del programa Nava Incorruptible, por lo que se presentan las siguientes líneas de acción.

- Validar y confirmar que los integrantes del cuerpo edilicio, directores, subdirectores y coordinadores presenten la declaración de interés en tiempo y forma.
- Validar y confirmar que los integrantes del cuerpo edilicio, directores, subdirectores y coordinadores presenten la declaración patrimonial y fiscal en tiempo y forma, de conformidad con las leyes vigentes aplicables.
- Implementar localmente los sistemas anticorrupción con representación ciudadana aplicables de conformidad con las leyes vigentes aplicables.
- Crear mecanismos que fomenten la cultura de la legalidad entre los servidores públicos, como parte del combate a la corrupción.
- Promover la denuncia ciudadana en prácticas de corrupción.
- Crear expedientes y aplicar las sanciones correspondientes a los servidores públicos que infrinjan lo estipulado en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
- Comunicar, observar, y en su caso, aplicar las sanciones correspondientes a los servidores públicos que exijan, obtengan y acepten cualquier tipo de regalo, obsequio o dádiva indebida con motivo de sus funciones.
- Crear un comité ciudadano que promueva medidas anticorrupción entre los habitantes.
- Crear instrumentos de medición que califique la actuación de los servidores públicos municipales.

Ocampo

El municipio en su Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, se aborda el tema anticorrupción con los siguientes apartados:



En el apartado de transparencia se plantea el objetivo a través del cual, se busca establecer mecanismos de acción que permitan el monitoreo del desempeño de los servidores públicos en todas las áreas de la administración, con el fin de ser transparentes y garantizar el buen uso de los recursos públicos

Una de las estrategias pretende que el municipio se coordine con Auditoría Superior del Estado y Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, para la capacitación de la normatividad, por otro lado, se cuenta con una estrategia que se enfoca en lograr un manejo responsable y honesto de los recursos públicos, previniendo la corrupción.

Parras de la Fuente

El municipio en su Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, se aborda el tema anticorrupción con los siguientes apartados:



Con relación a los aparados de transparencia y rendición de cuentas, se plasma el objetivo de hacer eficiente la administración municipal y garantizar la rápida respuesta en rendición de cuentas en apego al marco legal de transparencia. Este eje presenta las siguientes líneas de acción:

- Sustener páginas de transparencia para que los ciudadanos puedan solicitar, investigar y difundir información promoviendo una participación pendiente democrática de los ciudadanos.
- Aplicar las funciones adecuadas adaptadas a la legislación para proyectar puntualmente la operación de los recursos.
- Considerar a cada uno de los individuos que son partícipes de la transformación, que tenga el conocimiento de las nuevas estrategias que se van a ejecutar y que de alguna u otra manera se verán involucrados.
- Licitación de acciones de Obras Públicas donde se informe a la ciudadanía el monto de los recursos, su aplicación y ejecución.
- Establecer mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos, es de suma importancia contar con organismos especializados que posean autonomía operativa, de gestión presupuestaria y de decisión.
- Utilizar las bases actuales para la aplicación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, realizar campañas de difusión en medios de fácil acceso para que los ciudadanos tengan mayor conocimiento de los programas, acciones y trámites que les interesan.
- Crear un organigrama público de la administración con sueldos y funciones.
- Definir cada una de las funciones que se tienen que cubrir que permita la posibilidad de implementar mejores acciones que nos dirijan a un cambio positivo.
- Dar a conocer a los responsables de cada una de las tareas a ejecutar para que así se vea reflejado el desempeño de las partes que conforman a la organización.

A continuación, se presenta los Objetivos de Desarrollo Sustentable:

- Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas.
- Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades.
- Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.

En el tema de la denuncia, se presenta la siguiente línea de acción:

Fortalecer la prevención del delito, a través de promover la cultura de la denuncia y aplicación de los principios de legalidad y eficacia entre el personal integrante de las instituciones inmersas en el aparato de seguridad.

Con relación a los indicadores que se utilizarán para evaluar los temas antes mencionados el Ayuntamiento presentó los que se enlistan a continuación:

- Existencia de Plataforma virtual de transparencia.
- Porcentaje de solicitudes atendidas de información fiscal.
- Porcentaje de solicitudes atendidas de transparencia en licitación de obras públicas realizadas.
- Porcentaje de respuestas a solicitudes de claridad en sueldos y roles de funcionarios públicos.
- Número de denuncias de abuso de autoridad.

Piedras Negras

El municipio en su Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, se aborda el tema anticorrupción con los siguientes apartados:



En el apartado de transparencia se presenta un objetivo, el cual busca garantizar que las acciones del gobierno municipal se lleven con honorabilidad y transparencia para que sean del conocimiento de la totalidad de la ciudadanía, y presenta la siguiente línea de acción:

- Recortar y disminuir el gasto con autoridad, transparencia y control en el manejo de los recursos públicos.

El objetivo que se presenta en el tema de Rendición de Cuentas busca cumplir obligada y cabalmente con la rendición de cuentas y presenta las siguientes líneas de acción:

- Operar el sistema de contraloría social con la participación de la sociedad civil, para que vigile la implementación de acciones y gasto en obras.

- Presentar con transparencia y oportunidad los avances de gestión financiera, informe de actividades y del uso de los recursos financieros, materiales y humanos del municipio, cumpliendo con ello nuestra obligación legal.
- Investigar actos, omisiones y conductas dudosas que tengan los servidores públicos, fincando responsabilidades administrativas y las que correspondan legalmente. No permitiendo corruptelas ni mal manejo de recursos.

En el apartado de combate a la corrupción se presentan las siguientes líneas de acción:

- Combatir la corrupción, la honestidad será nuestra forma de gobierno, revisaremos convenios y fideicomisos.
- Terminar con los privilegios de algunos, en las acciones de nuestra lucha anticorrupción, se acabarán los bonos, seguros médicos privados, los viáticos dedicados a lujos.

Progreso

El municipio en su Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, se aborda el tema anticorrupción con los siguientes apartados:



En el apartado de transparencia y rendición de cuentas se cuenta con el objetivo de cumplir obligatoriamente con transparencia de las acciones, la rendición de cuentas, excluyendo de toda forma la corrupción e impunidad, y la estrategia que se implementará, busca que se cuente con un gobierno transparente y que rinda cuentas para ganarse la confianza de la gente y la forma de medirlo será a través del indicador de Legalidad y Transparencia.

A continuación, se presentan las metas y líneas de acción del objetivo:

- Celebrar convenio de colaboración con el Estado en el tema de Transparencia y contestación a solicitudes de información.
- Dar a conocer toda la información de esta administración municipal por todos los medios, redes sociales, medios impresos y televisivos.
- Instalar módulo de ventanilla única en presidencia municipal y las comunidades como una forma de guía hacia el ciudadano y conozca el desempeño de los funcionarios públicos, así como atender alguna petición al municipio.
- Brindar respuestas inmediatas a las solicitudes de los ciudadanos.
- Rendir informes trimestrales a la población sobre gestiones y atención a solicitudes.

La segunda estrategia busca Impulsar acciones de transparencia y ética pública en los servidores públicos.

A continuación, se presentan las metas y líneas de acción de esta estrategia:

- Promover valores de responsabilidad y compromiso en los miembros de la administración pública municipal.
- Establecer acciones que favorecen la transparencia y la ética pública de los funcionarios, como el combate a la corrupción y aplicación de un código de ética.
- Incentivar el crecimiento de la cultura del servicio al ciudadano en los funcionarios públicos municipales.

Ramos Arizpe

El municipio en su Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, se aborda el tema anticorrupción con los siguientes apartados:



En el apartado de transparencia, se presenta una estrategia enfocada en administración pública municipal y el manejo de los recursos públicos, esto, a través de la siguiente línea de acción:

- Cumplir como sujeto obligado, con la difusión de la Información Pública de Oficio prevista en la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Con relación al apartado de rendición de cuentas, se plantea una estrategia que se enfoca en fiscalizar a los funcionarios públicos en el manejo y administración de los recursos municipales, esto, a través de las siguientes líneas de acción:

- Contar con un despacho de auditoría externa, encargado de revisar el desempeño, legalidad y buen manejo de las finanzas municipales.
- Cumplir puntualmente con la presentación de la Cuenta Pública anual y los Avances Financieros Trimestrales, requeridos por la Auditoría Superior del Estado.

Este PMD cuenta con una estrategia enfocada en el combate a la corrupción la cual busca prevenir y combatir la corrupción entre los ciudadanos y funcionarios municipales, y lo hará a través de las siguientes líneas de acción:

- Establecer canales de comunicación para la denuncia anónima de abusos y actos de corrupción cometidos por los servidores públicos en contra de los ciudadanos.
- Video grabar las licitaciones y concursos en los que se asignen contratos a proveedores, para transparentar los procesos y ponerlos a disposición de la ciudadanía.
- Implementar un Código de Ética para los servidores públicos municipales.

Así mismo se plantea los siguientes Indicadores:

- Percepción del Desempeño, Nivel de Corrupción, de la Policía Preventiva Municipal.
- Percepción del Desempeño, Nivel de Corrupción, de la Policía de tránsito.

Sabinas

El municipio en su Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, se aborda el tema anticorrupción con los siguientes apartados:



En el tema de transparencia y rendición de cuentas se presenta una estrategia que busca que el ayuntamiento ejerza un gasto público responsable, transparente y orientado a resultados, y el objetivo estratégico busca que el Ayuntamiento cuente con finanzas sanas y manejo eficiente y transparente del presupuesto. Se optimizarán los recursos económicos y humanos para alcanzar los objetivos estratégicos al inicio de la presente administración, es por ello por lo que en la administración gestionará un presupuesto en base a programas, obteniendo con ello un manejo eficiente de gasto público, promoviendo la rendición de cuentas y la transparencia.

Otro objetivo estratégico pretende fortalecer la transparencia, rendición de cuentas, acceso a la información pública y la protección de datos personales.

El Plan Municipal de Desarrollo también incluye el programa:

- Municipio Transparente y Socialmente Responsable

Sacramento

El municipio en su Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, se aborda el tema anticorrupción con los siguientes apartados:



El primer objetivo tiene que ver con el manejo de los recursos públicos y prevención de la corrupción, manejo transparente de los recursos públicos para combatir la corrupción y el segundo objetivo se enfoca en la estructura del gasto público y la prevención de la corrupción.

Por otro lado, la estrategia en materia de corrupción que se presenta busca fortalecer la coordinación con los órganos de fiscalización para combatir la corrupción.

Saltillo

El municipio en su Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, se aborda el tema anticorrupción con los siguientes apartados:



El objetivo general busca garantizar que Saltillo tenga un gobierno profesional, honesto, responsable, eficiente que trabaje con orden, planeación, transparencia, manejo adecuado de las finanzas públicas, rendición de cuentas, combate a la corrupción; acompañado de procesos de modernización institucional, con reglas claras, pero sobre todo con la participación de los saltillenses en el diseño, vigilancia y evaluación de los procesos para conseguirlo.

En el tema de transparencia, el Ayuntamiento cuenta con el objetivo específico de poner en práctica acciones que garanticen que el actuar de la administración municipal y los servidores públicos esté apegada a la ley, la honestidad y responsabilidad; acciones que combatan e inhiban actos de corrupción, mejoren la transparencia e impulsen la rendición de cuentas. Para ello se cuenta con una estrategia que se encargará de seguir abriendo canales de comunicación y mecanismos para que la ciudadanía participe en el monitoreo y vigilancia del funcionamiento de la administración municipal, para ello se presentan las siguientes líneas de acción:

- Continuar diseñando y estableciendo mecanismos y canales de comunicación con la ciudadanía que garanticen el acceso a la información y la transparencia.
- Promover entre la población el acceso a la información municipal a través de las instalaciones municipales, centros comunitarios, instalaciones módulos de información.
- Continuar impulsando la labor del Consejo de Contraloría Ciudadana, los consejos y comisiones vecinales.
- Establecer mecanismos y canales de comunicación con la ciudadanía que garanticen el acceso a la información y la transparencia.

Otra estrategia que se plantea es la de mejorar la transparencia de la administración municipal, esta estrategia cuenta con las siguientes líneas de acción:

- Seguir y cumplir los lineamientos de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza.
- Dar continuidad al proceso de capacitación del personal involucrado en materia de Transparencia y Acceso a la Información.
- Mejorar en forma continua el Portal de Transparencia municipal, apegado a las tecnologías de la información y comunicación, en concordancia con los lineamientos del Gobierno Abierto.
- Publicar, actualizar y mantener disponible mediante la plataforma Nacional de Transparencia y del Portal Municipal la Información Pública de Oficio.

- Asegurar la protección de datos personales en su posesión.
- Hacer eficientes los procesos para recepción y atención de solicitudes de información en todas las áreas del municipio. Mejorar los tiempos de respuesta.
- Orientar a la ciudadanía respecto a la información clasificada como pública en términos de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza y demás disposiciones legales aplicables.
- Transparentar el uso de los egresos con el fin de que la ciudadanía conozca el destino de los recursos municipales.

En el tema de rendición de cuentas se tiene una estrategia que busca mejorar la rendición de cuentas del municipio, esto a través de las siguientes líneas de acción.

- Realizar el seguimiento puntual del presupuesto y de los programas.
- Fortalecer el Órgano Interno de Control Municipal.
- Poner en marcha el programa de Cabildo Itinerante.
- Seguir fortaleciendo la figura de Contralor Ciudadano y garantizar mecanismo para que realicen el monitoreo de las finanzas, así como vigilar el funcionamiento eficiente y honesto de las dependencias.
- Difundir entre la población, la figura de Contralor Ciudadano, el cual vigila las acciones de la administración municipal.
- Reforzar la gestión documental mediante el sistema Institucional de Archivos.

Con relación al tema de corrupción se cuenta con una estrategia que busca prevenir y combatir la corrupción en el mundo, y para ello se apoya en las siguientes líneas de acción:

- Continuar con el programa de auditorías con despachos externo que aseguren la correcta aplicación de los recursos. Practicar revisiones y auditorías periódicas en las diferentes dependencias.
- Vigilar el cumplimiento de las observaciones y recomendaciones preventivas y correctivas sobre las irregularidades encontradas, derivadas de las auditorías.
- Programa de Control de Contratos con Prestadores de Servicios, para evitar el tráfico de influencias en el gobierno municipal.
- Impulsar el programa Proveedor Certificado.
- Difundir las convocatorias y resultados de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, concursos y licitaciones para que todos los saltillenses conozca los lineamientos y ganadores de estas.
- Establecer nuevos controles digitales con el uso de sistemas y tecnologías para asegurar la completa transparencia y cortar posibilidades de malas prácticas, por parte de servidores públicos y ciudadanos en cuestión de trámites, multas y permisos municipales.

San Buenaventura

El municipio en su Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, se aborda el tema anticorrupción con los siguientes apartados:



Se presenta una estrategia sectorial con relación al tema de rendición de cuentas, de la cual se desprenden las siguientes estrategias:

- Normatividad Competente: Motiva la conducción con altos niveles de ética y combate a la corrupción.
- Auditoría Exhaustiva: Asegurar la eficacia y legalidad en el manejo y la aplicación de los recursos públicos, mediante sistemas de prevención, supervisión, control y vigilancia.
- Auditoría Externa: Garantizar el buen manejo de los recursos y la gestión municipal mediante despachos externos.
- Supervisión Amplia: Trabajar por un sistema de profesionalización de los servidores públicos, por procesos de mejora continua, tecnificados y con internet.
- Incrementar el índice de calificación en materia de transparencia y rendición de cuentas.

San Juan de Sabinas

El municipio en su Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, se aborda el tema anticorrupción con los siguientes apartados:



Con relación a la transparencia, se cuenta con un objetivo que busca planear, programar, organizar y coordinar las acciones de control, evaluación, vigilancia y fiscalización del correcto uso del patrimonio, el ejercicio del gasto público por conducto de las direcciones y coordinaciones, su congruencia con el presupuesto de egresos del municipio, así como el desempeño de los servidores públicos, logrando con ello impulsar una gestión pública de calidad, en apego a las normas y disposiciones legales aplicables, para contribuir con la transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía, otro de sus objetivos es el de ser un gobierno que impulse una política de transparencia, rendición de cuentas, claridad y honestidad en el ejercicio público municipal.

Es por lo antes mencionado que se cuenta con una estrategia que busca promover la transparencia dentro del gobierno municipal y en la relación con los órdenes de gobierno, esto a través de las siguientes líneas de acción:

- Ejecutar los programas de transparencia focalizada en los procesos administrativos de cada área de la Administración Municipal.
- Programar, realizar, atender y replicar las capacitaciones periódicas a los servidores públicos del gobierno municipal, en materia de transparencia y acceso a la información.
- Realizar acciones prácticas para transparentar los procesos del ejercicio presupuestal, revisión de cuenta pública, inversión y de las adquisiciones.
- Promover la transparencia en las acciones de la gestión municipal.

Con relación al tema de rendición de cuentas se plantea el objetivo de llevar a cabo un registro de operaciones presupuestarias y contables de acuerdo con las normas y lineamientos vigentes por el Consejo Nacional de Armonización Contable para la generación oportuna y veraz de información financiera para con ello contribuir a la correcta aplicación de los recursos financieros y así medir la correspondencia entre el gasto e ingreso del ente público, esto a través de la estrategia que busca formular el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Municipio considerando las diferentes etapas que sufre, las cuales son aprobado, modificado, comprometido, devengado y ejercido. Esta estrategia presenta la siguiente línea de acción:

- Apegarse a los presupuestos tanto de ingresos como de egresos para que sufran la menor cantidad de modificaciones y sirva para la formulación de los presupuestos de los siguientes ejercicios.

Torreón

El municipio en su Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, se aborda el tema anticorrupción con los siguientes apartados:



Con relación a la transparencia y la rendición de cuentas, el Ayuntamiento cuenta con los siguientes programas

- Transparencia y Rendición de Cuentas.
- Finanzas Públicas.

Este Plan Municipal cuenta con las siguientes líneas de acción:

- Desarrollar y fortalecer mecanismos eficientes de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información pública, apoyados por tecnologías de la información y comunicación.
- Manejar de forma transparente los recursos del Fondo de Pensiones del Ayuntamiento.

- Garantizar el uso eficiente de los recursos municipales mediante un presupuesto basado en resultados.
- Promover un sistema de transparencia y rendición de cuentas en finanzas municipales, generando datos abiertos: ingresos, licitaciones, contratos y decisiones financieras del Ayuntamiento.
- Poner en marcha un programa permanente de reducción y racionalización del gasto municipal en materia de sueldos, servicios médicos, combustibles, energía eléctrica, publicidad, intereses y comisiones.

Viesca

El municipio en su Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, se aborda el tema anticorrupción con los siguientes apartados:



El Objetivo Estratégico busca la transparencia, apertura y diálogo, referente a un buen gobierno que se permite retroalimentar con las consultas ciudadanas, generando con ello; confianza en el gobierno y las instituciones, para así poder trabajar en conjunto gobierno y ciudadanía, detonando la construcción de una sociedad más participativa.

Para lograr esto, se presentan las siguientes líneas de acción:

- Creación de la Unidad Municipal de Acceso a la Información Pública y Transparencia.
- Buen gobierno es: el que promueve la transparencia y una opinión pública libre y responsable.

Con relación al tema del combate a la corrupción se presenta la siguiente línea de acción:

- Crear un Sistema Municipal Anticorrupción. Este Sistema Municipal tiene por objeto establecer, articular y evaluar la política en materia anticorrupción en la estructura administrativa municipal, así como organizar e instrumentar los principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la coordinación con el Comité Municipal: Comité Coordinador Municipal Anticorrupción; en materia de anticorrupción, fiscalización y control de los recursos públicos, en el municipio

Villa Unión

El municipio en su Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, se aborda el tema anticorrupción con los siguientes apartados:



En el tema de transparencia y rendición de cuentas, se presenta una línea estratégica la cual se enfoca en la transparencia institucional, para ello se propone un objetivo particular con el sentido de promover la transparencia hacia el interior y el exterior de la gestión municipal, para lograr lo antes mencionado, se plantea una estrategia que busca promover la transparencia dentro del Ayuntamiento en las diferentes dependencias y organismos en todos los niveles, y para lograrlo se proponen las siguientes líneas de acción.

- Impulsar un Programa de Transparencia Focalizada en cada uno de los procesos de las diferentes dependencias y organismos del Ayuntamiento.
- Promover la capacitación de servidores públicos del Ayuntamiento en materia de transparencia y acceso a la información. ·
- Llevar a cabo acciones para transparentar procesos de ejercicio presupuestal, revisión de cuentas públicas, inversión y adquisiciones. ·
- Mantener enlazado el portal de transparencia al Sistema PNT Federal y dar seguimiento a las recomendaciones de éste y otros organismos. ·
- Responder con mayor asertividad reduciendo el tiempo de atención a las solicitudes de información formuladas a las dependencias y organismos del Ayuntamiento.

Otra estrategia busca promover el acceso a la información en corresponsabilidad social realizando actividades de difusión, formación y capacitación. Para llevar a cabo dicha estrategia, se presentan las siguientes líneas de acción:

- Implementar campañas y proyectos de difusión de alto impacto para promover el derecho al acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas.
- Promover la firma de convenios con instituciones y organismos para colaborar y avanzar en materia de transparencia.
- Promover mecanismos electrónicos para que el ciudadano pueda solicitar información y reciba orientación para plantear sus sugerencias. ·
- Implementar un Programa de Certificación en Transparencia para organizaciones de la Sociedad Civil. ·
- Realizar la Feria de la Transparencia y la Semana de la Transparencia.
- Realizar y promover talleres y actividades de formación, capacitación y difusión dirigidas a la población infantil, juvenil y amas de casa; priorizando el tema de protección de datos personales.

- Promover la formación sobre el derecho de acceso a la información en las Bibliotecas del Municipio.
- Promover la declaración del Día Municipal de la Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información.
- Coordinar actividades para la atención de solicitudes y publicación de información en el portal del Ayuntamiento.
- Promover la transparencia en los procesos de adjudicación y ejecución de obras.

Una tercera estrategia que se plantea en es PMD busca dar seguimiento a los procesos de trámites sobre adjudicación y ejecución de obra pública, esto a través de las siguientes líneas de acción:

- Fortalecer el programa de control y auditorías de obra pública.
- Auditar el proceso de planeación, programación, presupuestación y ejecución de la obra pública municipal.
- Promover la participación de la Contraloría Municipal desde la adjudicación de la obra pública hasta la entrega de esta.
- Establecer un sistema de recuperación de la opinión del usuario con relación a la eficiencia en los trámites y servicios otorgados.

En el apartado de denuncia se propone una estrategia enfocada en promover mecanismos de participación ciudadana que favorezcan el desarrollo de valores democráticos y la corresponsabilidad social en materia de seguridad pública, y para llevarla a cabo se plantean las siguientes líneas de acción:

- Educar en coordinación con la familia sobre: democracia incluyente, la tolerancia, el respeto a la diversidad, el pluralismo, la equidad entre los géneros y la paz.
- Promover el Programa Vecino Alerta.
- Realizar de acciones dirigidas a fomentar en la sociedad la cultura de denuncia.

Con relación al combate a la corrupción, este PMD cuenta con un objetivo particular que pretende combatir la corrupción en las prácticas y acciones del gobierno municipal a través de una estrategia que busca fomentar la participación ciudadana para vigilar la prestación de servicios. Es por lo que se plantean las siguientes líneas de acción:

- Implementar un Plan Anticorrupción con estrategias para combatir malas prácticas entre los funcionarios y servidores públicos.
- Implementar la figura de Inspector Ciudadano.
- Establecer un sistema de seguimiento a quejas identificadas por los Inspectores Ciudadanos.

Zaragoza

El municipio en su Plan Municipal de Desarrollo 2019-2021, se aborda el tema anticorrupción con los siguientes apartados:



Con relación al tema de transparencia, se cuenta con una estrategia que busca fortalecer la comunicación externa sobre la gestión del municipio y lo pondrá en práctica a través de las siguientes líneas de acción

- Elaborar boletines de prensa y síntesis informativas.
- Concertar entrevistas y requerimientos de información por parte de los medios de comunicación.

En el tema de rendición de cuentas se propone un objetivo: el cual busca Promover, evaluar, vigilar y controlar ingresos, gastos, recursos humanos, bienes y fortalecer el funcionamiento del control interno de las dependencias municipales y sus servidores públicos, para ello se plantea una estrategia que estreche lazos entre ciudadanos y gobierno municipal con atención directa a sus peticiones y solicitudes. Por lo cual presenta la siguiente línea de acción:

- Realizar auditorías internas a los departamentos de la Tesorería, Seguridad Pública, SIMAS, Secretaría del Ayuntamiento, SEDESOL, Sindicalia y Juzgado Municipal.

Otra estrategia planteada en este PMD es la de administrar los recursos económicos y financieros municipales, para garantizar el óptimo rendimiento de capitales en su cumplimiento de los fines del Ayuntamiento, así como comprobar el correcto destino de la hacienda pública municipal y define la política económica y financiera, acorde a las necesidades del crecimiento, congruente con el marco jurídico.

ANEXO 4

Resultados principales del estudio cualitativo “Percepción de la corrupción en las regiones de Coahuila.”

Región Norte

Municipio representativo: Piedras Negras

En general los comentarios vertidos durante el grupo focal revelan un sentir de la población que ya ironiza y hace mofa continua del nivel tan grande de corrupción en el que se desarrolla gran parte de la sociedad. Pocas expresiones salen de la negatividad y pueden ser clasificadas como neutrales, esto ocurre sólo cuando se trata de justificar las condiciones en que algunos ciudadanos parecieran ser orillados por las circunstancias a decidir formas de actuar vinculadas a la corrupción, como única vía para, más allá de salir beneficiado, intentar no salir perjudicado por “jugar limpio”. Es claro que para la sociedad el actor medular en la existencia y persistencia del fenómeno de la corrupción es cualquier representante de la autoridad, por lo tanto, las expectativas de cambio no son positivas en ningún sentido, la percepción de impunidad, entendida como un nunca pasa nada cuando se les denuncia o se les señala, elimina toda posibilidad de esperanza. Se debe notar que expresiones como “el contexto hace a los ciudadanos ser corruptos” y “a veces no queda de otra” son frases que tienden a justificar y a normalizar prácticas corruptas entre los ciudadanos comunes y corrientes a quienes se les dispensa de alguna forma su comportamiento con relación a la dureza con que son señalados los funcionarios públicos.

Región Carbonífera

Municipio representativo: Monclova

Los participantes coincidieron en que el fenómeno de la corrupción se vincula con el deterioro de las maneras de educar a las nuevas generaciones, hoy son más permisivos con conductas que anteriormente hubieran sido sancionadas con firmeza, para algunos no existe la misma claridad para asegurar lo que es correcto y lo que no es. La generalidad de las emociones vertidas al momento de hacer los comentarios en torno a la conversación planteada por el moderador, reflejan negatividad, indignación, enojo o la normalización de conductas corruptas en los distintos actores y escenarios de la sociedad, reflejan lo poco esperanzador que resulta la posibilidad de un cambio que ya se vislumbra en el panorama de un futuro inmediato, la percepción generalizada indica que este ambiente de corrupción no mejorará en el corto plazo, antes bien, en el mejor de los casos, permanece igual, cuando

no empeora de manera acelerada. Sólo algunas de las posibles respuestas que les tocan a los ciudadanos despiertan emociones positivas o de cierta esperanza, pero algunas de esas mismas respuestas, también reflejan cierta incredulidad, existe la consciencia de que la labor de los ciudadanos debe ser de un mayor protagonismo, sin embargo, esta consciencia no alcanza como para que se puede asumir como alcanzable una situación social en torno a la corrupción que sea distinta.

Región Centro

Municipio representativo: Sabinas

La comunidad participante en el estudio en la ciudad de Sabinas, presentan negación a reconocer acciones por parte del gobierno para combatir la corrupción, aunque se le atribuye al gobierno la responsabilidad. Existe un contexto social e institucional que nos muestra la forma en que se puede obtener beneficios a partir del quebrantamiento de la ley y la búsqueda del beneficio personal. Existe una molestia que indigna por las formas en que se manifiesta la corrupción en su sociedad y como ésta deteriora las condiciones en las que viven, encuentran de fácil manera los ejemplos y las consecuencias de una corrupción desbordada. No existe una expectativa positiva, pues no se vislumbra posibilidad de mejora.

Región Sureste

Municipio representativo: Saltillo

La tónica de la conversación fue un continuo malestar por las situaciones de corrupción que se presentan en los distintos ámbitos de la entidad, se reconoce que es una situación que no cambia, arraigada y de la cual somos partícipes, cómplices o testigos mudos que hemos sido incapaces de actuar para detenerla, a veces pareciera que el rol que la sociedad debe adoptar es inalcanzable, otras que el ejercicio de poder es tan desigual que desmotiva cualquier intento, por ello, las expectativas de futuro, permanecen casi todo el tiempo apuntando a una situación que no cambia o que empeora. Sin embargo, en positivo, existe la certeza de que la ciudadanía tiene un papel por jugar, un pendiente que reconoce aparentemente como la única vía para hacer un cambio sustancial y empezar a construir una sociedad más equitativa, consciente participativa y en consecuencia menos corrupta, el saberse parte de la solución, brinda al ciudadano la sensación de poder jugar un rol en la construcción de esa sociedad que anhela y eso brinda las únicas notas en positivo y esperanzadoras a lo largo de la charla sostenida.

Región Laguna

Municipio representativo: Torreón

Se asume como un círculo nocivo el hecho de que la autoridad no se da a respetar y la sociedad no respeta lo que la autoridad representa ni lo que se supone por definición debe resguardar. Con la legalidad ignorada por ciudadanos y autoridades, se acepta con vergüenza que la corrupción está presente y que en más de una forma hemos sido partícipes todos o casi todos quienes habitamos en esta sociedad. El panorama general en torno a la conversación sobre la corrupción en la ciudad de Torreón, anticipa poca esperanza en que la situación mejore, resalta la presencia de la incredulidad en que las cosas cambien independientemente de que gobierno o ciudadanos asuman esa tarea de modificar las cosas, los participantes, se indignan y manifiestan enojo. Se percibe como normal algunas conductas sin tener una esperanza real en que eso pueda cambiar de alguna forma, incluso las soluciones para las siguientes generaciones las ven como poco factibles, pues tienen que empezar desde este tiempo en el que ubican que las condiciones no se han dado y los esfuerzos que se han hecho de acuerdo con su valoración no son reales.

ANEXO 5

Encuesta Estatal de Percepción de Corrupción y Cultura de la Legalidad

Resultados, conclusiones y recomendaciones

METODOLOGÍA

1. Objetivos de la encuesta

Conocer la percepción, experiencias y opiniones de la ciudadanía sobre la frecuencia de actos de corrupción y su impacto; así como sus actitudes respecto a su participación en el combate de la corrupción y sus propias prácticas cotidianas a fin de proporcionar elementos de toma de decisiones basado en evidencia y establecer una línea base para la medición de la evolución de la percepción en el Estado de Coahuila.

2. Población objetivo

La población objetivo son las personas de 18 años cumplidos o más que residen en viviendas particulares ubicadas en las principales ciudades de cada región del Estado.

3. Cobertura geográfica

La encuesta abarcará las cinco regiones del Estado, con un diseño muestral suficiente para contar con representatividad estatal y regional.

4. Tamaño de la muestra

Para el cálculo del tamaño de la muestra se analizaron diversas proporciones, de las que se seleccionó aquella que permite estimar variables que se presentan en proporciones mayores. Con la aplicación de la fórmula para una muestra aleatoria con un margen de error de 5 la muestra mínima sería de 384, sin embargo a fin de conseguir la representatividad a nivel regional, se realizará una muestra de 1,500 con lo cual el error se reduce a 2.53 para la representatividad estatal.

5. Marco muestral

El diseño de la muestra para la Encuesta se caracteriza por ser probabilístico; en consecuencia, los resultados obtenidos de la encuesta se generalizan a toda la población del dominio de estudio. A la vez, el diseño es trietápico, estratificado y por conglomerados, donde la unidad última de selección es una persona de 18 años cumplidos o más.

Para la selección de la muestra se utilizó el Marco Geoestadístico Nacional 2018 del INEGI, constituido por Áreas Geoestadísticas Básicas Urbanas y Manzanas.

Su diseño es probabilístico, por cuotas; estos últimos también se consideran unidades primarias de muestreo, pues es en ellos donde se seleccionan, en una segunda etapa, las viviendas que integran las muestras de las diferentes encuestas. La muestra maestra se construye de la siguiente manera:

- Unidad Básica de Muestreo (AGEBS) del listado de Áreas Geoestadísticas Básicas de cada municipio, se seleccionarán por fórmula aleatoria, el número de UBM que corresponda a cada municipio de acuerdo a la tabla 1.
- Unidad Secundaria de Muestreo (Manzana) De la AGEB seleccionada se filtrarán a su vez 5 manzanas de acuerdo al marco geoestadístico nacional.
- Unidad Específica de muestreo (Vivienda). El número de viviendas con que cuente cada manzana, se dividirá entre 5 siendo el resultado el intervalo de viviendas entre cada unidad a encuestar. Si no se atiende la encuesta se pasa a la vivienda siguiente conforme a las manecillas del reloj.
- Unidad mínima de muestreo (Encuestado) Al interior de la vivienda se pedirá encuestar a un mayor de edad dando preferencia a la siguiente secuencia de cada 10 encuestas 3 menores de 30 años, 6 personas de entre 30 y 64 y un mayor de 65, procurando a su vez equilibrar a 50 % el género de encuestados.

DATOS GENERALES DE LOS ENCUESTADOS

Sexo	Encuesta
Hombre	0.49

Mujer 0.51

Edad	
18-29	0.3

30-64 0.6

65 y más	0.1
----------	-----

Municipio	Encuestas
Saltillo	400
Torreón	400
Piedras Negras	150
Acuña	150

Monclova	250
Frontera	50
Sabinas	50
San Juan de Sabinas (Nueva Rosita)	50

ENCUESTA

1. En su opinión, ¿cuáles son los tres problemas más importantes que se enfrentan en Coahuila hoy en día? (Número del 1 al 3 en orden de importancia)

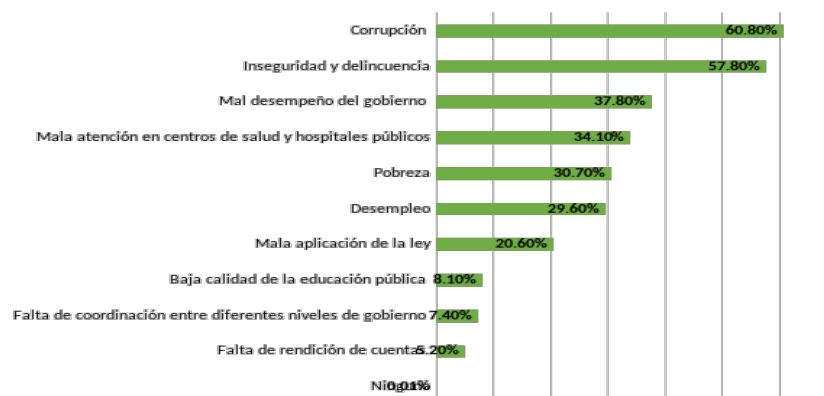
Respuesta	%	Encuestas
Corrupción	60.80%	911
Inseguridad y delincuencia	57.80%	867
Mal desempeño del gobierno	37.80%	567
Mala atención en centros de salud y hospitales públicos	34.10%	512
Pobreza	30.70%	461
Desempleo	29.60%	443
Mala aplicación de la ley	20.60%	309

Baja calidad de la educación pública **8.10%** **122**

Falta de coordinación entre diferentes niveles de gobierno **7.40%** **111**

Falta de rendición de cuentas **5.20%** **78**

Ninguno **0.01%** **10**



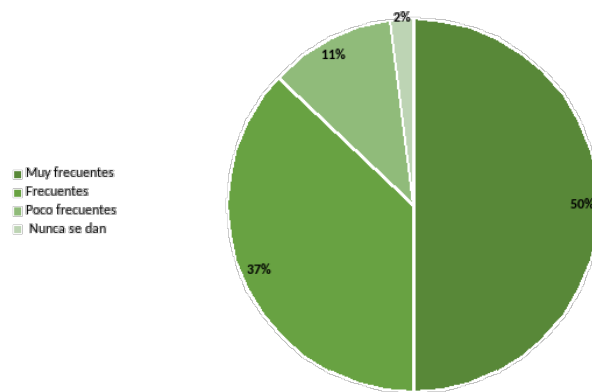
Las cinco regiones siguieron las mismas tendencias en respuestas a excepción de la región Centro, la cual señaló la inseguridad como la primera problemática y mala atención de centros de salud como su tercera opción. La región Norte también señaló la mala atención en centros de salud como su tercera opción.

2. La corrupción es una práctica que sucede cuando un servidor público o empleado del gobierno abusa de sus funciones para obtener beneficios personales como dinero, regalos o favores por parte del ciudadano. Por lo que usted sabe, en Coahuila estas prácticas son:

Universo: 1,500 encuestas

Respuesta	%	Encuestas
-----------	---	-----------

Muy frecuentes	0.50%	750
Frecuentes	0.37%	550
Poco frecuentes	0.11%	166
Nunca se dan	0.02%	34

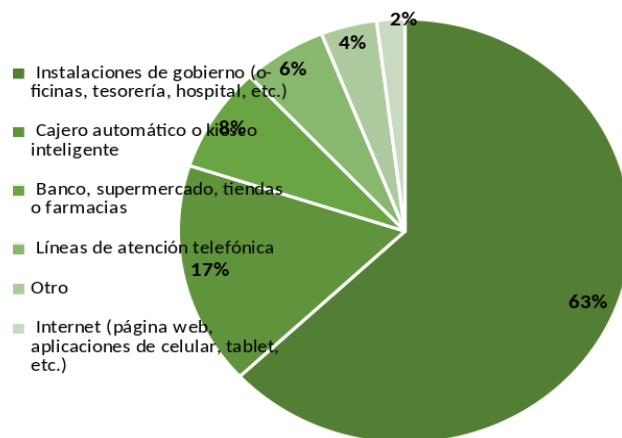


La región Norte es la única en la cual la opción número 2 (frecuente) recibió más menciones, en el resto de las regiones la opción “muy frecuente” fue la más elegida.

3. De acuerdo al último trámite o pago que realizó personalmente durante los últimos 12 meses, ¿a qué tipo de lugar acudió o a que medio recurrió para realizar el trámite o pago?

Respuesta	%	Encuestas
Instalaciones de gobierno (oficinas, tesorería, hospital, etc.)	0.63%	941

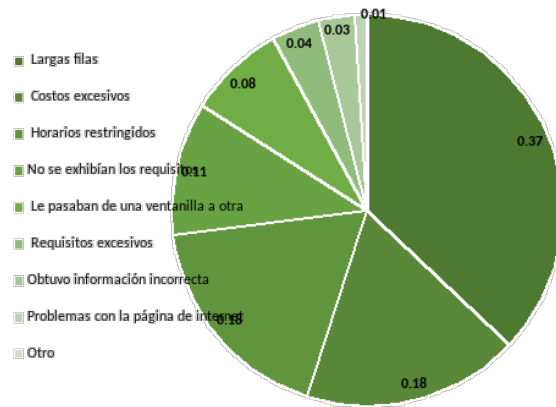
Cajero automático o kiosco inteligente	0.17%	248
Banco, supermercado, tiendas o farmacias	0.08%	126
Líneas de atención telefónica	0.06%	90
Otro	0.04%	62
Internet (página web, aplicaciones de celular, tablet, etc.)	0.02%	32



Las regiones Sureste y Laguna son las que mayormente utilizan los medios electrónicos para realizar los trámites gubernamentales. Sin embargo, aún con índices muy bajos comparado con la opción de acudir a las instalaciones de gobierno, la cual fue la más elegida en todas las regiones.

4. ¿Enfrentó alguno de los siguientes problemas para realizar el pago o trámite?

Respuesta	%	Encuestas
Largas filas	0.37	422
Costos excesivos	0.18	211
Horarios restringidos	0.18	209
No se exhibían los requisitos	0.11	121
Le pasaban de una ventanilla a otra	0.08	88
Requisitos excesivos	0.04	49
Obtuvo información incorrecta	0.03	38
Problemas con la página de internet	0.01	7
Otro	0	2

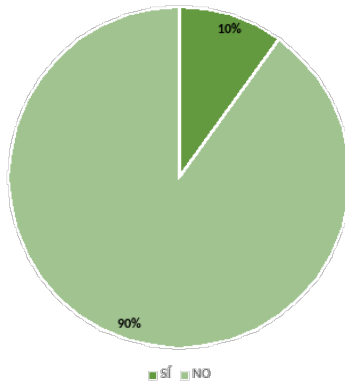


Acorde a la respuesta anterior, el mayor problema al realizar un trámite son las largas filas. Los costos excesivos fue la segunda opción más elegida en todas las regiones, a excepción de la Centro, la cual señaló en segundo lugar el “no exhibir los requisitos”.

5. ¿Ha sido detenido por un policía por una infracción inexistente?

Respuesta	%	Encuestas
SÍ	0.10%	153

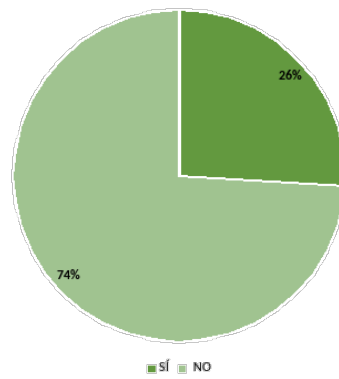
NO 0.90% 1347



6. ¿Algún policía le ha solicitado el pago de algún soborno?

Respuesta	%	Encuestas
SÍ	0.26%	386

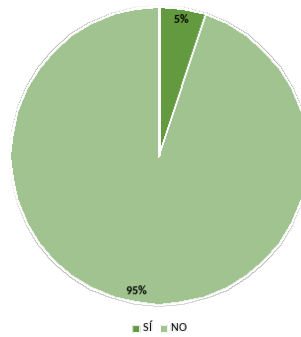
NO 0.74% 1114



7. ¿Ha sido testigo de algún soborno a un policía?

Respuesta	%	Encuestas
SÍ	0.61%	919

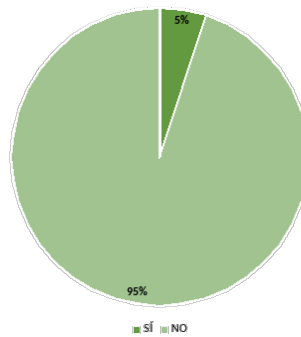
NO 0.39% 581



8. ¿Ha sido testigo de algún soborno a un servidor público o empleado de gobierno?

Respuesta	%	Encuestas
SÍ	0.05%	75

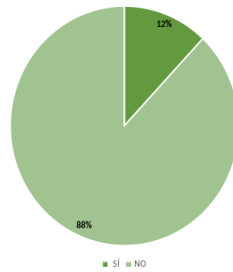
NO 0.95% 1425



9. ¿Un servidor público o empleado del gobierno le solicitó de forma directa algún beneficio (dinero, regalos o favores) para agilizar o continuar con un trámite? (SI SU RESPUESTA ES NO, PASE A LA PREGUNTA 11)

Respuesta	%	Encuestas
SÍ	0.12%	158

NO 0.88% 1342



La región Laguna fue la que registró mayor porcentaje de población a la cual se le solicitó algún beneficio para agilizar o continuar un trámite con el 14 % de los encuestados, la región Sureste fue la que menos registró este tipo de incidencia con el 5 %.

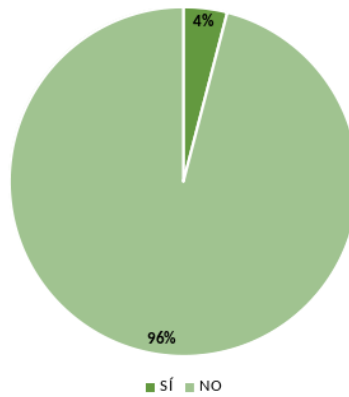
10. ¿Cuál fue la cantidad aproximada que en total los servidores públicos o empleados de gobierno le solicitaron en dinero, regalos o favores al realizarle un trámite?

Respuestas	%	Encuestas
No les dio nada	0.36%	57
Hasta \$200 pesos	0.25%	40
De \$201 a \$500 pesos	0.14%	23
De \$1,001 a \$5,000 pesos	0.13%	21
De \$501 a \$1,000 pesos	0.06%	10
Más de \$5000 pesos	0.03%	5
Otros	0.02%	4

11. ¿Le han solicitado pagar un soborno en su trabajo?

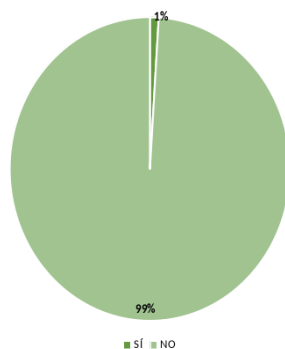
Respuesta	%	Encuestas
SÍ	0.04%	158

NO 0.96% 1342



12. ¿Le han solicitado pagar un soborno en el sistema judicial?

Respuesta	%	Encuestas
SÍ	0.01%	20
NO	0.99%	1480



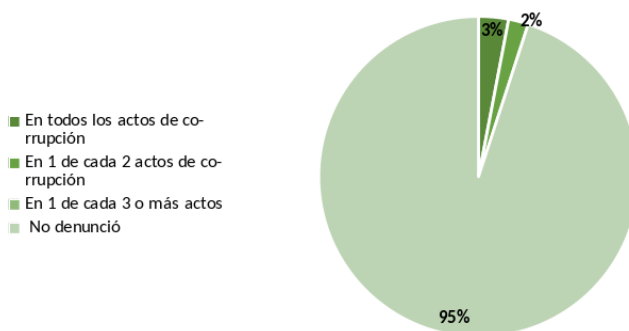
La región Carbonífera fue la que registró mayor porcentaje de solicitudes de pago de sobornos en el trabajo con el 8 % de los encuestados. La Laguna fue la región con el mayor porcentaje de pago de sobornos en el trabajo con el 6 %.

En cuanto al pago de sobornos en el sistema judicial, en la región Laguna 3 % de los encuestados así lo manifestó.

13. De las veces que sufrió actos de corrupción, ¿en cuántos denunció?

Universo: 382 encuestas

Respuestas	%	Encuestas
En todos los actos de corrupción	0.03%	13
En 1 de cada 2 actos de corrupción	0.02%	6
En 1 de cada 3 o más actos	0%	1
No denunció	0.95%	363

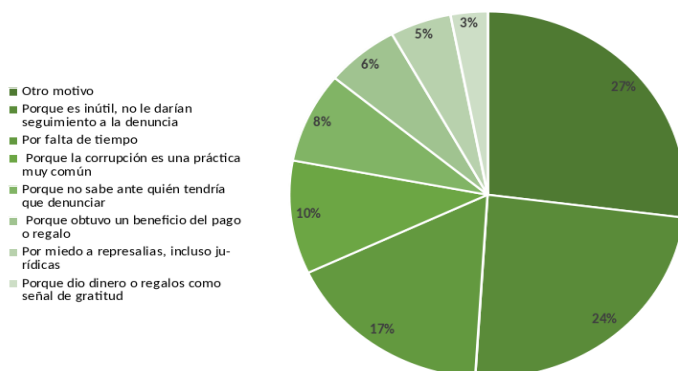


La cultura de la no denuncia se replica en la totalidad de las regiones, toda vez que no hubo ninguna opción que superara el 3% de elección.

14. Si usted no ha denunciado, ¿cuál fue la razón principal por la que NO denunció ante alguna autoridad?

Universo: 363 encuestas

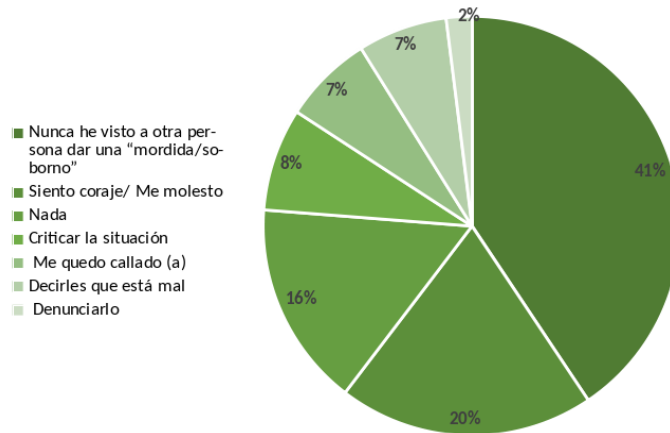
Respuestas	%	Encuestas
Otro motivo	0.27%	98
Porque es inútil, no le darían seguimiento a la denuncia	0.24%	87
Por falta de tiempo	0.17%	62
Porque la corrupción es una práctica muy común	0.10%	36
Porque no sabe ante quién tendría que denunciar	0.08%	30
Porque obtuvo un beneficio del pago o regalo	0.06%	21
Por miedo a represalias, incluso jurídicas	0.05%	18
Porque dio dinero o regalos como señal de gratitud	0.03%	10



La opción “otro” fue la más elegida en las regiones Carbonífera, Centro y Norte. En las regiones Laguna y Sureste, la opción más mencionada fue “porque es inútil, no le darían seguimiento a la denuncia”.

15. Cuando ha visto a una persona dar una “mordida/soborno”, ¿usted que ha hecho?

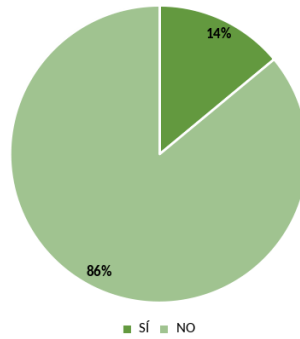
Respuestas	%	Encuestas
Nunca he visto a otra persona dar una “mordida/soborno”	0.41%	621
Siento coraje/ Me molesto	0.20%	293
Nada	0.16%	240
Criticar la situación	0.08%	113
Me quedo callado (a)	0.07%	106
Decirles que está mal	0.07%	99
Denunciarlo	0.02%	28



Destaca que, aproximadamente 4 de cada 10 que perciben un soborno no alguna acción directa o legal contra el cohecho. Por consecuente, apenas el diez por ciento, realiza alguna acción directa al presenciar este hecho como decirles que están mal, o levantar una denuncia.

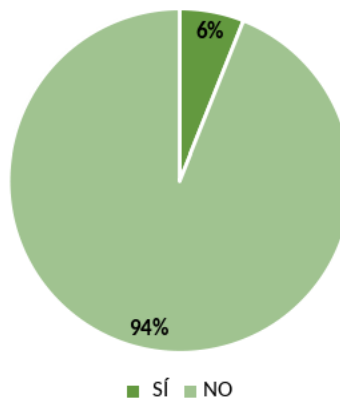
16. Durante los últimos 12 meses, ¿usted ha consultado páginas de internet del gobierno (federal, estatal o municipal) para conocer información sobre la forma como se organizan internamente, los programas que realiza o el uso de los recursos y dinero público?

Respuesta	%	Encuestas
SÍ	0.14%	210
NO	0.86%	1290



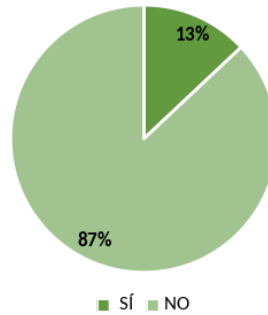
2. ¿Ha llenado y enviado en línea algún formato o solicitud para iniciar, continuar o terminar algún trámite?

Respuesta	%	Encuestas
SÍ	0.06%	386
NO	0.94%	1114



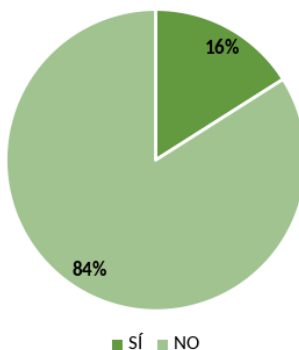
3. ¿Ha realizado un pago por un servicio, o para continuar, o terminar un trámite en el portal de alguna institución pública u oficina de gobierno?

Respuesta	%	Encuestas
SÍ	0.13%	198
NO	0.87%	1302

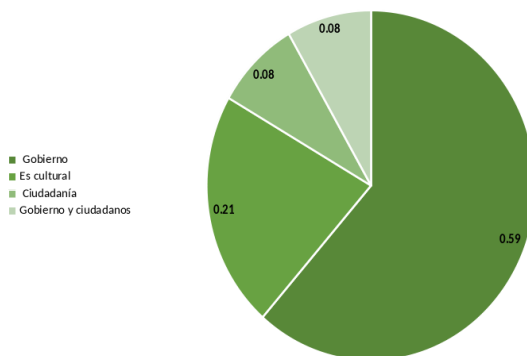


4. ¿Ha utilizado redes sociales para presentar una queja, denuncia o comentario en las cuentas del gobierno (federal, estatal o municipal)?

Respuesta	%	Encuestas
SÍ	0.16%	246
NO	0.84%	1254



17. ¿Usted quién cree que es el principal responsable de que exista corrupción?



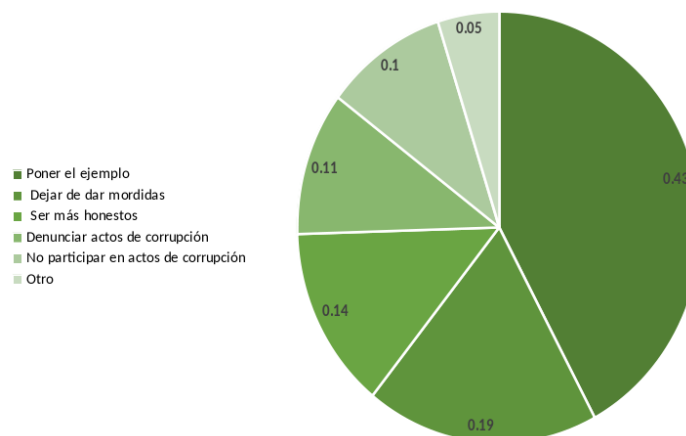
Seis de cada diez encuestados considera que el gobierno es el principal responsable de que exista corrupción. La región Sureste es la que más responsabiliza al gobierno por actos de corrupción, con el 68 % de los encuestados. La región Norte es la que menos responsabiliza al gobierno por actos de corrupción, con el 46 % de los encuestados.

18. ¿Qué podemos hacer para participar en el combate a la corrupción?

Universo: 1,500 encuestas.

Respuesta	%	Encuestas
Poner el ejemplo	0.43	641
Dejar de dar mordidas	0.19	282

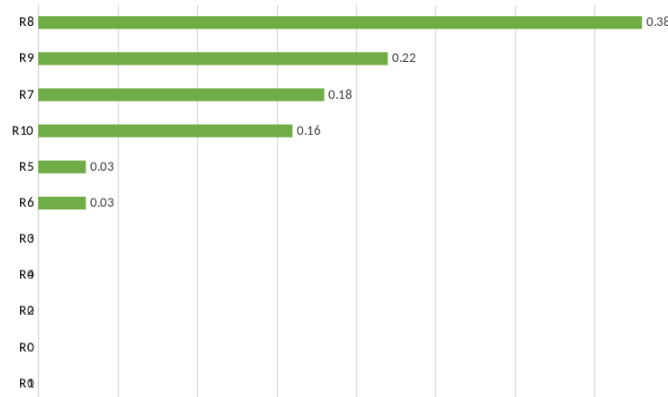
Ser más honestos	0.14	213
Denunciar actos de corrupción	0.11	159
No participar en actos de corrupción	0.1	150
Otro	0.05	70



Cuatro de cada diez encuestados consideran que “poner el ejemplo” es la mejor alternativa para el combate a la corrupción. Apenas uno de cada diez encuestados consideró la denuncia como la principal alternativa.

19. En una escala en donde 0 es “nada honesto” y 10 es “muy honesto”, ¿cómo se considera usted a sí mismo?

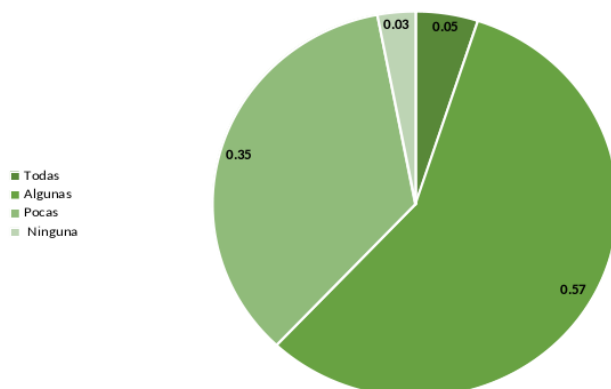
19. En una escala en donde 0 es "nada honesto" y 10 es "muy honesto", ¿cómo se considera usted a sí mismo?		
Respuesta	%	Encuesta
R8	0.38	567
R9	0.22	333
R7	0.18	273
R10	0.16	237
R5	0.03	44
R6	0.03	39
R3	0	4
R4	0	3
R2	0	1
R1	0	0
R0	0	0



En las cinco regiones del Estado, la población encuestada se evalúa en niveles similares en la escala de honestidad. La región Sureste es la que registró mayor porcentaje de población muy honesta con el 18 %, le siguió la región Norte con 17 %, la Laguna con 15 %, Carbonífera con 14.8 % y Centro con 12 %.

20. ¿Considera usted que respeta leyes y reglamentos?

Reglamentos	%	Encuestas
Todas	0.05	75
Algunas	0.57	855
Pocas	0.35	527
Ninguna	0.03	43



El 95 % de los encuestados afirmó no respetar en su totalidad las leyes y reglamentos. Al igual que con la pregunta 19, en las cinco regiones del Estado la población encuestada se evalúa en niveles similares en la escala de respeto a las leyes y reglamentos.

21. ¿Considera como corrupción las siguientes acciones?

21. ¿Considera corrupción las siguientes acciones?	Respondió No %
Llamadas personales de larga distancia del teléfono de la oficina	0.34
Uso de internet en la oficina para fines personales	0.32
Impresión de documentos no laborales, en la oficina	0.29
Dar una vuelta prohibida al estar conduciendo	0.29
Dar “mordida” para no ser multado	0.26
Dar un obsequio o dinero para agilizar un trámite	0.26

Pedir a otras personas que digan que no se encuentra cuando lo buscan	0.26
Tomar el periódico del vecino si no lo ven	0.26
Llevarse artículos de otro tipo de material (papel de baño, jabón, galletas)	0.24
Usar sin autorización la red inalámbrica del vecino	0.23
Evitar pagar el transporte público, cuando no lo ven	0.22
Abrir algún alimento en el supermercado sin pagar	0.22
No pagar impuestos	0.22
Quedarse con el cambio cuando le den de más	0.21
Alteración del reloj checador	0.15
Presentación de justificantes médicos falsos	0.15
Copiar en un examen	0.15
Vender una tarea	0.14
Comprar exámenes	0.09
Alterar el medidor de luz o conectarse sin medidor	0.1

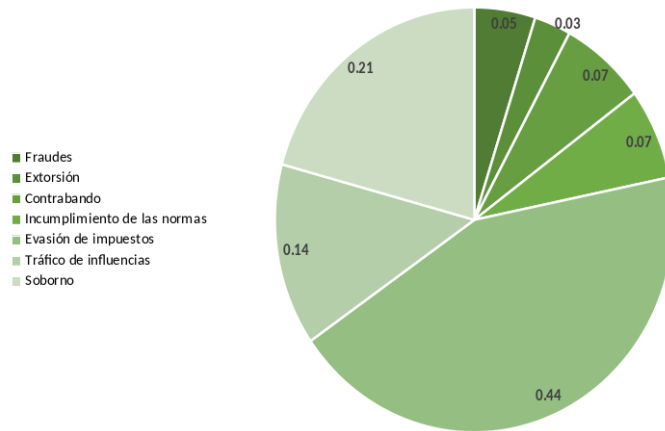
El 34 % de la población encuestada no considera como corrupción el realizar “llamadas personales de larga distancia del teléfono de la oficina”, mientras que el “uso de internet en las oficinas para fines personales” es normalizado por el 31.6 % de la población.

Algunas acciones altamente aceptadas son: “Dar una vuelta prohibida al estar conduciendo” y “La impresión de documentos no laborales en la oficina”.

“Comprar exámenes” y alterar el medidor de luz o conectarse sin medidor” son las acciones que más personas consideran corrupción.

22. ¿Cuáles considera que son las prácticas de corrupción que ocurren con mayor frecuencia en las empresas?

Respuesta	%	Encuestas
Evasión de impuestos	0.44	667
Soborno	0.21	312
Tráfico de influencias	0.14	209
Incumplimiento de las normas	0.07	103
Contrabando	0.07	99
Fraudes	0.05	68
Extorsión	0.03	42



El 95% de los encuestados afirmó no respetar en su totalidad las leyes y reglamentos. Al igual que con la pregunta 19, en las cinco regiones del estado la población encuestada se evalúa en niveles similares en la escala de respeto a las leyes y reglamentos.

PRINCIPALES RESULTADOS

La corrupción es el principal problema para los coahuilenses, seguidos de cerca por la inseguridad, el cual en la región Centro, incluso se percibe mayor. Sin embargo, el mal desempeño del gobierno y la mala aplicación de la ley también figuran, siendo estos problemas estrechamente relacionados con la corrupción.

El 87 % de los coahuilenses consideran que los hechos de corrupción son frecuentes o muy frecuentes. Los trámites presenciales, son por mucho, la forma de interacción con el gobierno predilecta por la ciudadanía coahuilense, aunque hay marcadas diferencias regionales, sobresaliendo el Sureste, en donde se usan también asiduamente bancos, tiendas y/o cajeros automáticos. En cuanto a las problemáticas con los trámites, las largas filas, los costos y los horarios restringidos son los más mencionados.

La incidencia de corrupción es de 11 %, dato que representa a los encuestados que han sido requeridos a pagar o dar un beneficio a cambio de realizar o agilizar un trámite o servicio, con variaciones regionales que van de el 15 % en la Laguna, hasta un 5 % en la región Sureste. Entre el 45 y el 15 % de quienes fueron extorsionados no dieron nada, un 39 % entre 1 y 500 pesos y 13 % entre mil y 5 mil. La tasa de denuncia es de 5 % siendo la mayor regional el 8.8 % de la región Norte. El 24 % no denunció porque lo considera inútil y 17 % por falta de tiempo. El 10 % de los encuestados dicen haber sido detenidos por un policía o tránsito por una falta inexistente, mientras el 25 % manifiesta que un policía les ha requerido un soborno.

El 44 % de los encuestados manifiestan no haber sido testigos de un acto de soborno, sin embargo de quienes si han visto a alguien dar una “mordida”; 14 % no han hecho nada, 19 % manifiestan haberse molestado y 7 % guardar silencio. Cuando se es testigo de un acto de corrupción, solo un 6.6 % han manifestado su desacuerdo a la persona involucrada y 1.8 % han presentado una denuncia, subiendo este porcentaje a 4 % en La Laguna y el no hacer nada hasta 25 % en la Región Carbonífera.

En cuanto al interés tangible en los asuntos gubernamentales, el 14 % ha consultado en internet información sobre los programas y uso de los recursos públicos, siendo las regiones con más interés la Sureste (18 %) y Laguna (17 %), mientras en el Norte (8 %) y en la Carbonífera (7 %) se muestra menor interés. Únicamente el 5.6 % ha realizado algún trámite gubernamental en línea, sin variaciones relevantes por región, mientras el 13 % realizó algún

pago por trámite o servicio gubernamental por internet, siendo en la Laguna en donde más se recurrió a esta posibilidad (18 %) y la Carbonífera donde menos (6 %). En cuanto a la manifestación de quejas y/o denuncias mediante redes sociales, 16.4 % utilizó este medio en promedio estatal, llegando a 22 % en La Laguna, 17 % en el Centro, 16 % en el Sureste, 11 y 10 % respectivamente en el Norte y Carbonífera.

Al responder ¿usted quién cree que es el principal responsable de que exista corrupción?, se pone de manifiesto la posibilidad de una mayor participación en los asuntos públicos, dado que las opciones: “gobierno” y “gobierno y ciudadanos” suman 67 %, llegando a 78 % en la Región Sureste. Un 21 % considera que la corrupción es cultural; llegando a 32 % en el Norte y a 13 % en el Sureste, mientras el 7.6 % considera que la ciudadanía es la principal responsable, destacando un 12 % en el Norte y 9 % en la Laguna.

El 42 % de los encuestados considera que lo que mejor podemos hacer los ciudadanos para combatir la corrupción es poner el ejemplo, con una distribución homogénea por regiones y con otras opciones similares como, dejar de dar mordidas (18 %), ser más honestos (14 %) y no participar en actos de corrupción (10 %) como principales opciones. A su vez el 10 % considera que debemos denunciar y un 4.6 % considera otras opciones. Los ciudadanos de la región Norte son quienes se consideran más honestos, con una calificación de 8.31 y los del Centro se otorgan una calificación de 8.10. Siendo el promedio estatal 8.19. Sin embargo al preguntar por acciones concretas solo el 5 % dice respetar todas las leyes y reglamentos, 56.9 % dice respetar algunas, 35 % considera que respeta pocas normativas y 2.8 % no respeta ninguna. En el Sureste el 55 % respeta todas o algunas leyes, 63.6 % en la Laguna y 66 % en el Centro. Dentro de un listado de veinte acciones cotidianas, la acción que más personas NO consideran corrupción es “hacer llamadas personales de larga distancia desde una oficina con 34 %, que no le ven ningún problema. Destacan también el uso de internet para asuntos particulares en oficina (31 %), impresión de documentos no laborales en oficinas (28 %) y dar una vuelta prohibida al conducir (28 %). Por otra parte sólo el 9 % NO considera corrupción comprar exámenes y 10 % conectarse sin medidor a la luz.

Además de las acciones ya mencionadas, en la región Sureste destaca que el 35 % no considera corrupción tomar el periódico de un vecino si no lo ven o pedir a otra persona que digan que no están cuando lo buscan (30 %). En la región Laguna, el 32 % no considera corrupción usar la red inalámbrica de un vecino sin permiso o pagar mordida para no ser

multado. En global la permisividad en el estado es de un 22 % sobre las acciones enlistadas. Respecto a las prácticas de corrupción en las empresas, el 44 % considera que las más frecuentes son la evasión de impuestos, con una percepción del 52 % en el Centro y de 49 % en la Carbonífera. El soborno (20.8 %) y el tráfico de influencias (14 %) son otras prácticas que se consideran muy frecuentes.

CONCLUSIONES

La brecha entre la percepción e incidencia de corrupción es de 66 %, ya que 87 % considera los actos de corrupción frecuentes y muy frecuentes y 11 % ha sido objeto de una solicitud de soborno. Los policías y en particular agentes de vialidad, son las figuras más identificadas con la corrupción y por lo tanto las que más propagan una alta percepción de corrupción. Si se cambia un poco la percepción sobre los agentes vialidad, la confianza puede aumentar hasta en un 100 % considerando que la incidencia de corrupción pasa de 11 % a 25% entre otros trámites de gobierno y la policía. A pesar de que la mayor razón para no denunciar es porque lo consideran inútil, también es notoria la población que no lo hace por falta de tiempo. El uso de las herramientas de transparencia por parte de la ciudadanía es muy baja en relación a las obligaciones de transparencia de los entes públicos. El medio más usado para manifestar denuncias por corrupción son las redes sociales, sin embargo, es apenas un 16 %, por lo cual a pesar de considerarse el principal problema público, son pocas las acciones de los ciudadanos para combatir la corrupción. Lo anterior es coherente con la consideración de que la responsabilidad de la corrupción es del gobierno.

Los elementos de cultura de la legalidad muestran una brecha entre la autoconcepción de honestidad, el respeto de las leyes y la valoración de acciones concretas, ya que si bien la mayor parte de los coahuilenses se consideran honestos, uno de cada tres creen que respetan pocas normativas y uno de cada cinco no considera corrupción algunas acciones irregulares. La región Sureste cuenta con la incidencia más baja de actos de corrupción, sin embargo es donde más población considera la corrupción como el principal problema. La región Laguna considera mayor diversidad de problemáticas además de la corrupción, sin embargo es la zona que considera más frecuentes estas acciones y registra mayor incidencia. A su vez es la región que muestra mayor permisividad a acciones irregulares. La población de la región Centro se considera la más honesta y respetuosa de la Ley en el Estado. La región Norte cuenta con el mayor porcentaje de denuncia de hechos de corrupción. La región Carbonífera presenta menores incidentes de corrupción con policías y agentes de tránsito, además, a pesar de utilizar medios digitales en menor medida que otras regiones, manifiesta mayores problemas con las páginas de internet al efectuar trámites.

RECOMENDACIONES

La política anticorrupción debe ir tanto encaminada a la eficiencia de la denuncia y el castigo, como en el aumento de la confianza en los servidores públicos. Es necesario una política estatal que incentive las acciones municipales tendientes a disminuir la imagen de corrupción de policías y agentes de tránsito, que combine una cero tolerancia al soborno con una eficiente estrategia de comunicación. Resulta conveniente el establecimiento de módulos de denuncia que agilicen y faciliten esta acción en materia de corrupción, ya que una de las principales razones mencionadas para no denunciar es la falta de tiempo. Si bien es importante incluir acciones de promoción de la cultura de la legalidad y participación ciudadana en la prevención, denuncia y sanción de actos de corrupción, es necesaria la actuación visible y primordial de los entes públicos para generar confianza, ya que de lo contrario la promoción de participación puede ser tomada como evasión de responsabilidad. Es importante privilegiar los mecanismos presenciales para trámites y denuncias en las zonas Centro, Norte y Carbonífera, mientras los medios digitales y módulos interactivos tienen mayor penetración en las regiones Sureste y Laguna.

ANEXO 6

Lista de homologación de Prioridades Estratégicas y Prioridades PNA

Prioridad Estratégica		Prioridad PNA
Eje 1	1. Promover el diseño e implementación de lineamientos para prevenir conflictos de interés en todo el proceso de contratación de servidores públicos de todos los niveles.	11. Impulsar la adopción, socialización y fortalecimiento de políticas de integridad y prevención de conflictos de interés, en los entes públicos mediante comités de ética o entes homólogos.
	2. Desarrollar un estándar en capacitación técnica que sea continua y certificada entre los funcionarios de los distintos niveles.	13. Generar bases mínimas para el diseño, desarrollo y ejecución de programas de recursos humanos en el servicio público, en colaboración con la Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación.
	3. Impulsar la generación de mecanismos homologados con criterios básicos en los procesos de selección y de evaluación del desempeño de servidores públicos de todos los niveles.	14. Generalizar el diseño, instrumentación y evaluación de SPC en todos los ámbitos de gobierno y poderes públicos, basados en el mérito, capacidades, desempeño y habilidades de acuerdo al perfil de puesto, cargo o comisión, con perspectiva de género y fomento a la diversidad e inclusión.
	4. Impulsar la creación de órganos ciudadanos que participen en temas de contratación y capacitación.	15. Implementar un modelo de evaluación del desempeño del Sistema Nacional Anticorrupción, junto con una metodología nacional de anexo transversal presupuestal en materia de combate a la corrupción.
Prioridad Estratégica		Prioridad PNA
Eje 2	5. Incentivar el trabajo conjunto entre la ciudadanía y las entidades públicas para el diseño de mecanismos y estrategias que permitan el involucramiento efectivo del ciudadano.	32. Implementar políticas de transparencia proactiva y gobierno abierto que promuevan la participación ciudadana y el ejercicio de derechos en el combate de la corrupción, en colaboración con el SNT.
	6. Fomentar y adoptar espacios de participación ciudadana a toda la administración y en todos los niveles, con criterios de funcionamiento homologados, que aporten en el incremento de la efectividad y con fácil acceso para la ciudadanía.	34. Fomentar el desarrollo y uso de mecanismos colaborativos y digitales de participación ciudadana para articular propuestas de combate a la corrupción desde la sociedad.
	7. Impulsar la adopción de esquemas y programas de investigación académica y formación cívica en las instancias educativas públicas y privadas, así como la incorporación de la cultura cívica al debate público, que doten a la ciudadanía y a las futuras generaciones de conocimiento suficiente en materia anticorrupción.	38. Adoptar prácticas homogéneas de parlamento abierto en los poderes legislativos federal y estatal, tendientes a un modelo de estado abierto.
	8. Integrar a la iniciativa privada para que fomente e impulse la adopción y desarrollo de políticas de cumplimiento y programas anticorrupción en el sector privado, bajo un esquema de colaboración claro, abierto y funcional.	37. Apoyar la identificación de fuentes de financiamiento y de fomento para el desarrollo de proyectos de investigación y articulación de redes ciudadanas que contribuyan al combate de la corrupción desde la sociedad civil y la academia.
		40. Colaborar con el Sistema Educativo Nacional en materia de formación cívica, ética, integridad y derechos humanos.
		26. Fomentar la conformación de una coalición de empresas íntegras que impulse la adopción de buenas prácticas internacionales en la materia dentro del sector productivo.
	36. Articular esquemas de colaboración con cámaras empresariales y organismos internacionales que fomenten el desarrollo y adopción de políticas de cumplimiento y programas anticorrupción; así como la generación y aprovechamiento de datos abiertos en la materia en el sector privado, en especial, las Mipymes.	
Prioridad Estratégica		Prioridad PNA
Eje 3	9. Implementar desde las instituciones estrategias efectivas de comunicación dirigido a la ciudadanía con un lenguaje claro y entendible.	4. Implementar estrategias efectivas para la difusión de las obligaciones de transparencia y publicación de información proactiva en materia de prevención, denuncia, detección, investigación, resolución y sanción de hechos de corrupción, en colaboración con el SNT.
	10. Impulsar la adopción de políticas de integridad como principio básico para el desempeño de las instituciones públicas.	35. Fortalecer el papel de los CPCs en los procesos de comunicación y promoción de la cultura de la integridad y el combate a la corrupción, con especial énfasis en los sectores social y empresarial.
	11. Impulsar y diseñar desde las instituciones públicas estrategias y programas de evaluación ciudadanizados.	11. Impulsar la adopción, socialización y fortalecimiento de políticas de integridad y prevención de conflictos de interés, en los entes públicos mediante comités de ética o entes homólogos. (Esta Prioridad ya aparece en el Primer Elemento, Eje 1)
		16. Fomentar el desarrollo de políticas de transparencia proactiva y gobierno abierto que propicien, desde una perspectiva ciudadana, el seguimiento, evaluación, mejora, simplificación, gestión de riesgos y rendición de cuentas de los entes públicos, el ciclo presupuestal, las contrataciones públicas, las asociaciones público-privadas, el cabildeo y los programas públicos, en colaboración con el SNT e instancias públicas nacionales e internacionales.
		28. Desarrollar e implementar políticas de transparencia proactiva y gobierno abierto que fortalezca la rendición de cuentas y la vigilancia social en materia de infraestructura, obra pública y asociaciones público-privadas, en colaboración con el SNT.
	21. Fomentar la colaboración interinstitucional y el intercambio de información que permitan un fortalecimiento y simplificación de los puntos de contacto gobierno sociedad, como trámites, servicios, seguridad ciudadana, programas sociales, servicios educativos y de salud, entre otros.	
	23. Promover la mejora, simplificación de los procesos institucionales y homologación de trámites y servicios públicos a través del desarrollo de sistemas de evaluación ciudadana y políticas de transparencia proactiva, en coordinación con el Sistema Nacional de Mejora Regulatoria.	
	8. Generar evidencia e insumos técnicos sobre el funcionamiento, capacidades y desempeño de las instancias encargadas de la detección, investigación, sustanciación, determinación, resolución y sanción de faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción, que produzca inteligencia administrativa y mejore los procesos correspondientes.	
	13. Mejorar y homologar los mecanismos y herramientas	

Primer elemento de la PEAC

	que miden, evalúan y dan seguimiento de los programas para que abonen en una rendición de cuentas efectiva.	15. Implementar un modelo de evaluación del desempeño del Sistema Nacional Anticorrupción, junto con una metodología nacional de anexo transversal presupuestal en materia de combate a la corrupción. 24. Generar un sistema único que integre información sobre las políticas sociales, que incluya un catálogo nacional de programas sociales y un padrón universal de beneficiarios que aproveche la información pública existente.	
	Prioridad Estratégica	Prioridad PNA	
Eje 4	14. Diseñar esquemas de denuncia efectivos dentro de las instituciones ante delitos y hechos de corrupción, que garantice la protección a denunciantes y testigos, así como promover la cultura de denuncia de actos de corrupción.	5. Impulsar la mejora y homologación a escala nacional de protocolos y procesos de presentación de denuncias y alertas por hechos de corrupción por parte de ciudadanos, controladores y testigos sociales, e instituciones de fiscalización y control interno competentes. y 6. Generar y ejecutar procesos homologados a escala nacional de protección a denunciantes, alertadores, testigos, servidores públicos expuestos, peritos y víctimas de hechos de corrupción.	
	15. Fortalecer las capacidades técnicas y la constante profesionalización de los funcionarios de los organismos de investigación y sanción de delitos y actos de corrupción.	9. Fortalecer las capacidades de investigación de la Fiscalía General de la República y de las fiscalías de las entidades federativas en materia de delitos por hechos de corrupción.	
	16. Mejorar la percepción institucional de las instancias investigadoras e impartidoras de justicia en delitos y hechos de corrupción por medio de mecanismos de transparencia y participación ciudadana.	10. Implementar mecanismos de gobierno abierto que fortalezcan las acciones de combate a la corrupción por parte de las instancias encargadas de la investigación, substanciación, determinación y resolución de faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción. 35. Fortalecer el papel de los CPCs en los procesos de comunicación y promoción de la cultura de la integridad y el combate a la corrupción, con especial énfasis en los sectores social y empresarial.	
	17. Diseñar, impulsar y eficientar los procesos que puedan garantizar la resolución de las demandas y denuncias de delitos por hechos de corrupción y transparentar el seguimiento de estos en apego a la Ley de Protección de Datos Personales.	7. Establecer una política criminal en materia de delitos por hechos de corrupción.	
		Prioridad Estratégica	Prioridad PNA
Segundo elemento de la PEAC	Coordinación	18. Desarrollar y ejecutar programas estratégicos que fomenten la coordinación entre las autoridades responsables de atender, investigar, sustanciar, determinar, resolver y sancionar faltas administrativas graves y no graves.	Es igual a la Prioridad 1 de la PNA. En algunos casos las prioridades se adaptaron al contexto estatal.
		19. Asegurar la coordinación entre instituciones encargadas de la detección e investigación de hechos de corrupción con las autoridades competentes en materia fiscal y de inteligencia financiera.	Es igual a la Prioridad 2 de la PNA. En algunos casos las prioridades se adaptaron al contexto estatal.
		20. Impulsar la coordinación entre las instancias responsables de la fiscalización para la homologación y simplificación de normas, procesos y métodos de control interno, auditoría y fiscalización; así como la colaboración con otras instancias públicas que facilite el intercambio de información para maximizar y potencializar los alcances y efectos de la fiscalización y de los procedimientos de investigación y sanción de faltas administrativas y hechos de corrupción.	Es igual a la Prioridad 19 de la PNA. En algunos casos las prioridades se adaptaron al contexto estatal.
		21. Crear observatorios y laboratorios de innovación social para la gestión de riesgos de corrupción en los puntos de contacto gobierno sociedad, así como para la vigilancia en compras y adquisiciones públicas.	Es igual a la Prioridad 25 de la PNA. En algunos casos las prioridades se adaptaron al contexto estatal.
		22. Crear un catálogo estatal de mecanismos de participación social que contribuya a la incidencia formal y efectiva de la vigilancia ciudadana en la prevención y combate de la corrupción.	Es igual a la Prioridad 33 de la PNA. En algunos casos las prioridades se adaptaron al contexto estatal.
		23. Homologar criterios a escala estatal para la realización de campañas de comunicación sobre la corrupción, sus costos, implicaciones y elementos disponibles para su combate.	Es igual a la Prioridad 39 de la PNA. En algunos casos las prioridades se adaptaron al contexto estatal.
		24. Delimitar las regiones del territorio coahuilense por sus municipios, de forma que permita organizar las actividades que se desprendan en atención al Prioridad Estratégica 31.	No cuenta con equivalente en la PNA.
Estado abierto	25. Impulsar la creación y homologación de principios normativos en materia de cabildeo y conflicto de interés dirigidos a la prevención y sanción de hechos de corrupción.	Es igual a la Prioridad 27 de la PNA. En algunos casos las prioridades se adaptaron al contexto estatal.	
Tecnologías	27. Impulsar el desarrollo y utilización de metodologías de análisis de datos masivos e inteligencia artificial relacionadas con la identificación de riesgos, la evaluación, la mejora de la gestión, la auditoría y la fiscalización estratégicas de programas, procesos, actividades y funciones en el sector público.	Es igual a la Prioridad 20 de la PNA. En algunos casos las prioridades se adaptaron al contexto estatal.	
	28. Desarrollar e implementar un sistema único de información sobre compras y adquisiciones públicas, que incluya un padrón nacional de proveedores de gobierno y un sistema nacional homologado de contrataciones públicas, vinculados a la Plataforma Digital Estatal.	Es igual a la Prioridad 29 de la PNA. En algunos casos las prioridades se adaptaron al contexto estatal.	

		29. Incorporar sistemas de inteligencia estandarizados e interoperables en los entes públicos orientados a la prevención, detección, investigación y substanciación de faltas administrativas y delitos por hechos de corrupción, derivados de la implementación de la Plataforma Digital Estatal.	Es igual a la Prioridad 3 de la PNA. En algunos casos las prioridades se adaptaron al contexto estatal.
	Inclusión, igualdad y equidad de género	30. Fortalecer mecanismos de evaluación de los programas presupuestarios con enfoques de derechos humanos y gestión de riesgos de corrupción.	Es igual a la Prioridad 22 de la PNA. En algunos casos las prioridades se adaptaron al contexto estatal.
		31. Desarrollar una agenda estratégica, con un enfoque incluyente y perspectiva de género, de incidencia ciudadana en el control de la corrupción, en la que se promueva el fortalecimiento de los mecanismos de participación ciudadana existentes en la materia, y la creación de nuevos esquemas y redes de colaboración social.	Es igual a la Prioridad 31 de la PNA. En algunos casos las prioridades se adaptaron al contexto estatal.
		32. Impulsar la generación de información, datos, índices y otras mediciones que proporcionen información desagregada por sexo. Así como aperturar la información en sistemas de lectura y escritura para personas con discapacidad visual, lengua de señas, así como facilitar la accesibilidad en los sitios web.	No cuenta con equivalente en la PNA.
		Prioridad Estratégica	Prioridad PNA
Tercer elemento de la PEAC	Cadena de rendición de cuentas	33. Impulsar políticas de archivos y procesos homologados de gestión documental, en colaboración con el Sistema Nacional de Archivos y el Sistema Nacional de Transparencia, que mejoren la calidad de la información que las entidades públicas registran mediante sistemas informáticos actualizados.	Es igual a la Prioridad 18 de la PNA. En algunos casos las prioridades se adaptaron al contexto estatal.
		34. Promover la creación y adopción de criterios y estándares unificados en las compras, contrataciones y adquisiciones públicas, que acoten espacios de arbitrariedad, y mejoren su transparencia y fiscalización.	Es igual a la Prioridad 30 de la PNA. En algunos casos las prioridades se adaptaron al contexto estatal.
		35. Promover el diseño, implementación y evaluación del desempeño de programas de capacitación, certificación de capacidades y desarrollo profesional en el servicio público, enfocadas al control de la corrupción, responsabilidades administrativas y ética pública.	Es igual a la Prioridad 12 de la PNA. En algunos casos las prioridades se adaptaron al contexto estatal.

ANEXO 7

Indicadores de corrupción y cuadro de mando

Nombre del indicador	Proyecto	Periodicidad	Fuente	Año	Eje o ejes de la PEAC	Nacional	Coahuila
Percepción de los principales problemas de la entidad (CORRUPCIÓN)	Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG)	Bienal	INEGI	2019	Diagnóstico	52.76%	52.43%
Percepción sobre la seguridad pública-Distribución porcentual de los principales problemas (CORRUPCIÓN)	Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE)	Anual	INEGI	2019	Diagnóstico	26.8%	32%
Percepción de frecuencia de la corrupción	Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG)	Bienal	INEGI	2019	Diagnóstico	87.00%	75.6%
Frecuencia de actos de corrupción percibidos por las unidades económicas	Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE)	Solo una publicación hasta el momento	INEGI	2016	Diagnóstico	Muy frecuente: 40.2%, Frecuente: 40.0%, No frecuente: 14.2%	Muy frecuente: 45.5% Frecuente: 36.7% No frecuente: 10.9%
Tasa de incidencia de corrupción en población de 18 años y más	Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG)	Bienal	INEGI	2019	Diagnóstico	30,456	50,307
Tasa de prevalencia de corrupción por cada 100 000 habitantes	Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG)	Bienal	INEGI	2019	Diagnóstico	15,732	15,410
Costo promedio de la corrupción	Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG)	Bienal	INEGI	2019	Integridad y eficiencia institucional	\$3,822	\$2,481
Tasa de prevalencia de actos de corrupción en las empresas	Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG)	Bienal	INEGI	2017	Integridad y eficiencia institucional	28.12	11.3

Tasa de prevalencia de corrupción por cada 100 000 habitantes (Contacto con autoridades de seguridad pública)	Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG)	Bienal	INEGI	2019	Integridad y eficiencia institucional	59,224	48,581
Tasa de prevalencia de corrupción por cada 100 000 habitantes (Trámites ante el ministerio público)	Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG)	Bienal	INEGI	2019	Integridad y eficiencia institucional	24,822	24,853
Conocimiento y experiencia personal de actos de corrupción en trámites y solicitudes	Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG)	Bienal	INEGI	2019	Integridad y eficiencia institucional	Escucharon: 62084 Conocido refirió: 44199 Experiencia personal: 15732	Escucharon: 64705 Conocido refirió: 48083 Experiencia personal: 15410
Prevalencia de corrupción	Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2018 y Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017	-	INEGI	2017/2018	Integridad y eficiencia institucional	-	11.30%
Prevalencia de corrupción en empresas	Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2018 y Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017	-	INEGI	2017/2018	Integridad y eficiencia institucional	-	3.0%
Unidades económicas y causas para incurrir en corrupción	Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE)	Solo una publicación hasta el momento	INEGI	2016	Integridad y eficiencia institucional	Agilizar trámites: 64.6%. Evitar multas: 39.4%. Obtener licencia/permisos: 30.7%. Evitar clausura: 29.7%. Pagar menos impuestos: 29.3%. Evitar impuestos: 25.0%. Obtener un servicio: 22.2%. Evitar el cumplimiento de la ley: 18.3%. Ganar contratos gubernamentales: 13.9%	Agilizar trámites: 64.1%. Evitar multas: 26.2%. Obtener licencia/permisos: 30.1%. Evitar clausura: 28.2%. Pagar menos impuestos: 24.8%. Evitar impuestos: 21.4%. Obtener un servicio: 25.8%. Evitar el cumplimiento de la ley: 10.2%. Ganar contratos gubernamentales: 10.5%

						Publicar en licitaciones: 12.9%. Otros: 1.1%.	Publicar en licitaciones: 8.0%. Otros: 0.1%.
Problemáticas enfrentadas en la realización de trámites	Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE)	Solo una publicación hasta el momento	INEGI	2016	Integridad y eficiencia institucional	Barreras en trámite: 81.1%. Problemas con TIC y otras: 28.6%. Asimetrías de información: 25.6%.	Barreras en trámite: 96.8%. Problemas con TIC y otras: 32.7%. Asimetrías de información: 21.9%.
Nivel de confianza en instituciones o actores de la sociedad	Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE)	Solo una publicación hasta el momento	INEGI	2016	Cultura cívica y participación ciudadana para la prevención de la corrupción	Universidades públicas: 84.2 %. Educación básica: 82.1 %. Empleados de establecimiento: 75.4 %. Ejército y la Marina: 75.5 %. Empresarios relacionados al establecimiento: 66.5 %. Comisión de Derechos Humanos: 50.9 %, Instituciones religiosas: 60.2 %, Hospitales Públicos: 62.4 %, Gobiernos Municipales: 41 %.	Universidades públicas: 91.5%. Educación básica: 83.4%. Empleados de establecimiento con: 79.5%. Ejército y la Marina: 79.3%. Empresarios relacionados al establecimiento: 76.3%. Comisión de Derechos Humanos: 75.3%, Instituciones religiosas: 73.5%, Hospitales Públicos: 66.9%, Gobiernos Municipales: 63.7%.
Población que no denunció un acto de corrupción	Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG)	Bienal	INEGI	2019	Combate a la corrupción e impunidad	81.0%	81.9%
Porcentaje de población que denuncia algún acto de corrupción	Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG)	Bienal	INEGI	2019	Combate a la corrupción e impunidad	5.1	3.5
Percepción del desempeño de seguridad de seguridad pública	Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE)	Anual	INEGI	2019	Integridad y eficiencia institucional	Marina: 86.1%, Ejercito: 83.9%, Policía Profesional: 63.9%, Procuraduría General de la República: 58.0%, Ministerio Público y Procuraduría Estatales: 51.1%, Policía Preventiva Municipal: 47.1%, Policía de Tránsito: 42.6%	Marina: 88.6%, Ejercito: 88.2%, Policía Federal: 70.1%, Procuraduría General de la República: 64.7%, Ministerio Público y Procuraduría Estatales: 61.0%, Policía Preventiva Municipal: 55.9%, Policía de Tránsito: 51.5%

Percepción de corrupción en las autoridades de seguridad pública	Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE)	Anual	INEGI	2019	Integridad y eficiencia institucional	Policia de tránsito: 76.6%, Policia preventiva: 67.9 %, Policia Ministerial o judicial 62.3 %, Policia federal 55.2 %, Ejercito: 23.6% Marina 18.1%	Policia de tránsito: 70.5 %, Policia preventiva: 64.1 %, Policia Ministerial o judicial 59.6 %, Policia federal 44.4 %, Ejercito: 18.5%, Marina 14.7%
Tasa de prevalencia delictiva (Delitos de corrupción)	Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE).	Bienal	INEGI	2018	Integridad y eficiencia institucional	541	299
Tasa de incidencia delictiva (Delitos de corrupción)	Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE).	Bienal	INEGI	2018	Integridad y eficiencia institucional	1,123	598
Trámites y/o servicios atendidos en las administraciones públicas estatales	Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Servicios Penitenciarios Estatales (CNGSPSPE)	Anual	INEGI	2017	Integridad y eficiencia institucional	465.521.593	6.114.035
Condición de apertura de espacios para la participación y/o consulta ciudadana en las administraciones públicas estatales	Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Servicios Penitenciarios Estatales (CNGSPSPE)	Anual	INEGI	2018	Cultura cívica y participación ciudadana para la prevención de la corrupción	-	En Coahuila las áreas en donde se reportaron espacios para la consulta y/o participación ciudadana fueron: Presupuesto participativo, medio ambiente y ecología, desarrollo social, desarrollo urbano, obras públicas y servicios públicos, transparencia, vigilancia y/o denuncia de servidores públicos, contraloría
Planes o programas en materia anticorrupción	Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Servicios Penitenciarios Estatales (CNGSPSPE)	Anual	INEGI	2018	Integridad y eficiencia institucional	53.1% de las Administraciones Públicas Estatales reportó contar con un plan o programa anticorrupción,	En Coahuila se encuentra en proceso de integración.
Planes o programas anticorrupción en municipios	Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Servicios Penitenciarios Estatales (CNGSPSPE)	Anual	INEGI	2018	Integridad y eficiencia institucional	-	En Coahuila el 100 % de los municipios cuentan con órganos de control interno, y el 5.3% de estos cuentan con un plan

							o programa anticorrupción.
Índice de Información del Ejercicio del Gasto	Índice de Información del Ejercicio del Gasto	Anual	IMCO	2018	Integridad y eficiencia institucional	58.2%	66.0%
Índice de Información Presupuestal Municipal	Índice de Información Presupuestal Municipal	Anual	IMCO	2017	Integridad y eficiencia institucional	42%	100%
Índice de percepción de la corrupción	Índice de percepción de la corrupción	Anual	Transparencia Internacional	2018	Diagnóstico	México ocupa el lugar 138 de 180 con 28 puntos.	-
Índice de Estado de Derecho (Internacional)	Índice de Estado de Derecho (Internacional)	Anual	World Justice Project (WJP)	2017-2018	Diagnóstico	Calificación general: 0.45 Subdimensiones: Gobierno abierto: 0.61, Orden y seguridad: 0.59, Derechos fundamentales: 0.52, Límites al poder gubernamental: 0.46, Cumplimiento regulatorio: 0.44, Ausencia de corrupción: 0.31, Justicia penal: 0.30.	-
El índice de Estado de Derecho en México 2018	El índice de Estado de Derecho en México 2018	Anual	World Justice Project (WJP)	2018	Combate a la corrupción e impunidad	-	Calificación general: 0.43 Subdimensiones: Gobierno abierto: 0.41, Orden y seguridad: 0.61, Derechos fundamentales: 0.48, Límites al poder gubernamental: 0.36, Cumplimiento regulatorio: 0.37, Ausencia de corrupción: 0.35, Justicia penal: 0.39, justicia civil: 0.44
Índice Global de Impunidad	Índice Global de Impunidad	Anual	Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP)	2018	Combate a la corrupción e impunidad	69.21	-
Barómetro Global de la Corrupción para América Latina y el Caribe	Barómetro Global de la Corrupción para América Latina y el Caribe	Anual	Transparencia Internacional	2019	Diagnóstico	Porcentaje de personas que piensan que la corrupción aumentó en los	-

						últimos 12 meses: 44 %	
Barómetro Global de la Corrupción para América Latina y el Caribe	Barómetro Global de la Corrupción para América Latina y el Caribe	Anual	Transparencia Internacional	2019	Diagnóstico	Porcentaje de personas que sostienen que su gobierno está actuando bien en la lucha contra la corrupción: 61 %	-
Coficiente TAI (Transparencia, Anticorrupción e Impunidad)	Coficiente TAI (Transparencia, Anticorrupción e Impunidad)	Anual	Transparencia Mexicana e Impunidad Cero	2017	Combate a la corrupción e impunidad	60.59	58.25
Tasa de denuncia por actuación indebida de servidores públicos por cada 100 servidores públicos de las Administraciones públicas estatales	Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Servicios Penitenciarios Estatales (CNGSPSE)	Anual	INEGI	2019	Recurso humano y profesionalización del servicio público	1.8	0.8
Unidades económicas víctima de actos de corrupción	Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas	Solo una publicación hasta el momento	INEGI	2016	Integridad y eficiencia institucional	-	801
Índice de Gobierno Abierto en México	Métrica de Gobierno Abierto	Bienal	INAI/CIDE	2019	Integridad y eficiencia institucional	0.52	0.48
Índice de Gobierno Abierto en México Subíndice de participación desde la perspectiva gubernamental	Métrica de Gobierno Abierto	Bienal	INAI/CIDE	2019	Integridad y eficiencia institucional	0.27	0.21
Índice de Gobierno Abierto: Subíndice de participación desde la perspectiva ciudadana	Métrica de Gobierno Abierto	Bienal	INAI/CIDE	2019	Cultura cívica y participación ciudadana para la prevención de la corrupción	0.66	0.52
Componente de acceso a la información desde la perspectiva gubernamental	Métrica de Gobierno Abierto	Bienal	INAI/CIDE	2019	Integridad y eficiencia institucional	0.87	0.83
Componente de datos abiertos	Métrica de Gobierno Abierto	Bienal	INAI/CIDE	2019	Integridad y eficiencia institucional	0.53	0.02
Componente de acceso a la información desde la perspectiva ciudadana	Métrica de Gobierno Abierto	Bienal	INAI/CIDE	2019	Cultura cívica y participación ciudadana para la prevención de la corrupción	0.68	0.57

Componente de transparencia proactiva	Métrica de Gobierno Abierto	Bienal	INAI/CIDE	2019	Integridad y eficiencia institucional	0.75	0.43
Promedio de días naturales para responder una solicitud de información	Métrica de Gobierno Abierto	Bienal	INAI/CIDE	2019	Integridad y eficiencia institucional	23.3	18.2
Número de auditorías realizadas a entes públicos	Auditoría Superior del Estado de Coahuila	Anual	ASEC	2018	Integridad y eficiencia institucional		1,792
Cantidad de investigaciones iniciados por responsabilidad administrativa en las APE	Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Servicios Penitenciarios Estatales (CNGSPSPE)	Anual	INEGI	2019	Combate a la corrupción e impunidad	-	761
Cantidad de procedimientos iniciados por responsabilidad administrativa en las APE	Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Servicios Penitenciarios Estatales (CNGSPSPE)	Anual	INEGI	2019	Combate a la corrupción e impunidad	-	154
Cantidad de sanciones impuestas a servidores públicos de las APE	Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Servicios Penitenciarios Estatales (CNGSPSPE)	Anual	INEGI	2019	Combate a la corrupción e impunidad	-	31
Averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas por presuntos delitos cometidos por servidores públicos en 2017	Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal	Anual	INEGI	2018	Combate a la corrupción e impunidad	-	7
Averiguaciones previas y carpetas de investigación pendientes por presuntos delitos cometidos por servidores públicos en 2017	Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal	Anual	INEGI	2018	Combate a la corrupción e impunidad	-	267
Averiguaciones previas y carpetas de investigación determinadas y cerradas por presuntos delitos cometidos por	Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal	Anual	INEGI	2018	Combate a la corrupción e impunidad	-	60

servidores públicos en 2017							
Porcentaje de población que durante los últimos 12 meses consultó páginas de internet del Gobierno (Federal, Estatal o Municipal) para conocer información sobre la forma como se organizan internamente, los programas que realiza o el uso de los recursos y dinero público, a nivel estatal	Encuesta Estatal de Percepción de Corrupción y Cultura de la Legalidad 2019	Bienal	Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza	2019	Cultura cívica y participación ciudadana para la prevención de la corrupción	-	14%
Porcentaje de población que durante los últimos 12 meses utilizó redes sociales (Twitter, Facebook, etc.) para presentar una queja, denuncia o comentario en las cuentas del gobierno (federal, estatal o municipal), a nivel estatal	Encuesta Estatal de Percepción de Corrupción y Cultura de la Legalidad 2019	Bienal	Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza	2019	Cultura cívica y participación ciudadana para la prevención de la corrupción	-	16%
Percepción sobre lo que la ciudadanía puede aportar en el combate a la corrupción, a nivel estatal	Encuesta Estatal de Percepción de Corrupción y Cultura de la Legalidad 2020	Bienal	Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza	2019	Cultura cívica y participación ciudadana para la prevención de la corrupción	-	Poner el ejemplo: 42%, Dejar de dar mordidas: 19%, Ser más honestos: 14%, No participar en actos de corrupción: 10%, Denunciar actos de corrupción: 10%, otros 10%.
Percepción sobre lo que la ciudadanía considera que es el principal responsable de la corrupción, a nivel estatal	Encuesta Estatal de Percepción de Corrupción y Cultura de la Legalidad 2021	Bienal	Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza	2019	Cultura cívica y participación ciudadana para la prevención de la corrupción	-	Gobierno: 61%, Es cultural: 22%, Ciudadanía: 8%, Gobierno y ciudadanía: 8%
Acciones de la ciudadanía cuando presencia acto de soborno, a nivel estatal	Encuesta Estatal de Percepción de Corrupción y Cultura de la Legalidad 2021	Bienal	Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza	2019	Cultura cívica y participación ciudadana para la prevención de la corrupción	-	Nunca he visto a otra persona dar una "mordida/soborno": 41%, Siento coraje/ Me Molesto: 20%, Criticar la situación: 8 %, Me quedo

							callado (a): 7%, Decirle que está mal: 7 %, Denunciarlo: 2%.
Respeto de la ciudadanía hacia leyes y reglamentos, a nivel estatal	Encuesta Estatal de Percepción de Corrupción y Cultura de la Legalidad 2021	Bienal	Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila de Zaragoza	2019	Cultura cívica y participación ciudadana para la prevención de la corrupción	-	Algunas: 57%, Pocas: 35%, Todas: 5%, Ninguna: 3%.
Índice Global de Impunidad MÉXICO	Índice Global de Impunidad	Bienal	Universidad de las Américas de Puebla (UDLAP)	2018	Combate a la corrupción e impunidad	69.8	77.9
Personal capacitado en materia anticorrupción en 2018	Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Servicios Penitenciarios Estatales (CNGSPSPE)	Anual	INEGI	2019	Recurso humano y profesionalización del servicio público	178,069	-
Cobertura temática en capacitación en materia anticorrupción en las APE	Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Servicios Penitenciarios Estatales (CNGSPSPE)	Anual	INEGI	2019	Recurso humano y profesionalización del servicio público	-	9/11
Ley de Servicio Profesional de Carrera a nivel estatal	CIDE	-	-	-	Recurso humano y profesionalización del servicio público	-	No
Usuarios que experimentaron algún acto de corrupción en al menos uno de los trámites que realizaron y tuvieron contacto con algún servidor público	Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG)	Bienal	INEGI	2019	Recurso humano y profesionalización del servicio público	140,425	15,410
Número de entidades que cuentan con Ley de Servicio Profesional de Carrera	CIDE	-	-	-	Recurso humano y profesionalización del servicio público	7	-